

Investigar  
Campo de Mayo

5

# Campo de Mayo en la historia política argentina (1943-1976)





## **Autoridades**

Presidente de la Nación

**Alberto Fernández**

Vicepresidenta de la Nación

**Cristina Fernández de Kirchner**

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

**Martín Soria**

Secretario de Derechos Humanos

**Horacio Pietragalla Corti**

Archivo Nacional de la Memoria

**Marcelo Castillo**

Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales

**Andrea Copani**

**Investigar  
Campo de Mayo**

**5**

## **Campo de Mayo en la historia política argentina (1943-1976)**

Coordinación de la colección  
**Marcelo Castillo y Rodrigo González Tizón**

Coordinación del número  
**Rodrigo González Tizón**

Autores del número  
**Facundo Fernández Barrio  
Rodrigo González Tizón  
Leandro Porcellini**

Corrección editorial  
**Paula Franco Häntzsch**

Diseño y diagramación  
**Darío Addesi**

Archivo Nacional de la Memoria. Campo de Mayo en la historia política argentina (1943-1976)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  
Secretaría de Derechos Humanos, 2023.  
86 p.; 21x29,7 cm. – (Investigar Campo de Mayo. 5)  
1. Historia Argentina. 2. Campo de Mayo. 3. Historia política. I. Título.  
ISSN 2796-969X



# Presentación

Detrás del objetivo de reconstruir el rol de la mayor guarnición militar del país en la historia política argentina del siglo XX se encuentra el interés más profundo por comprender qué es Campo de Mayo. Sabemos que fue uno de los mayores centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar, que en su interior funcionaron distintos espacios de cautiverio, una maternidad clandestina y una pista de aviación desde la que partieron los llamados “vuelos de la muerte”. También, que el Comando de Institutos Militares y sus distintas escuelas con asiento en la guarnición tuvieron a su cargo el despliegue del terrorismo de Estado en la Zona de Defensa 4, jurisdicción que abarcó un amplio territorio de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Gracias al activismo de familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos y al avance de las causas judiciales por los crímenes de lesa humanidad, sabemos además que buena parte de sus víctimas fueron activistas sindicales y políticos de distintas tendencias que militaban en dicho territorio.

Sin embargo, sabemos menos de qué fue y qué hizo la guarnición de Campo de Mayo en las décadas que van desde su fundación, en 1901, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. ¿Cuáles fueron las razones que impulsaron la creación de un gran campo de maniobras en la zona norte del conurbano bonaerense? ¿De qué manera se relacionaba el proyecto de Campo de Mayo con

las aspiraciones de las clases dirigentes argentinas de comienzos del siglo XX? ¿Cómo se instalaron las primeras unidades que tuvieron asiento en la guarnición y que muy tempranamente le otorgaron una dotación de hombres y un poder de fuego particular dentro del mapa castrense? ¿Qué participación tuvo Campo de Mayo en distintos episodios represivos de la historia argentina y en los sucesivos golpes de Estado que atravesaron al país entre 1930 y 1983? ¿Cuál fue el peso de la guarnición en la conformación de un poder militar que condicionó la vida política nacional a lo largo de todo el siglo XX y que, desde la segunda mitad de la centuria, se alineó con los postulados contrain-surgentes de la Guerra Fría?

Para responder a estas preguntas fue necesario recorrer con atención los posicionamientos y los cambios en la composición interna de Campo de Mayo a lo largo de más de siete décadas. Dar sentido a esas posturas y transformaciones implicó, además, ponerlas en relación con procesos históricos más amplios del orden nacional e internacional de los que participó un amplio espectro de actores civiles y militares. Para recuperar la historia específica de la guarnición fue preciso, además, recurrir a bibliografía especializada y a fuentes documentales de distinto tipo, escritas y orales, muchas de ellas bajo guarda de archivos y bibliotecas del ejército. Algunos de esos documentos nunca se habían analizado y otros, aunque ya utilizados en el marco de otras investiga-

ciones, fueron abordados por primera vez desde la óptica de Campo de Mayo.

Los resultados de la investigación están disponibles en dos volúmenes de la colección *Investigar Campo de Mayo*, impulsada desde el Archivo Nacional de la Memoria en el contexto del proyecto de construcción de un Espacio de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos en un sector de la guarnición. El primero, lanzado en julio de 2022, estudia el rol de Campo de Mayo en la historia política argentina entre 1901 y 1943, año del golpe de Estado contra el presidente Ramón Castillo que puso fin a la llamada “Década Infame”. La publicación hilvana un recorrido en el que la guarnición pasó de ser un espacio para albergar ejercicios y maniobras en el contexto de la gran reforma del arma terrestre de comienzos del siglo XX a configurarse como el vector principal de un poder militar que llegó para quedarse en el territorio de la política civil, incidiendo de un modo determinante en su devenir.

Este segundo número de la colección se interna en un período clave para entender el papel de Campo de Mayo en la represión de la historia reciente argentina. No sólo se analizan los posicionamientos cambiantes de la guarnición ante Perón y el peronismo, sino también su rol en el ciclo de violencia estatal y autoritarismo que se abrió con el golpe de Estado de septiembre de 1955 y desembocó en la última dictadura cívico-militar. El recorrido por los distintos gobiernos constitu-

cionales –de democracia restringida por la proscripción del peronismo– y dictaduras muestra cómo, de un modo no lineal ni exento de contradicciones, Campo de Mayo se erigió como uno de los núcleos principales –si no el más importante– de un poder militar que proyectó su sombra sobre los destinos de la nación a lo largo de cuatro décadas. E incluso más allá, si pensamos en los levantamientos carapintadas de la década de 1980 y comienzos de la siguiente.

Sin pretender dar una respuesta acabada a los interrogantes que surgen al pensar sobre el rol que le cupo a Campo de Mayo en el devenir histórico nacional, esta publicación ofrece algunas claves para empezar a responderlos. En este sentido, el trabajo que se presenta a continuación mantiene los objetivos que esta colección se trazó desde un inicio. De lo que se trata, más que de aportar interpretaciones definitivas, es de abrir el camino hacia nuevas preguntas que inviten a profundizar el estudio sobre la historia de una guarnición desde la cual es posible leer muchos de los episodios de violencia, represión estatal y autoritarismo que atravesaron el siglo XX argentino.

**Marcelo Castillo**  
**Rodrigo González Tizón**

# Introducción

En los treinta años que siguieron al golpe de Estado de junio de 1943, Campo de Mayo experimentó una serie de transformaciones que fueron producto de procesos globales y locales. Analizar las intervenciones de la guarnición en la política nacional durante un período extenso permite contemplarlas en relación a cambios muy significativos que atravesaron el contexto internacional –político, militar e ideológico–. El punto de partida de este trabajo se vincula con el curso de la Segunda Guerra Mundial (SGM) y el momento en que Alemania y sus aliados comenzaron a encaminarse hacia la derrota. El final del conflicto y la configuración del mapa de la posguerra fueron decisivos para la política exterior argentina y para sus Fuerzas Armadas (FFAA) que vieron volverse insostenibles la neutralidad y la prescindencia frente a los enfrentamientos iniciados en Europa bajo la creciente presión de los Estados Unidos y su posición hegemónica en el continente. Esta tendencia se profundizó cuando quedó planteado el esquema de la Guerra Fría, con un mundo organizado en torno a la tensión latente entre el bloque socialista liderado por la Unión Soviética y el occidental encabezado por la potencia americana. En ese contexto, fue determinante el paso dado por los militares argentinos, que los condujo de la desconfianza y el rechazo inicial a un acercamiento hacia los Estados Unidos. En primera instancia, el nexo estuvo dado por la provisión de armas y materiales bélicos, contracara de concesiones diplomáticas parciales otorgadas por la Argentina. Pero luego dio lugar a la inspiración doctrinaria, fundamentalmente a través de la mirada contrainsurgente y la concepción de la seguridad nacional que asignaba a los ejércitos de cada país la responsabilidad de contener el “avance comunista”, al que se veía impulsado desde el exterior, pero cuya principal preocupación eran las poblaciones locales. En ese sentido, el anticomunismo implicó un elemento de cohesión en cuerpos de

oficiales fragmentados en sus opiniones políticas, representando también un medio de integración efectivo y un acercamiento de las Fuerzas Armadas argentinas a la orientación e institucionalidad interamericana animadas por Estados Unidos.

A la vez, Campo de Mayo también fue testigo de los importantes cambios que tuvieron lugar en el plano de la historia de la guerra y el desarrollo armamentístico. La SGM consolidó tendencias que atravesaron todo el siglo XX, como el uso de la aviación, los vehículos motorizados, las armas automáticas y otras de gran poder destructivo. Las armas tradicionales que organizaban los ejércitos, como la infantería y la caballería, se vieron atravesadas por profundos procesos de transformación. Esta última, con una presencia destacada en la guarnición a lo largo de todo el siglo, vio como los jinetes y unidades a caballo que habían salido de los cuarteles para derrocar a Castillo en 1943 dejaron su lugar a los tanques y blindados que torcieron el curso de los acontecimientos que enfrentaron a “azules” y “colorados” en 1962 y 1963. Al mismo tiempo, la reforma del ejército implementada por el bando “azul” vencedor consolidó la imagen de Campo de Mayo que sedimentaría en la década de 1970 –un espacio especialmente dedicado a la formación del personal del ejército, asiento de escuelas y unidades de servicios– una vez relocalizados los últimos regimientos y comandos de combate.

Esta publicación aborda una serie de acontecimientos en los que Campo de Mayo fue protagonista y otros que tuvieron lugar en la propia guarnición, insertándolos en la trama política de la que formaron parte. De ese modo, propone un acercamiento a distintos modos de intervención del acantonamiento que influyeron en los diferentes escenarios, a la vez que exhibe los límites que la acción de otros actores sociales y políticos impuso a los propios militares. Una mirada matizada del poder militar, contemplando su capacidad de en-

carnar proyectos políticos e ideológicos eventualmente antitéticos, representa (aquí también) un instrumento útil para abordar la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX y, en particular, en el proceso que se abre con el golpe de Estado de septiembre de 1955. Fue ahí cuando el poder militar se convirtió en un vector decisivo y omnipresente del ciclo político argentino como garante último de la proscripción de la fuerza mayoritaria, el peronismo. Precisamente porque las diferencias y tensiones políticas se expresaron y atravesaron a los cuerpos de oficiales de las Fuerzas Armadas, los conflictos se dirimieron a través de la amenaza y el uso efectivo de las armas. Una y otra vez, Campo de Mayo y su importante poder de fuego cobraron protagonismo. Desde el monopolio de la fuerza, los militares impusieron a la sociedad argentina diversas salidas autoritarias en los diferentes escenarios políticos que se sucedieron hasta la crisis general de la llamada “Revolución Argentina” que culminó en las elecciones libres de 1973. En 1976, se repitió la fórmula en su variante extrema: el terrorismo de Estado y su plan de exterminio, en el cual –como se señaló– Campo de Mayo desempeñó un papel fundamental.

Los capítulos de esta publicación ponen el foco en un conjunto de episodios y procesos. En primer lugar, se examina el papel que le cupo a la guarnición en la emergencia del liderazgo político de Juan Domingo Perón y el enfrentamiento

crucial que tuvo a ambos como protagonistas en octubre de 1945. En el segundo capítulo, se aborda el intento del general retirado Benjamín Menéndez, conspirador consuetudinario, de sublevar sus unidades y otras bases militares para derrocar a Perón en septiembre de 1951. La tercera parte se centra en la actividad golpista de junio y septiembre de 1955 y examina el rol de Campo de Mayo durante la “Revolución Libertadora” y bajo la presidencia de Frondizi. En el cuarto capítulo, se analiza el conflicto interno abierto del ejército y el papel destacado de Campo de Mayo en la confrontación entre “azules” y “colorados” y la hegemonía del bando “azul”, primero durante la presidencia de Illia y luego bajo las dictaduras de Onganía y Levingston. En este período también se examina la reestructuración del ejército y la imposición del paradigma conceptual contrainsurgente a medida que crecía la impugnación de jóvenes fuerzas político-militares que cuestionaban los fundamentos del poder militar. Por último, el quinto capítulo muestra los cambios producidos en Campo de Mayo y en el arma terrestre en el período que va desde la presidencia de Cámpora, retomando previamente la dictadura de Lanusse, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, concentrándose en aquellos episodios decisivos en la configuración represiva que adquiriría la guarnición durante la última dictadura cívico-militar.

\*Se agradecen los aportes a esta investigación de distintas áreas que conforman la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Archivo Nacional de la Memoria (Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos, Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales, Coordinación de Investigaciones Históricas, Coordinación de Gestión de Fondos Audiovisuales, Coordinación de Gestión de Fondos del Archivo de la Conadep-SDH, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, Unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica); el Ministerio de Defensa de la Nación (Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario); a la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires; y a distintos repositorios documentales (Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Biblioteca del Congreso de la Nación, Servicio Histórico del Ejército).

## Campo de Mayo contra Perón

Campo de Mayo tuvo lugar protagónico en el golpe de Estado que derrocó al presidente Ramón Castillo en junio de 1943. La reunión en la Escuela de Caballería, cuyos pormenores se reconstruyeron en el volumen de la colección que abarca el período 1901-1943, marcó el punto de confluencia entre los jefes con mando de tropa de la guarnición y el Grupo de Oficiales Unidos o, como también se lo conoció, Grupo Obra de Unificación (GOU). Aunque todavía en Campo de Mayo no se tenía pleno conocimiento del GOU, desde las primeras jornadas que siguieron al alzamiento y en los intentos de conformación del gobierno revolucionario ya se percibían las tensiones entre los dos principales bloques de poder militar que animaban a la dictadura. Cuando el general Arturo Rawson, presidente por unas horas, eligió a una serie de dirigentes asociados al orden conservador para el nuevo gabinete, desde el GOU se pronunciaron rápidamente para señalar que no habían sido tenidos en cuenta distintos coroneles de la 1ª y 2ª División del Ejército. Como comandante de Campo de Mayo, el coronel Elbio Anaya intentó interceder frente al nuevo presidente para que revisara su decisión, pero chocó contra la obstinación de Rawson y una serie de movimientos que apuntaban a fortalecer al ministro de Guerra que provenía de la gestión de Castillo<sup>1</sup>.

En ese escenario, Campo de Mayo, con su comandante a la cabeza, fue decisivo para minar el poco sostén del que gozaba Rawson, con la promoción del general Pedro Ramírez para llegar a la presidencia de la Nación. El movimiento le per-

mitió al GOU, y en particular al coronel Juan Domingo Perón, fortalecer su posición en el nuevo gobierno al ocupar la jefatura de la Secretaría del Ministerio de Guerra, un cargo similar a una subsecretaría. El nuevo gabinete incluyó al coronel Anaya como ministro de Justicia e Instrucción, lo que generó un relevo en la comandancia de Campo de Mayo. La jefatura de la guarnición no recayó en un oficial de caballería sino sobre uno de los líderes de la revolución del 4 de junio: el entonces coronel Eduardo Avalos, hasta el momento director de la Escuela de Artillería. Este cambio sería clave en la configuración de la relación de Campo de Mayo con Perón en los meses siguientes y en la articulación de los bloques de poder militar durante la dictadura instaurada en 1943.

### Del desafío abierto al acompañamiento del ascenso de Perón

La confluencia que dio lugar al reemplazo de Rawson rápidamente quedó atrás y abrió paso a tensiones entre los oficiales del GOU, que aumentaban su influencia bajo el amparo del general Ramírez, y los jefes de las unidades de Campo de Mayo, que consideraban ser los verdaderos artífices de la revolución. En articulación con intelectuales nacionalistas que editaban la revista *Ahora*, desde el GOU comenzó a propagarse la idea de que el levantamiento había sido esencialmente obra suya y de Perón. Al mismo tiempo, el entonces subsecretario buscaba atraer a jóvenes oficiales al GOU para ampliar su influencia entre los cuadros del ejército. Estos movimientos produjeron reacciones. Conscientes de la importancia que tenía el Ministerio de Guerra en el control de la fuerza, y atentos a cómo el coronel Perón

aumentaba su cuota de influencia gracias a la llegada que tenía al general Farrell, los jefes de Campo de Mayo decidieron pasar a la acción en julio de 1943, un mes de después de la crisis que había terminado con la efímera presidencia de Rawson.

Se reunieron en la casa del director de la Escuela de Caballería, Leopoldo Ornstein, el mismo oficial que había sido anfitrión del encuentro de aquella noche del 3 de junio en la que se había decidido derrocar a Castillo. Según el historiador Robert Potash (1980), en la reunión en la casa de Ornstein, Avalos participó como comandante de Campo de Mayo y se tomó la decisión de formar una comisión para hablar con Ramírez y pedirle que relevara a Farrell y Perón. Al presentarse en la Casa de Gobierno, los comisionados –Avalos, el coronel Mascaró y el teniente coronel Fernando Terrera– se encontraron en primer término con el flamante ministro Elbio Anaya. Preocupado por la imagen del gobierno militar y por la crisis que habían atravesado en los primeros días de junio, el antiguo jefe de Campo de Mayo se comprometió a hablar con Farrell para que limitara el accionar de Perón<sup>2</sup>. La reunión se concretó y Anaya comunicó al ministro de Guerra que los jefes de Campo de Mayo estaban furiosos con el subsecretario. Pero Perón, que contaba con una importante red de informantes, se enteró de lo conversado en la casa de Ornstein y le comentó a su jefe, Farrell, que las acciones conspirativas también apuntaban contra él y su cargo. La resolución fue drástica. Se inició una investigación interna y en pocos días Ornstein, Mascaró, entonces director de la Escuela de Infantería, y Héctor Nogues, a cargo del instituto de formación de Defensa Antiaérea, fueron relevados y enviados a unidades en el interior del

país<sup>3</sup>. El primer intento significativo de Campo de Mayo de limitar el poder de Perón acababa de ser descabezado.

Pero las medidas tomadas por el subsecretario de Guerra no se limitaron a decisiones disciplinarias. Atento al desafío que implicaba el poder de la guarnición para sus objetivos, que incluía la posibilidad de derrocarlo, buscó establecer una alianza con el nuevo jefe de Campo de Mayo, Eduardo Avalos, quien se integró al GOU y, por su antigüedad en el ejército, presidió varias reuniones del grupo en el Ministerio de Guerra. La lealtad de Avalos y la contención de la guarnición dentro del espacio de maniobra y apoyo de Perón serían claves para favorecer su ascenso como figura determinante del régimen militar instaurado en junio de 1943 y para permitirle atravesar las sucesivas crisis que enfrentaría el gobierno. El retroceso de las tropas del Eje, integrado por Alemania, Italia y Japón, en los campos de batalla europeos, sumado a la presión de los Estados Unidos por encolumnar tras la causa aliada a todo el continente americano, fue aislando y precipitando distintos escenarios críticos para el régimen militar argentino, que anclaba su política exterior en una neutralidad vista como excesivamente contemplativa con Alemania, y que basaba su mirada del orden interno en medidas de corte autoritario (Zanatta, 2018 [1996]; Ruiz Moreno, 1997). Las sucesivas

<sup>1</sup> Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts. *Historia oral de Elbio Anaya con Robert A. Potash: preguntas y notas, 1967*. Robert A. Potash Papers (FS 020). Colecciones especiales y archivos universitarios. Disponible en: <https://credo.library.umass.edu/view/pageturn/mufs020-s01-b03-f007-i001/#page/1/mode/1up>

<sup>2</sup> Idem.

<sup>3</sup> Para comprender las implicancias de un traslado de estas características hacia el interior del país, resulta útil una reflexión de Alejandro Lanusse incluida en sus memorias. Cuando se desempeñaba como teniente en un regimiento de caballería de Mendoza, siendo un joven oficial, observaba el golpe de estado de junio y las intrigas entre los militares como temas del ejército de Buenos Aires, a los que el resto de la fuerza era ajena y se enteraba por los diarios. Lanusse, A. *Protagonista y testigo (Reflexiones sobre 70 años de nuestra historia)*. Santiago de Chile: Marcelo Lugones S.A. Editores, 1989.



crisis de gobierno que se produjeron hasta el final de la guerra fueron medios en los que Perón se desenvolvió con astucia para acumular poder para sí y sus colaboradores cercanos.

Un primer momento de inestabilidad gubernamental en el que fue importante el apoyo de Avalos a Perón se produjo en los últimos meses de 1943. La intervención de Brasil a favor de los Aliados en la guerra le había permitido a este país incorporar armamento moderno, lo que alteraba el equilibrio militar regional. Preocupados por el cambio de escenario, los militares argentinos trataron de resolver la situación buscando oferentes de material bélico. En septiembre de ese año, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, almirante Storni, escribió al secretario de Estado de los Estados Unidos sugiriendo la posibilidad de que Argentina flexibilizara su posición frente a la política hemisférica estadounidense a cambio de poder comprar armamento. Pero la respuesta fue

negativa y un mes después se difundió el contenido del intercambio, lo que debilitó a los sectores favorables a los aliados y liberales, que terminaron eyectados del gabinete. La reorganización benefició al GOU y a los sectores nacionalistas que lograron hacerse de varias carteras, entre ellas, el poderoso Ministerio del Interior que recayó sobre el general Luis Perlinger, simpatizante de los regímenes fascistas europeos.

La dictadura adoptó un carácter más autoritario, con fuerte tendencia clerical (Rouquié, 1983). Al mismo tiempo, el coronel Perón se hizo cargo del Departamento Nacional de Trabajo, que en noviembre adquirió el rango de Secretaría. Desde allí tendió puentes hacia los trabajadores y parte del universo sindical, reconociendo derechos sociales y buscando ampliar las bases de apoyo del régimen militar. Algunos miembros del ejército, sobre todo oficiales con mando de tropa, se mostraron favorables a esa política, ya que ellos mismos tenían contacto con las condiciones materiales en las que vivían muchos jóvenes de los sectores populares que se integraban a cumplir con el servicio militar obligatorio en todo el país. Entre quienes mostraron algún tipo de apoyo se encontraba el comandante de Campo de Mayo Avalos, para entonces convertido en un firme aliado de Perón, quien solía visitar con regularidad las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP). Como parte del GOU y por sus vínculos con los sectores nacionalistas del ejército, ambos se beneficiaron con los cambios en el gobierno. La posición de Perón se vio aún más fortalecida cuando el general Edelmiro Farrell asumió la vicepresidencia, mientras retenía a la vez el Ministerio de Guerra.

La clausura de la opción estadounidense para comprar armas dio impulso a un plan más confortable para varios de los integrantes del gobierno. A instancias del secretario de la Presidencia, coronel Enrique González, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Gilbert, y el propio presidente Ramírez, se iniciaron negociaciones con Alemania a través de un enviado especial, Oscar Hellmuth<sup>4</sup>. Sin embargo, cuando se dispo-

<sup>4</sup>En función de su ascendencia germana y sus vínculos con dirigentes nazis en Argentina, que se estimaba podían permitirle acceder al propio Hitler, Hellmuth fue la persona elegida para ne-

nía a viajar a Europa, el delegado del gobierno argentino fue reconocido por fuerzas de los países aliados (Rouquié, 1983). En enero de 1944, la noticia llegó a la tapa de los diarios y sacudió el escenario político local. Para evitar una reacción de los Aliados y una posible difusión de los papeles que Hellmuth llevaba consigo, el gobierno de Ramírez impulsó la ruptura de relaciones con Alemania y Japón. La decisión conmocionó a los medios nacionalistas y a los oficiales jóvenes del ejército, que presionaron por la salida de González y Gilbert del gobierno. Según Potash (1980), González le dijo que la renuncia le había sido solicitada por Avalos y Perón. De ese modo, el secretario de Trabajo y Previsión se deshacía de la principal figura que podía hacerle contrapeso dentro del GOU y en el gobierno de Ramírez.

Pero la ruptura de relaciones con las potencias del Eje generó una crisis que crecía a la par del nerviosismo de los jóvenes oficiales y los sectores nacionalistas del ejército, que temían que el gene-

ral Ramírez fuera un paso más allá y les declarara la guerra<sup>5</sup>. Siguiendo una línea que el historiador Juan Orona (1966) describió como recurrente, Perón aprovechó el descontento de los mandos medios del ejército en su favor. La fórmula “Campo de Mayo se opone” fue un mecanismo a través del cual el coronel hizo conocer a Ramírez algunos de los límites de su política. La alianza con Avalos daba verosimilitud y eficacia persuasiva a las palabras de Perón. Farrell solicitó la renuncia del presidente, quien contó con la propuesta de la marina de usar sus armas contra el ministro de Guerra y su colaborador. Pero Ramírez desistió. El GOU había dejado de existir. Tras una reunión en la STP, donde se hicieron presentes coroneles de Campo de Mayo, El Palomar, Capital Federal y La Plata, se le hizo saber al presidente que ya no contaba con el apoyo de las unidades<sup>6</sup>. Ese fue el

<sup>5</sup>Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts. *Historia oral de Indalecio Sosa con Robert A. Potash: notas, 1967*. Robert A. Potash Papers (FS 020). Colecciones especiales y archivos universitarios. Disponible en: <https://credo.library.umass.edu/view/full/mufs020-s01-b05-f013-i001>

<sup>6</sup>Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts. *Historia oral de Eduardo Avalos con Robert A. Potash: preguntas y notas, 1967*. Robert A. Potash Papers (FS 020). Colecciones especiales y archivos universitarios. Disponible en: <https://credo.library.umass.edu/view/full/mufs020-s01-b05-f013-i001>



Avalos y Perón, un vínculo que se prolongó por más de dos años, retratado en *Primera Plana*. Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.



El diario *La Nación* refleja la salida del general Ramírez y la entrega del poder a Farrell. Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.



argumento que esbozó Ramírez en el texto de su renuncia, que se hizo efectiva el 9 de marzo de 1944 (Rouquié, 1983).

El acceso de Farrell a la presidencia permitió el avance de Perón hacia el Ministerio de Guerra, que en primera instancia ejerció de manera interina. Desde allí buscó diferenciarse de los nacionalistas del gobierno, para lo que dio impulso a algún entendimiento con Estados Unidos, sin mayor éxito ya que la salida de Ramírez fue vista por Washington como un movimiento favorable al Eje. En julio de 1944, Perón decidió medirse con el ministro del Interior, el simpatizante del fascismo Perlinger, bajo la presunción de que era quien podía obstaculizar sus planes cada vez más enfocados hacia una posible candidatura presidencial. La disputa se dio en torno al nombramiento de uno de los dos ministros para la vicepresidencia vacante. En una asamblea de oficiales, Perón se impuso por escaso margen, pero aprovechó la debilidad del general Perlinger para informarle que el gobierno solicitaba su renuncia.

Desde el inicio de 1945, conforme se acercaba la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, se incrementaba el aislamiento del régimen militar argentino. En busca de adecuar la política internacional a las circunstancias y comenzar a delinear un futuro de posguerra, el gobierno declaró la guerra al Eje en marzo. La decisión no estuvo exenta de complicaciones, ya que la sede del Círculo Militar y Campo de Mayo se convirtieron en espacios de deliberación de oficiales del ejército que, encabezados por el sector nacionalista, reclamaron la salida de Perón. Posiblemente gracias a las circunstancias exteriores, a los apoyos obtenidos en el cuerpo de oficiales y a la alianza con Avalos aún vigente, el coronel logró resistir el accionar en su contra. Sin embargo, el nuevo alineamiento que dio lugar a un acercamiento oficial a Estados Unidos y a los opositores civiles en el país no produjo los resultados esperados. En medio del entusiasmo por la liberación de las capitales europeas bajo control alemán, las calles de Buenos Aires se llenaron de simpatizantes de la causa aliada que esperaban la caída del gobierno militar, al que identificaban con los declinantes

regímenes fascistas europeos. Algunos sectores de la oposición civil y los partidos políticos exigían la entrega de la primera magistratura a la Corte Suprema. El gobierno respondió con detenciones masivas y la imposición del estado de sitio, lo que no hizo más que reforzar la imagen que ya producía entre sus detractores (Torre, 1990).

En julio, Farrell anunció que habría elecciones antes de fin de año y que el ejército no postularía a ningún candidato. Pese a sus declaraciones, desde la STP, en sintonía con sindicatos y algunos de sus colaboradores, Perón construía el camino hacia su candidatura presidencial. Para algunos oficiales del arma terrestre, esa alternativa constituía una posible salida decorosa al atolladero en que se encontraba la fuerza, impugnada en su conjunto por la oposición política civil. En cambio, otros integrantes del ejército y también de la armada mostraban un ostensible rechazo a la gestión y la posible candidatura de Perón. A las conspiraciones siempre activas de personal retirado, viejos liberales justistas y también nacionalistas, se fueron sumando miembros del ejército en actividad.

Un primer anuncio fue el reclamo de un sector de oficiales de la armada que, con apoyo de algunos generales, exigieron la exclusión de Perón del gobierno a fines de julio. Pero una de las principales preocupaciones que se presentaron al ministro de Guerra fue la emergencia de tensiones con algunos oficiales que lo habían apoyado hasta ese momento, entre ellos, el general Avalos y los jefes de unidades de Campo de Mayo. Un primer desencuentro terminó con la salida de un ministro del gabinete. El ministro de Hacienda, Ceferino Alonso Yrigoyen, consideraba inoportuno liberar una partida de fondos solicitada por el mayor Juan Constantino Quaranta, jefe del Estado Mayor del Comando de Campo de Mayo e interventor a cargo de los ferrocarriles. Perón, que entonces ocupaba la presidencia interinamente por un viaje de Farrell a Paraguay, desconfiaba de la lealtad de Quaranta y por eso respaldó la decisión de Alonso Yrigoyen. Testigos señalaron que escucharon decir a Avalos: “Cuando Campo de Mayo pide algo, se cumple, y no voy a permitir que un oficial del ejército sea engañado de este

modo”<sup>7</sup>. Al regreso de Farrell, el asunto terminó con la salida de Alonso de Hacienda. En una entrevista concedida muchos años después, el entonces comandante de Campo de Mayo recordó que, ya para julio, consideraba que Perón recurría a engaños y artilugios para obtener lo que quería. Era una crítica que hacían otros oficiales que creían que esas prácticas estaban reñidas con la camaradería que debía respetarse entre militares.

Otro tema que generaba mucha resistencia entre los oficiales del ejército era la figura de Eva Duarte, pareja de Perón, a quien atribuían una gran influencia sobre este y por extensión sobre la marcha del gobierno. En la crítica pesaban concepciones arraigadas entre los militares de la época. El director de Gendarmería, general Fortunato Giovannoni, que se había sumado a las actividades conspirativas, le presentó un reclamo a Perón en su propio despacho que expresaba la opinión de otros jefes de la fuerza: “Estás dando un mal ejemplo para el ejército llevando a Eva Duarte a tu residencia oficial de Campo de Mayo”<sup>8</sup>. Se refería a la casa que históricamente utilizaban los ministros de Guerra en la guarnición. Los prejuicios se asociaban a que los militares no consideraban a Duarte una “mujer decente”, además de que la pareja aún no había contraído matrimonio.

En un escenario que se volvía cada vez más delicado, comenzaban a tenderse puentes entre la oposición civil y militar contra el coronel Perón. Fortalecidos por la caída de Japón en agosto, con el apoyo abierto de los Estados Unidos y con el empuje que creían recibir del viento de la historia, civiles adversarios del gobierno reforzaron su actividad y salieron masivamente a las calles en un intento de provocar una rendición incondicional del gobierno militar. El 19 de septiembre realizaron una importante manifestación bajo el lema de “Marcha de la Constitución y la Libertad”. Aunque se esperaba el acompañamiento de un levantamiento militar capaz de derrocar a Farrell y Perón, el movimiento no se produjo: aún persistían diferencias entre los integrantes antiperonistas de las Fuerzas Armadas. El general Rawson, quien había ocupado la presidencia por unos pocos días

en 1943, y la armada estaban dispuestos a ceder el gobierno a la Corte Suprema. Los oficiales antiperonistas de la Escuela Superior de Guerra (ESG) y de las unidades de Campo de Mayo pensaban que ese movimiento suponía una capitulación deshonrosa para el régimen militar al que pertenecían: avalaban la idea de terminar con el ascenso de Perón, pero preferían la continuidad de Farrell al frente de la presidencia.

El 24 de septiembre se produjo en Córdoba el levantamiento de integrantes de la 4ª División del Ejército, cuyo comandante, Juan Osvaldo Martín, lanzó una proclama revolucionaria junto al general Rawson que fue rápidamente contenida. Contaban con apoyo de un importante sector de la oficialidad de la armada que se oponía tenazmente a Perón<sup>9</sup>. Con información suministrada por un integrante de la aeronáutica, una unidad cordobesa del arma de artillería del ejército leal al gobierno logró cercar y detener a los sublevados. Entre los detenidos se hallaba el teniente Franklin Rawson, hijo del general y yerno del comandante de la 4ª División que también integraba. El general Martín fue relevado y Rawson fue detenido, pero el fracaso de ambos no frenó las conspiraciones.

## Campo de Mayo y Perón, frente a frente

El distanciamiento entre Perón y el comandante de Campo de Mayo tomó volumen en los pri-

<sup>9</sup> El 23 de septiembre también se difundió un memorándum de oficiales retirados de la Marina, opuestos a Perón y Farrell, reclamando que el gobierno no tuviera candidato alguno en las elecciones. (Ruiz Moreno, 1998)



El embajador de Estados Unidos Spruille Braden, al frente de la oposición a Farrell y Perón, retratado por *Primera Plana*. Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

<sup>7</sup> *Primera Plana*, N° 144, 10 de agosto de 1965.

<sup>8</sup> *Primera Plana*, N° 138, 29 de junio de 1965.

meros días de octubre de 1945. Aunque algunos asesores de Perón en el Ministerio de Guerra recomendaban el relevo de Avalos y los principales jefes de la guarnición, Perón consideró inoportuno el momento<sup>10</sup>. Seguía confiando en la lealtad de Avalos y, sobre todo, temía el malestar que su salida provocaría entre sus subordinados, dada la ascendencia que este ejercía sobre los jefes de las unidades de tropa del acantonamiento.

Pero las discrepancias se agudizaron a partir del nombramiento de un funcionario ligado a Eva Duarte, Oscar Nicolini, en la Secretaría de Correos y Telecomunicaciones. Los jefes de Campo de Mayo, con Avalos a la cabeza, se opusieron a su nombramiento, no solo por quién lo promovía sino también porque juzgaban que ese lugar debía ocuparlo el director de la Escuela de Comunicaciones, teniente coronel Francisco Rocco<sup>11</sup>. Luego de una discusión entre Avalos y Perón en la casa del coronel<sup>12</sup>, ambos quedaron en volver a reunirse en el Ministerio de Guerra un par de días después. Allí Perón expondría frente a los jefes de las unidades su versión de los hechos y por qué no podía incidir en el nombramiento de Nicolini. Esa mañana, los jefes de Campo de Mayo se dirigieron al centro de Buenos Aires, pero en la guarnición, los segundos jefes alistaron sus unidades como precaución frente a un eventual desarrollo desfavorable de la reunión<sup>13</sup>. Al llegar al ministerio, los enviados se encontraron con que también habían sido convocados jefes de unidades de la Capital Federal y otras reparticiones favorables a Perón. Allí se les planteó que Campo de Mayo no era el ejército y que debían acatar las decisiones de la fuerza.

Derrotado y sin disposición para cumplir las órdenes del ministro de Guerra, Avalos manifestó su decisión de pedir el retiro<sup>14</sup>. Al volver a

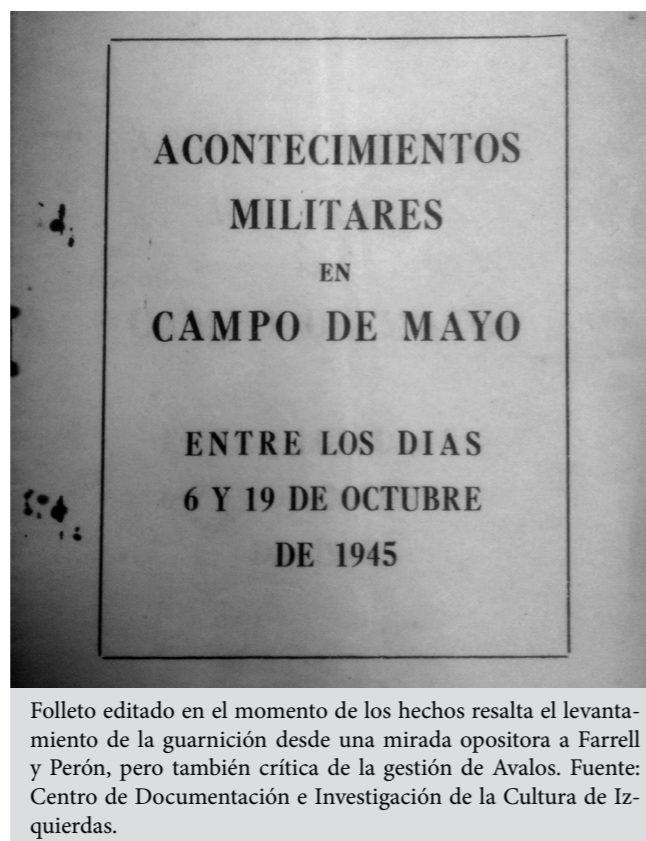
<sup>10</sup> El jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, Franklin Lucero, sugirió los relevos a Perón e incluso llegó a redactar las órdenes. Ver Lucero, F. *El precio de la lealtad. Injusticias sin precedentes en la tradición argentina*. Buenos Aires: Propulsión, 1959.

<sup>11</sup> Idem.

<sup>12</sup> Para una descripción más detallada del desarrollo de esta reunión, ver Luna (1971).

<sup>13</sup> *Acontecimientos militares en Campo de Mayo entre los días 6 y 19 octubre de 1945* [Folleto]. Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, CeDIInCI.

<sup>14</sup> Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts. *Historia oral de Eduardo Avalos con Robert A. Potash: preguntas y notas*,



la guarnición, reunió a los jefes de las unidades en el comando y les comunicó sus planes. Entre los presentes hubo dos posiciones: los que preferían esperar para ver cómo evolucionaban los acontecimientos y los que pretendían aprovechar el alistamiento de las tropas para contraatacar y marchar a exigir la renuncia de Perón. Avalos advirtió que había que evitar una guerra civil y pospuso las deliberaciones hasta el día siguiente. Las novedades llegaron hasta oídos de Perón, quien envió a un asesor a Campo de Mayo para evaluar el estado de situación. El enviado no notó nada extraño y, tras conversar con Avalos, que delante suyo se comunicó con Perón, retornó a la Capital<sup>15</sup>. Sin embargo, esa noche se produjo una nueva reunión, posiblemente en la Escuela de Infantería, de los jefes de las unidades junto a otros oficiales de la guarnición<sup>16</sup>. Decidieron movilizarse para reclamar la renuncia de Perón y pedirle a Avalos que se pusiera al frente del movimiento.

1967.

<sup>15</sup> Lucero, F. *Op. cit.*

<sup>16</sup> Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts. *Historia oral de Eduardo Avalos con Robert A. Potash: preguntas y notas*, 1967.

El comandante de Campo de Mayo aceptó, pero les pidió que no marcharan hasta que él hablara con el presidente Farrell, a quien invitó a tomar conocimiento en persona de lo que ocurría en la guarnición<sup>17</sup>.

En las primeras horas de la tarde, Farrell acudió a Campo de Mayo acompañado por varios generales: Juan Pistarini, Carlos von der Becke, comandante en jefe del ejército, Pedro Jandula, comandante de la 1ª División de Caballería, el coronel Indalecio Sosa, jefe de la 1ª Brigada de Caballería con asiento en Palermo, y el ministro del Interior, Hortensio Quijano. Los jefes de las unidades de Campo de Mayo, encabezados por Avalos, hicieron saber a Farrell que ya no soportaban al ministro de Guerra, sus estrategias y sus métodos. El presidente ofreció liberar la cartera de Guerra, pero que Perón continuara sus funciones como secretario de Trabajo y Previsión y al frente de la vicepresidencia. Farrell alertó a sus interlocutores sobre la posible reacción de los trabajadores y sindicatos que apoyaban al coronel si se procedía como ellos pretendían, pero no logró convencerlos y tuvo que ceder para salvar su gobierno. Tras una breve negociación, de la que solo participaron el presidente, los generales presentes y el ministro del Interior junto a Avalos y unos pocos oficiales, resolvieron enviar una comitiva integrada por los generales Pistarini y von der Becke, Sosa y Quijano a pedirle la renuncia a Perón. Partieron de Campo de Mayo en la tarde de aquel 9 de octubre. Avalos les advirtió que si en pocas horas no regresaban con la dimisión del ministro de Guerra, las unidades de la guarnición marcharían sobre Buenos Aires nuevamente. La comisión se presentó poco después en la casa de Perón. Consciente del esfuerzo que Farrell había hecho por defenderlo, el coronel entregó su renuncia. En menos de dos horas, la comitiva regresó con el documento a la guarnición. De ese modo se consumaba el golpe de Campo de Mayo contra Perón, el hombre más poderoso del gobierno militar, candidato a darle continuidad al régimen instaurado en junio de 1943 en las futuras elecciones.

<sup>17</sup> *Acontecimientos militares en Campo de Mayo entre los días 6 y 19 octubre de 1945*, *Op. cit.*

Así, la guarnición no solo había logrado imponerse una vez más a un presidente de la Nación, sino que también deponía por primera vez al ministro de Guerra, figura central del poder militar en la época<sup>18</sup>. Perón hizo un intento por posicionarse como su sucesor a un hombre de su confianza pero, al enterarse de la maniobra, un puñado de jefes de unidades de Campo de Mayo se desplazó hasta la residencia de Farrell en la Capital y reclamó la cartera para Avalos<sup>19</sup>. Una vez más amenazaron con movilizar tropas hacia Buenos Aires si no se oían sus demandas. Al día siguiente, el 10 de octubre, Avalos asumió como ministro de Guerra a la vez que conservaba su mando sobre la guarnición, lo que lo convertía en la figura clave del régimen y del poder militar.

Campo de Mayo y Avalos se hicieron de ese modo del control del gobierno y, en buena medida, del ejército, pero aun así estaban lejos de tener el dominio total de la situación. El levantamiento de la guarnición pretendió resolver la crisis política con la salida de Perón, pero sus mandos no estaban dispuestos a sellar la derrota de la revolución del 4 de junio con la entrega del gobierno a la Corte Suprema, tal como reclamaba la oposición civil. Avalos se enfrentó al interrogante de qué hacer con las redes de poder que había tejido Perón y se movió de manera errática. Los ministros ligados al coronel dejaron el gabinete una vez que la presión se volvió insostenible (Potash, 1980). Pero la renovación ministerial se produjo cuando el esquema de poder surgido el 9 de octubre ya naufragaba. Avalos permitió que Perón se despidiera de los trabajadores desde la STP en un discurso que fue transmitido por la cadena oficial de radiodifusión. Perón dejó entrever que la política a favor de los obreros llevada a cabo por la Secretaría corría peligro, y vinculó el levantamiento militar con aquellos que se oponían al proyecto de incluir a los trabajadores en las ganancias de las empresas. La proclama apuntaba a producir una reacción en los trabajadores y sus organizaciones para responder al ataque recibido.

La respuesta obrera comenzó a gestarse, pero

<sup>18</sup> Además del propio Perón y sin contar a Arturo Rawson, quien ocupó la presidencia por horas, los dos presidentes que siguieron a Ramón Castillo venían de ocupar el ministerio de Guerra.

<sup>19</sup> *Primera Plana*, N° 153, 12 de octubre de 1965.



# RENUNCIO EL GABINETE: SE RECONSIDERARA EL ESTATUTO

Generales y Almirantes Deliberaron Sobre la Grave Crisis en el Círculo Militar. Enorme Público en la Plaza San Martín. Civiles de Prestigio Integrarán el Gabinete. Designóse Para Marina al Contraalmirante Vernengo Lima, Quien Habló al Pueblo Reunido

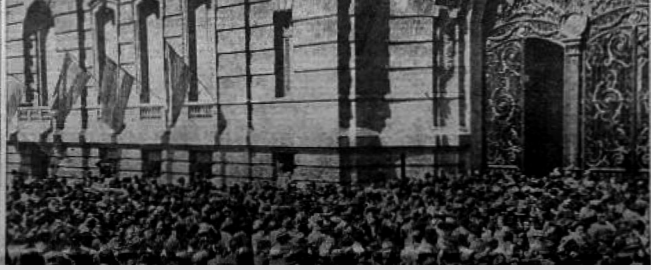
Prometióse que Exigirán a los Culpables Responsabilidad

Una intensa actividad oficial caracterizó la jornada de ayer, después de haber asumido su cargo el nuevo ministro de Guerra, general de Ejército Juan Manuel de Rosas, y el jefe del ejército, general de Brigada Antonio Riquelme, al ser designado el primero y el segundo en el cargo de la presidencia. Más tarde, el primer vicepresidente acompañó por varios de los jefes presentes, se trasladó a la Secretaría de Hacienda para saludar a su jefe, el general Farrell, y a su secretario, el doctor Antillón, y se retiró al Círculo Militar para dirigirse a la residencia de la avenida Alvear, mientras el general Rosas se trasladó a su despacho del Ministerio de Guerra para firmar los decretos de designación de los nuevos ministros de Guerra y Marina y del Contraalmirante Vernengo Lima, de donde regresó a la Casa Rosada a las 18, coincidiendo en su camino con el presidente. El despacho de día se expresaron varias generales, cuya destino fue asignado en la capital federal y otras de las comarcas divisionales. Había sido convenido por el jefe de Estado. La reunión se prolongó hasta las 20, cuando se dio fin al día. En el momento de salir del edificio de la Presidencia se dio fin al día. En el momento de salir del edificio de la Presidencia se dio fin al día.

## 5ª LA RAZON

AÑO XLI BUENOS AIRES, VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 1945 NUMERO 15.313

### EL PUEBLO AGOLPADO FRENTE AL CIRCULO MILITAR



Un Oficial del Ejército Hizo Retirar a la Policía

relativa al resquebrajamiento de los jefes del ejército y la armada se registraron algunos incidentes, pero que no alcanzaron mayor trascendencia. El primero de ellos se produjo al intentar a pasar por un lugar en el que se encontraba el ex ministro de Relaciones Exteriores, doctor Raúl Castillo. El público protestó ante una manifestación de hostilidad.

Después del mediodía se abrió la puerta de una plaza que ocupaba en el día de la semana un edificio con la sigla de un ex funcionario. Solo la intervención de los más serenos y la rapidez con que se retiró el público, que impidió que se produjera un incidente.

Entre el público, como es natural, cabe destacar que predominaban los militares. El jefe del ejército, general de Brigada Antonio Riquelme, y el jefe de la armada, general de Almirante Juan Manuel de Rosas, se encontraban en el lugar. Entre el público, como es natural, cabe destacar que predominaban los militares. El jefe del ejército, general de Brigada Antonio Riquelme, y el jefe de la armada, general de Almirante Juan Manuel de Rosas, se encontraban en el lugar.

ESCENAS EMOTIVAS  
Concomitante al lanzamiento general el grupo formado por los doctores Palacios y Bernardo Hincapié a los que se fueron uniendo los doctores Juan Manuel de Rosas, Domingo Mercante, Alberto Ponce, Carlos Sánchez Viamonte, Alejandro Caballero, Alberto Prieto, Nicolás Bonaventura, Silvio Bregno, Antonio Cheloni, José M. Berra Valletta y otros, se registraron escenas emotivas que el público contempló con reverencia y emoción. Poco después del mediodía comenzó la sesión popular al mediodía que se abrió formando algunas filas al exterior del Círculo Militar.

La Razón expresó la crisis política de gran magnitud tras el levantamiento de Campo de Mayo. Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

aquel discurso también produjo una importante conmoción entre los opositores militares y civiles a Perón. Una delegación de oficiales que realizaban el curso de Estado Mayor en la ESG se presentó en la Puerta 6 de Campo de Mayo y solicitó hablar con el ministro de Guerra para pedirle la detención del ministro de Guerra saliente. Como parte de un estado deliberativo común, otros oficiales del ejército comenzaron a congregarse en la sede del Círculo Militar en el Palacio Paz, en la ciudad de Buenos Aires. Había tres posturas sobre los pasos a seguir: sostener la presidencia de Farrell hasta el llamado a elecciones, continuar bajo la presidencia de otro militar o ceder al reclamo de entregar el gobierno a la Corte Suprema. Enterados de las deliberaciones militares, grupos civiles opositores a Perón y al régimen comenzaron a reunirse en la Plaza San Martín frente al edificio del Círculo Militar. Varios autores han caracterizado el diálogo entre quienes se encontraban dentro del Círculo y los sectores que exigían el final de la dictadura como una suerte de “cabildo

abierto” (Potash, 1980; Rouquié, 1983; Ruiz Moreno, 1998). A las discusiones entre los oficiales del ejército se sumaron integrantes de los mandos de la armada y, en algún momento, también expusieron sus puntos de vista dirigentes de los partidos políticos opositores. Una de las figuras salientes de aquellas jornadas fue el vicealmirante Héctor Vernengo Lima, líder de la reacción contra Perón en la armada. Tras asumir el Ministerio de Guerra, Avalos le ofreció la cartera de marina y Vernengo Lima se integró al gobierno<sup>20</sup>. Ambos militares asumieron juntos la representación de todos los ministerios luego de que el 12 de octubre la presión ejercida forzara la renuncia de todo el gabinete. Ese mismo día, Vernengo Lima salió a uno de los balcones del Círculo Militar y se dirigió a la multitud en la Plaza San Martín. En un ejercicio que tendía a mostrarse imposible, buscaba acercar posiciones entre el gobierno militar y la oposición civil. Como miembro de la

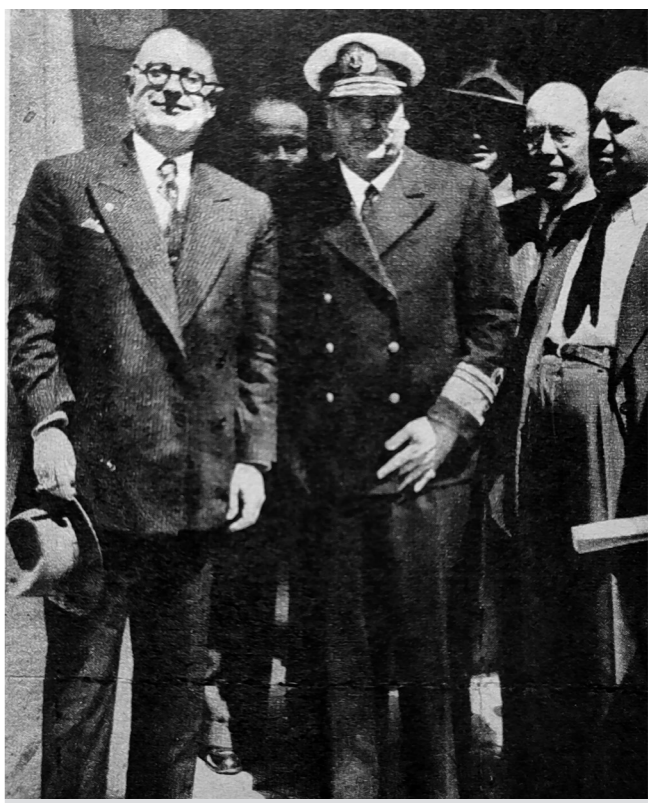
<sup>20</sup> Primera Plana, N° 152, 5 de octubre de 1965.

armada, pedía que se respetara a las Fuerzas Armadas y no se impusiera una salida que el ejército considerara indecorosa. Recibió de los presentes un contundente rechazo y el reclamo por un final inmediato del régimen.

Tras las peticiones planteadas a Farrell y Avalos por los oficiales de ambas fuerzas, y aun contra la opinión del presidente y el flamante ministro, se procedió a la detención de Perón y otros funcionarios ligados a él. El coronel fue enviado a la isla Martín García, bajo el control de la armada. Algunos otros dirigentes permanecieron detenidos en manos del ejército y fueron enviados a la prisión militar de Campo de Mayo, como se analizará más adelante.

Aun después de las medidas represivas tomadas contra los simpatizantes de Perón, la presión de los sectores antiperonistas al gobierno emanado del cuartelazo de Campo de Mayo abrió un escenario de gran incertidumbre respecto a las posibilidades de sostener una de sus banderas principales: la continuidad en la presidencia del general Farrell. Sin embargo, un desafío menos esperado, aunque significativamente potente, comenzaba a tomar cuerpo para los jefes de las unidades y el comandante de la guarnición. Desde el día de su derrocamiento, el propio Perón transmitió a sus colaboradores más cercanos la necesidad de preparar una huelga general y una movilización a la Plaza de Mayo. Ese fue el tono de su discurso de despedida, cuando llamó a los trabajadores a defender las conquistas sociales obtenidas desde la sede del Concejo Deliberante, donde funcionaba la STP. Fue también allí donde el 12 de octubre su nuevo titular, Domingo Mercante, expuso ante ochenta dirigentes sindicales la necesidad de impulsar la protesta. Comenzó a prepararse una huelga para el 18 de octubre. Sin embargo, el 13 se produjo la detención tanto de Perón como de Mercante, quien fue alojado en un cuarto pequeño de la Escuela de Caballería en Campo de Mayo. Los arrestos precipitaron las discusiones que tenían lugar en el seno de la Confederación General del Trabajo (CGT)<sup>21</sup>. Preocupado por la reacción sindical, Avalos anunció que

<sup>21</sup> Para un mayor detalle de las deliberaciones que tuvieron lugar en el movimiento sindical a partir del derrocamiento de Perón, ver Torre (1990).



Avalos y Vernengo Lima, que concentraron el poder tras la renuncia de Perón y del resto del gabinete nacional, en una imagen recuperada por Primera Plana. Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

las medidas favorables a los obreros serían respetadas e indicó que Perón no estaba preso contra su voluntad, sino para preservar su seguridad.

Algunos movimientos empezaron durante la tarde del martes 16, pero los principales desplazamientos de trabajadores desde el conurbano bonaerense en dirección a la Capital se iniciaron en la madrugada del miércoles 17, un día antes de la fecha pactada por la CGT para la huelga general. En despachos oficiales y en el propio Ministerio de Guerra comenzaron a circular noticias sobre la presencia masiva de obreros en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. El propio Vernengo Lima se comunicó con Avalos para informarle que la policía, cuyos integrantes simpatizaban mayoritariamente con Perón y que hasta la víspera había tenido una conducción favorable al coronel, hacía muy pocos esfuerzos para detener las columnas (Ruiz Moreno, 1998)<sup>22</sup>. Avalos desestimó las ad-

<sup>22</sup> En un documento elaborado 25 años más tarde, Vernengo Lima mencionó que, en el transcurso de ese día, conforme avanzaba la movilización obrera y ante la falta de reacción de la policía y el



vertencias, incluso cuando recibió un llamado del comandante del Regimiento N° 10 de Caballería (RC 10), Gerardo Gemetro, quien desde Campo de Mayo le avisaba que le había llegado la misma información y le solicitaba autorización para que las unidades de la guarnición se pusieran en marcha<sup>23</sup>. La preocupación crecía en el acantonamiento. Hacia el mediodía, convocados por el jefe del Regimiento 1 de Artillería a Caballo (AC 1), teniente coronel Antonio Carosella, los jefes de las unidades se reunieron en el comando de la guarnición para evaluar los acontecimientos<sup>24</sup>. Para ese horario ya había multitudes de obreros en la Plaza de Mayo y sus alrededores, y otros partidarios del coronel empezaban a congregarse frente al Hospital Militar Central, en el barrio

ejército, un oficial amigo suyo le recomendó que movilizara a los efectivos de la Escuela de Mecánica de la Armada, principal unidad militar de la Marina en la Capital Federal, para defender la Casa de Gobierno. El vicealmirante se negó y dijo que “no movería un marinero antes de que el ejército moviera un soldado” (Ruiz Moreno, 1998: 175).

<sup>23</sup> Gemetro era uno de los jefes de la guarnición más resueltos a terminar con el liderazgo de Perón. Según información brindada en una entrevista, pudo conocerse que desde el 8 de octubre contaba con 1.200 efectivos listos para ser movilizados.

<sup>24</sup> *Primera Plana*, 12 de octubre de 1965. *Op. cit.*

de Palermo, a donde había sido trasladado Perón desde Martín García. Hacia allí se dirigió Domingo Mercante, liberado por el gobierno ese mismo día. Preocupados por la falta de órdenes e información, los jefes reunidos en Campo de Mayo decidieron enviar a uno de ellos, el director de la Escuela de Artillería, teniente coronel Héctor Puente Pistarini, a tomar conocimiento de la situación en la Capital<sup>25</sup>. Mientras tanto, Mercante iba y venía de la Casa Rosada al Hospital Militar, lo que expresaba las negociaciones que el gobierno se había dispuesto a emprender con Perón al acusar recibo de la masividad y el ánimo de los obreros movilizados.

Las tratativas culminaron con una reunión a solas entre Avalos y Perón en el Hospital Militar. Desde temprano, las gestiones gubernamentales buscaban que Perón serenara a las masas obreras dispuestas a dar pelea por su liberación. Las reconstrucciones del diálogo entre ambos señalan que Perón le habría reprochado la deslealtad a su interlocutor y le habría exigido su renuncia (Potash, 1980). Sin participar de las negociaciones,

<sup>25</sup> *Idem.*



El 17 de octubre, una multitud de obreros marchó a Plaza de Mayo. Permanecieron allí reclamando la liberación de Perón. Fuente: Colección Archivo General de la Nación. Archivo Nacional de la Memoria.

la armada le expresaba a Farrell y al ejército su disconformidad con el diálogo emprendido. Al caer la tarde, el emisario Puente Pistarini regresó a Campo de Mayo y relató a los jefes de las unidades lo que había visto en las calles ganadas por los trabajadores peronistas. Una vez más, los jefes decidieron permanecer a la espera de órdenes del comandante de la guarnición: aparentemente desconocían el rumbo de conversaciones que Avalos acababa de emprender. La sorpresa habría sido total cuando, por la noche, los jefes de las unidades de Campo de Mayo fueron invitados a presenciar un discurso que Perón daría desde el balcón de la Casa Rosada.

El teniente coronel Carosella, jefe del AC 1, se comunicó con Avalos para constatar si la información era cierta. En simultáneo, otro de los jefes de la guarnición, Francisco Rocco, director de la Escuela de Comunicaciones, preparaba un plan para torcer el curso de los acontecimientos. Decidió alistar una compañía de aspirantes y un batallón de la escuela en los ventanales del palacio del Correo en el centro porteño. Así lo recordaría Rocco veinte años después:

Pensé en desplazar uno o dos camiones con tropas hasta la Plaza Colón [...] para hacer desde allí algunas descargas a fin de que la multitud se dispersara. Después decidí no hacerlo ya que el ministro de Guerra no adoptaba ninguna determinación concreta. Por otra parte, no había necesidad de matar a nadie para obtener la desconcentración: unas ráfagas al aire hubieran bastado<sup>26</sup>.

Sin terminar de asimilar lo que veían en las calles, los jefes de Campo de Mayo que acudieron a la Casa de Gobierno presenciaron la salida de Perón a sus balcones cuando faltaba media hora para la medianoche. “Dios es criollo”, dijo el coronel, y expresó su gratitud hacia aquellas masas trabajadoras que aún permanecían en la plaza esperando su liberación. Los manifestantes comenzaron a desconcentrarse y los jefes de las unidades recibieron la orden de retornar a Campo

<sup>26</sup> *Primera Plana*, N° 154, 19 de octubre de 1965, p. 44. Una última resistencia ofreció Rocco cuando le solicitaron que dispusiera lo necesario para que el discurso de Perón fuera transmitido por la cadena de radio oficial. “Me di cuenta que todo estaba perdido”, señaló.

de Mayo. Todos emprendieron el regreso menos Avalos y Carosella, que se quedaron un rato más en la Casa Rosada. Antes de volver a la guarnición, el jefe de Campo de Mayo le reveló a su subordinado que acababa de presentar la renuncia al Ministerio de Guerra. Cuando llegaron al acantonamiento se produjo una nueva reunión en el comando de jefes y oficiales, que le pidieron instrucciones y explicaciones a Avalos. El general les comunicó entonces su dimisión e inminente paso a retiro. Como ya había ocurrido antes, se presentaron dos posiciones: aquellos que pensaban que la situación era análoga a la del 9 de octubre y estaban dispuestos a marchar sobre Buenos Aires contra Perón, y otro grupo que consideraba que había que admitir lo ocurrido y no intervenir<sup>27</sup>. Avalos comentó que había dado su palabra de honor a Farrell acerca de que Campo de Mayo no saldría a la calle. Finalmente se impuso la postura de la moderación. Uno de sus defensores señaló, quizás con cierta ironía, que Avalos “afirmó que el país necesitaba tranquilidad para evitar males mayores. El fuego sagrado de la disciplina que ardía en todos nosotros nos movió finalmente a aceptar la decisión del comandante de Campo de Mayo y nos fuimos a dormir”<sup>28</sup>.

En el transcurso de la noche hubo una oportunidad más para que la guarnición rechazara la idea de hacerle una nueva revolución a Perón. Antes de retirarse de la Casa Rosada, Avalos tuvo un pequeño intercambio con Vernengo Lima, quien en nombre de la armada lo invitó a resistir. “Usted hágase fuerte en Campo de Mayo que yo sublevo la marina”, le habría dicho. En un gesto de interpretación ambigua, Avalos estrechó la mano de Vernengo Lima y se saludaron para despedirse. El vicealmirante asumió que Avalos pondría en movimiento a Campo de Mayo para evitar el retorno de Perón y por eso, vestido de civil, tomó un taxi hasta el puerto de Buenos Aires y se presentó al comandante de la flota de río. Comunicó el estado de la situación e invitó a la flota a plegarse al levantamiento contra el gobierno. La escuadra aceptó la propuesta de Vernengo Lima, ahora

<sup>27</sup> *Acontecimientos militares en Campo de Mayo entre los días 6 y 19 octubre de 1945*, *Op. cit.*

<sup>28</sup> *Primera Plana*, N° 155, 26 de octubre de 1965, p. 29



como jefe revolucionario<sup>29</sup>. Se enviaron mensajes a distintas reparticiones navales y un emisario partió a Campo de Mayo para definir cómo seguir. El comandante de la flota de mar le había aclarado a Vernengo Lima que no comprometería a las fuerzas bajo su mando si no estaba garantizada la participación de unidades del ejército, por temor a las represalias que podría sufrir una armada que actuara en soledad (Ruiz Moreno, 1998). Sobre la madrugada, un emisario naval llegó a Campo de Mayo, donde se enteró que el cónclave de los jefes de unidades había decidido abandonar los planes revolucionarios. Al recibir la noticia, Vernengo Lima renunció a la jefatura de las fuerzas navales sublevadas. El movimiento de resistencia militar contra Perón acababa de ser derrotado.

Por fin vencedor, Perón se dispuso a reorganizar el gabinete nacional con la mira puesta en las elecciones que se celebrarían en febrero de 1946. Una de las primeras medidas fue el nombramiento de un hombre de su confianza, Humberto Sosa Molina, al frente del Ministerio de Guerra. El 19

<sup>29</sup> Idem.

de octubre, el general convocó a todos los jefes de Campo de Mayo a la sede del ministerio en la Capital y les fue notificando uno a uno sus relevos. Más tarde fueron enviados a reparticiones distantes y sin mando de tropa. Solo conservaron sus cargos el teniente coronel Francisco Gómez, al frente de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”, y el teniente coronel Carosella, del AC 1, aunque este último solo por unos pocos días<sup>30</sup>. Felipe Urdapilleta fue nombrado como jefe de la guarnición<sup>31</sup>. Al año siguiente, el ministro de Guerra hizo revisar las evaluaciones de la Junta de Calificaciones del ejército correspondientes a los jefes involucrados en el movimiento del 9 de octubre. Al no ser propuestos para ascender al grado siguiente, esos oficiales fueron separados del conjunto de cuadros (Potash, 1981). La derrota del foco antiperonista de Campo de Mayo estaba consumada.

En su análisis sobre los eventos de octubre de 1945, Alain Rouquié (1983) señaló que el peronismo, antes que el producto de una insurrección

<sup>30</sup> Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”. *Libro histórico 1945*. Serie Libros y Memorias Históricas. Servicio Histórico del Ejército.

<sup>31</sup> *Primera Plana*, 26 de octubre de 1965. *Op. cit.*

popular, fue el heredero de un poder militar que había ampliado significativamente su autonomía respecto a las clases dominantes tradicionales. Los hitos clave en la consolidación de ese poder habían sido la decisión de sostener a Farrell a pesar de todas las impugnaciones y la convocatoria a Perón frente a la amenaza de tener que ceder el gobierno a la oposición civil. Al margen de su dimensión polémica, este análisis resulta interesante porque ofrece una interpretación de los acontecimientos a la luz del desarrollo de un poder militar que, a lo largo del siglo XX, se volvió cada vez más intervencionista en el ciclo político argentino. No obstante, desde la perspectiva de los jefes de Campo de Mayo, corazón de la autoridad castrense de la época, la rebelión de los “descamisados” no solo alteró completamente el escenario político sino que condicionó y modificó de manera radical el carácter y la forma en que se ejercía aquel poder militar. La movilización popular del 17 de octubre, que revirtió el cuartelazo de Campo de Mayo y redujo a la impotencia los esfuerzos de los jefes de sus unidades, inhibiría a futuro –al menos por un tiempo prolongado– la posi-

bilidad de actuación bajo el formato decisivo de bloque encolumnado detrás de los “mandos naturales” que se había utilizado entre 1943 y 1945. Indudablemente, el impacto de la concentración obrera confluyó con medidas dispuestas por los colaboradores de Perón en el nuevo gabinete, que no culminaron con sanciones a los jefes del movimiento del 9 de octubre.

Por su parte, el propio Perón tomó conciencia del desafío que había enfrentado, y que se explicaba en buena parte por el poder acumulado por Campo de Mayo durante los últimos años. Bajo esa convicción, ya como presidente, en 1947 dispondría un plan de obras para relocalizar varias unidades de la guarnición. Su desarrollo demandaría tiempo, pero a lo largo de sus dos primeros gobiernos se llevaría a cabo. La intervención sobre Campo de Mayo se intensificaría aún más luego de que la guarnición se transformara otra vez en escenario de nuevas actividades destituyentes contra el peronismo.

## La prisión militar de Campo de Mayo, lugar de encuentro de los “derrotados”

Luego de la forzada renuncia de Perón a todos sus cargos en el gobierno, y del encendido discurso que dirigió como funcionario saliente desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, los militares que aún sostenían a Farrell le solicitaron su detención a él y a Avalos. Los encarcelamientos alcanzaron a otros oficiales ligados a Perón. Pero a diferencia del ex ministro de Guerra, recluido en instalaciones de la armada, sus colaboradores entonces detenidos permanecieron bajo el control del ejército. A partir del 13 de octubre, fueron llegando en condición de presos a la guarnición de Campo de Mayo.

Algunos de ellos, al llegar a la cárcel del acantonamiento, encontraron que sus celdas no es-

taban vacías. De reciente detención, habían sido traídos de Córdoba oficiales comprometidos en el fallido levantamiento de los generales Rawson y Martín del 24 de septiembre. Con curiosidad, los reclusos que llevaban unos días allí alojados se encontraron compartiendo el pabellón con aquellos contra quienes se habían levantado menos de un mes atrás.

El encuentro fue posible a instancias de uno de los episodios posiblemente más singulares ocurridos aquellos vertiginosos e inestables días. Tras el triunfo de la posición de Campo de Mayo y el derrocamiento de Perón, Avalos se presentó en la cárcel militar ante sus camaradas de armas que habían intentado sublevar la guarnición cordobe-

sa quince días antes. No solo les dio a entender que su accionar no merecía reprobación alguna: les dijo explícitamente que eran los precursores del movimiento que se impuso el 9 de octubre. Sin embargo, tal distinción no era motivo suficiente para que recuperasen su libertad, por lo que dispuso que permanecieran detenidos.

Los sublevados de septiembre también se hallaban recluidos en la guarnición cuando el escenario político empezó a cambiar, volviéndose favorable a Perón, y pese a haber transcurrido muy pocos días, fueron testigos de la liberación de algunos peronistas que pudieron así formar parte de la jornada del 17 de octubre. En los meses siguientes a la victoria de Perón y los trabajadores identifi-

cados con él, ya estabilizada la situación política, el presidente Farrell dispuso la libertad de los detenidos por el levantamiento de Córdoba y la rehabilitación en la fuerza de Rawson y Martín (en su condición de retirados) y de sus colaboradores.

Así, además de espacio privilegiado del poder militar que dirimía los destinos de la Argentina en aquellos días, Campo de Mayo fue sede de alojamiento para sus adversarios caídos en desgracia. El rápido ciclo en el que se producían los ingresos y egresos de la prisión militar fue fiel reflejo de la inestabilidad política del momento y de las contradicciones que atravesaron al general Avalos a la hora de consolidar el poder obtenido con el levantamiento de la guarnición bonaerense.

## El levantamiento antiperonista de Menéndez

Tras las jornadas de octubre de 1945, la reorganización del gobierno de facto, con fuerte predominio de figuras ligadas al peronismo, y el triunfo de Perón en las elecciones presidenciales de febrero de 1946 configuraron un nuevo escenario político y afectaron especialmente la relación entre el presidente electo y las Fuerzas Armadas. Una vez consumados los relevos de aquellos oficiales que habían conspirado y actuado contra Perón, y limitados en sus posibilidades aquellos que no se identificaban con su liderazgo, la nueva administración impulsó el retorno del ejército a sus tareas estrictamente profesionales. Luego de un período de intensa actividad deliberativa, desde el ministerio de Guerra, liderado por Humberto Sosa Molina, se buscó lograr amplios consensos entre los oficiales del arma terrestre en torno a una política basada en el restablecimiento de la disciplina, la modernización del equipamiento y el material bélico y el impulso a una agenda de desarrollo de industrias básicas nacionales consideradas estratégicas para la defensa nacional.

La búsqueda por volver a implantar la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas se estructuró en torno a la separación del cuerpo de oficiales de la gestión del Estado, aun cuando se reservó para integrantes del ejército la dirección de órganos clave como la Policía Federal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la Oficina Nacional de Transportes y la Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación<sup>32</sup>. A su vez, durante

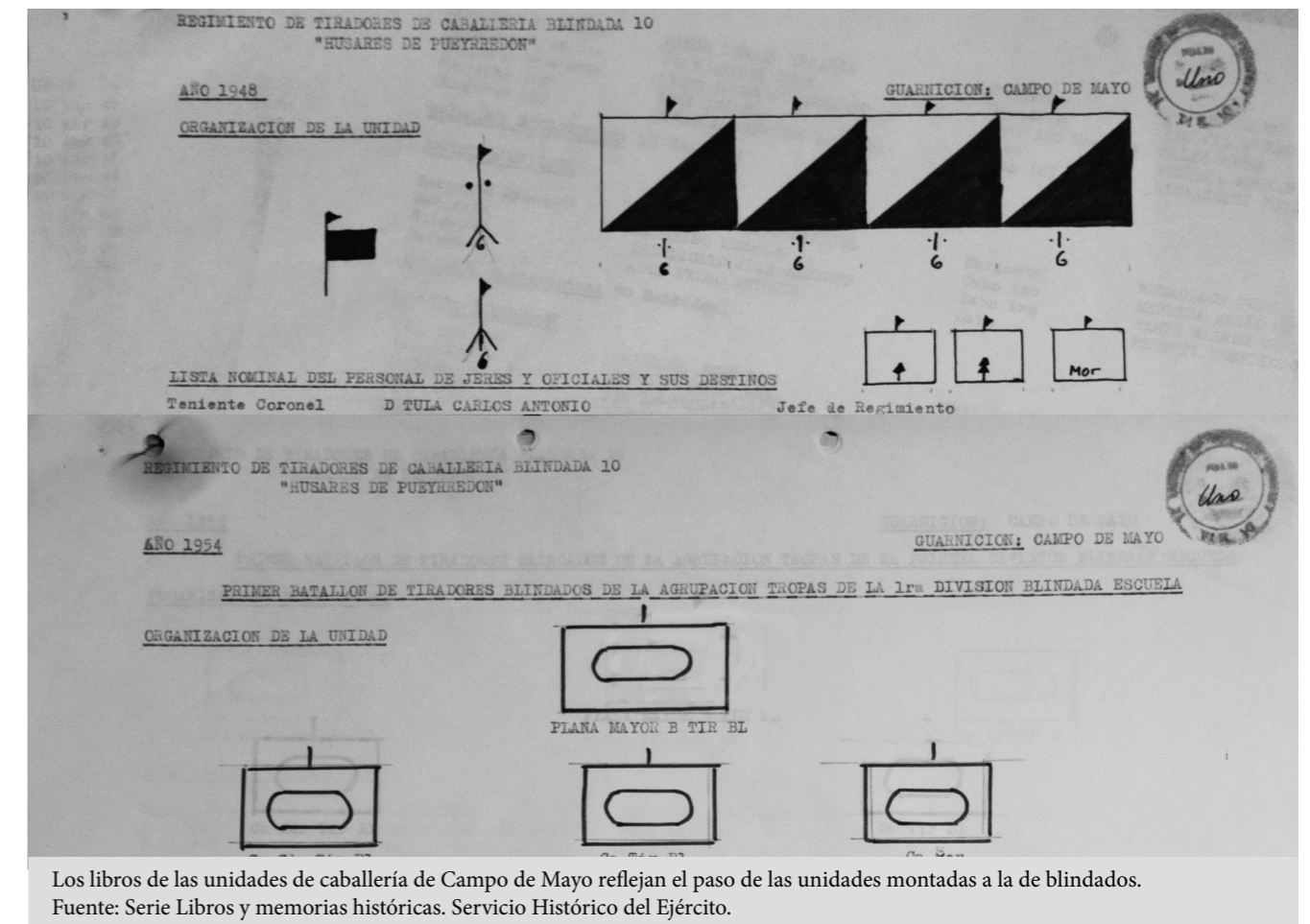
los primeros años de gestión peronista, apoyar al gobierno no fue un requisito excluyente para ocupar lugares determinantes en la cadena de mando dentro de la fuerza, aunque desde el Ministerio de Guerra sí se procuró que las principales jefaturas de unidades con mando de tropa quedaran en manos de oficiales identificados con Perón.

Luego de la experiencia de la SGM, cuando el abastecimiento de insumos fundamentales había estado muy restringido y se había convertido en un factor en constante tensión con la orientación de la política exterior argentina, el desempeño de militares al frente de áreas consideradas estratégicas empalmaba con el criterio de prioridad otorgado al desarrollo de las industrias del petróleo, química y siderúrgica. Todas ellas se vinculaban además al estímulo brindado a los establecimientos dependientes de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, creada unos años atrás (Belini y Korol, 2012). El fomento de un programa industrial nacional con fuerte participación estatal comenzó a revisarse hacia 1949, cuando se agotó la bonanza de las cuentas exteriores argentinas heredada de la época de la guerra y devino una situación de escasez de divisas. Además de equipos e insumos industriales, Argentina venía realizando importantes compras de armas y materiales militares para reabastecer a sus Fuerzas Armadas. El rearme había sido una consecuencia de la reconsideración de la política exterior del país y del progresivo acercamiento a la gran potencia occidental triunfante, los Estados Unidos. El gobierno aceptó los términos del acta de Chapultepec firmada por los estados americanos en 1947, se integró al sistema de decisión hemisférica que tanto había resistido y prestó su conformidad para avanzar en la construcción de un sistema interamericano de defensa (Cornut, 2021). En

términos militares, ambos temas eran decisivos no solo porque implicaban una nueva orientación estratégica en un contexto global de tensión creciente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino también porque implicaban una homogeneización de equipos y una organización de las fuerzas de cada país en función de los desarrollos de la potencia estadounidense. Esa mayor sintonía con las orientaciones políticas de Washington para la región, así como los proyectos de apertura en materia de inversiones estadounidenses para el desarrollo de industrias básicas y sobre todo para

la explotación petrolera, dio lugar a reclamos de sectores nacionalistas dentro y fuera del ejército, desde la oposición pero también desde el seno del propio gobierno.

La política de modernización del ejército que se produjo con la desmovilización que trajo el final de la guerra también impactó en Campo de Mayo. La incorporación de nuevas tecnologías, tanto en armamento como en transportes, trajo aparejadas actualizaciones en las escuelas de armas y en los institutos de reclutamiento, que funcionaban como espacios de ensayo para incorpo-



Los libros de las unidades de caballería de Campo de Mayo reflejan el paso de las unidades montadas a la de blindados. Fuente: Serie Libros y memorias históricas. Servicio Histórico del Ejército.



rar o descartar innovaciones. Al mismo tiempo, comenzó un proceso de renovación sustancial del arma de caballería, que proveía los principales comandos y unidades de combate a Campo de Mayo, a partir del reemplazo del caballo por los tanques y los transportes blindados, una transformación que en los años siguientes traería consecuencias significativas para el papel de la guarnición en la política nacional. En 1944 se creó la Escuela de Tropas Mecanizadas (luego Blindadas), con asiento inicial en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Pero, sobre todo, la 1ª División de Caballería se convirtió en la 1ª División Blindada, que con todos sus elementos dependientes en Campo de Mayo pasó a ser la primera gran unidad de su tipo. Para eso resultó decisiva la compra de tanques Sherman y otros vehículos blindados de origen estadounidense de rezago en Europa. De ese

modo, los dos regimientos de caballería de Campo de Mayo, el 8 y el 10, pasaron a ser unidades blindadas que concentraban buena parte del poder de fuego del ejército. En el caso del primero, se integró con dos batallones que agrupaban unos ochenta tanques en total. La misma división estaba compuesta por el Regimiento 1 de Artillería Blindada, que también fue dotada con una unidad destructora de tanques<sup>33</sup>.

### La reaparición de las tensiones en el ejército

Sin embargo, la adquisición de armas, la renovación de las unidades, el desarrollo de las fábricas militares y la mayor atención a los problemas profesionales del ejército no aplacaron por completo la actividad de aquellos oficiales que se oponían a Perón. Las dificultades económicas, y en particular el nivel de inflación y los problemas de balanza de pagos eran focos de tensión para el gobierno. A estas cuestiones se sumaban la perspectiva de una reelección de Perón, habilitada por la reforma constitucional de 1949, los mayores niveles de identificación entre el Estado y el ideario peronista y el persistente rechazo a los emblemas del movimiento que cuestionaban más frontalmente las jerarquías sociales tradicionales. Todo esto configuró un escenario en el que se reanudaron las acciones conspirativas. Estas se intensificaron especialmente durante 1951. Tras una huelga ferroviaria que culminó en la movilización militar de los trabajadores, el cierre y la expropiación del diario opositor *La Prensa*; y los rumores sobre una posible candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia, se produjo la convergencia de sectores civiles y militares que, ante la evidencia de que sería imposible vencer al gobierno en las urnas, comenzaron a explorar el camino de la sublevación militar.

Los núcleos de oficiales en actividad dispuestos a comprometerse en la conspiración se hallaban en la ESG. Hacia mediados de aquel año, allí comenzaron a funcionar dos grupos identificados

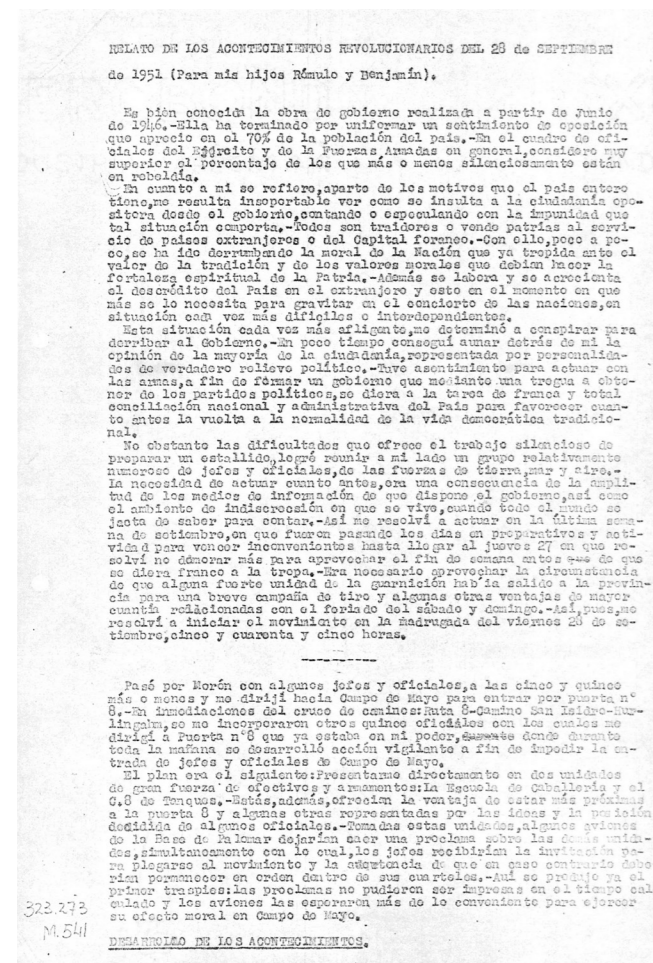
con dos liderazgos distintos: los del general retirado Benjamín Menéndez y del general Eduardo Lonardi, comandante del I Ejército cuya jefatura estaba en Rosario. Menéndez era un oficial con prestigio en el cuerpo de oficiales, que había conducido a la caballería a fines de la década de 1930, durante la época de esplendor del arma<sup>34</sup>. Había participado en distintas sublevaciones a lo largo de los años, en general desde posiciones nacionalistas que se habían ido sosegando con el paso del tiempo. Contaba especialmente con el apoyo de capitanes alumnos de las ESG, entre los que se encontraban su hijo Rómulo y Julio Alsogaray, quien llegó a ser su asistente principal<sup>35</sup>. Por su parte, Lonardi era un general de artillería que mantenía desencuentros con Perón desde hacía más de una década. Era un oficial superior en actividad a cargo de una gran unidad, es decir, tenía mando de tropa. Hacia 1951, posiblemente era el único militar opositor al gobierno en esa condición (Potash, 1981). Sus principales apoyos provenían del núcleo de docentes de la ESG, en su mayoría tenientes coroneles, entre los que se destacaban Juan Carlos Lorio y Bernardino Labayru<sup>36</sup>.

Tanto Menéndez como Lonardi mantenían contactos con dirigentes radicales, socialistas y conservadores, y realizaron al menos dos encuentros para unificar sus esfuerzos destituyentes. Sin embargo, los protagonistas señalan que ambos generales mostraban diferencias programáticas y metodológicas. Menéndez pensaba que un gobierno provisional debía restaurar la Constitución de 1853 y desarticular el Estado peronista y su política social. Al mismo tiempo, creía que los conspiradores debían pasar rápido a la acción para no caer en las redes del servicio informativo del gobierno, y confiaba en que un golpe que lograra controlar unidades decisivas podía volcar a

su favor a unas Fuerzas Armadas que él juzgaba mayoritariamente antiperonistas<sup>37</sup>. Por su parte, Lonardi evaluaba que el problema era Perón antes que su nacionalismo y su política social. A la vez, estimaba prudente aplazar el levantamiento hasta conseguir mayores apoyos dentro de las Fuerzas Armadas<sup>38</sup>. Algunos protagonistas han considerado que, más allá de estas discrepancias, las principales diferencias entre ambos caudillos tenían que ver con el ejercicio del liderazgo, ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a ponerse a las órdenes del otro<sup>39</sup>. Hacia fines de agosto de 1951, en un gesto que desconcertó a sus seguidores, Lonardi solicitó el retiro<sup>40</sup>. Pocos días después se conoció la renuncia de Eva Perón a la candidatura para la vicepresidencia. Ese acontecimiento fue clave porque descomprimió la tensión que generaba el tema entre el gobierno y el cuadro de oficiales y, al mismo tiempo, suprimió uno de los principales puntos de acuerdo entre conspiradores y descontentos. En un cálculo de que sus posibilidades de éxito se habían vuelto escasas, Lonardi anunció a sus seguidores su voluntad de abandonar los planes revolucionarios. De ese modo, los liberó para que siguieran el rumbo que desearan. Fue así que varios capitanes de la ESG, entre los que se destacaba Alejandro Lanusse, se incorporaron a las filas de Menéndez, el único jefe militar que continuaba dispuesto a sublevarse contra Perón.

### El general Menéndez pasa a la acción

En el esquema concebido por Menéndez, las unidades de Campo de Mayo, en particular los tanques del Regimiento N° 8 de Caballería (RC 8), eran decisivas. Para el general era clave contar con un poder militar en condiciones de hacerse con el control de la Capital, lo que le permitiría mostrar una carta victoriosa efectiva a los militares que dudaban sobre salir a las calles. En ese sentido, además del carácter estratégico de sus unidades y



Sin conocer aún su condena, Menéndez escribió una carta para sus hijos donde da su versión de los hechos de septiembre de 1951. Fuente: Colecciones especiales y archivos universitarios. Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts.

<sup>33</sup> Comisión del Arma de Caballería "San Jorge". *Historia de la Caballería Argentina, Tomo III, Siglo XX (1901 -1970)*, Buenos Aires, 2011

<sup>34</sup> Idem.

<sup>35</sup> Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts. *Historia oral de Julio Alsogaray con Robert A. Potash: transcripción y notas, 1973-1984*. Robert A. Potash Papers (FS 020). Colecciones especiales y archivos universitarios. Disponible en: <https://credo.library.umass.edu/view/full/mufs020-s01-b03-f006-i001>

<sup>36</sup> Lanusse, A., 1989. *Op. cit.*; Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts. *Entrevista de Alejandro A. Lanusse y Tomás Sánchez de Bustamante con Robert A. Potash, 23 de agosto de 1973*. Robert A. Potash Papers (FS 020). Colecciones especiales y archivos universitarios. Disponible en: <https://credo.library.umass.edu/view/full/mufs020-s01-b01-f001-i002>

<sup>37</sup> Menéndez, R. F. *Un soldado*. Buenos Aires: Dunken, 2003.

<sup>38</sup> Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts. *Historia oral de Julio Alsogaray con Robert A. Potash: transcripción y notas, 1973-1984*.

<sup>39</sup> Idem.

<sup>40</sup> Lucero, F. *Op. cit.*



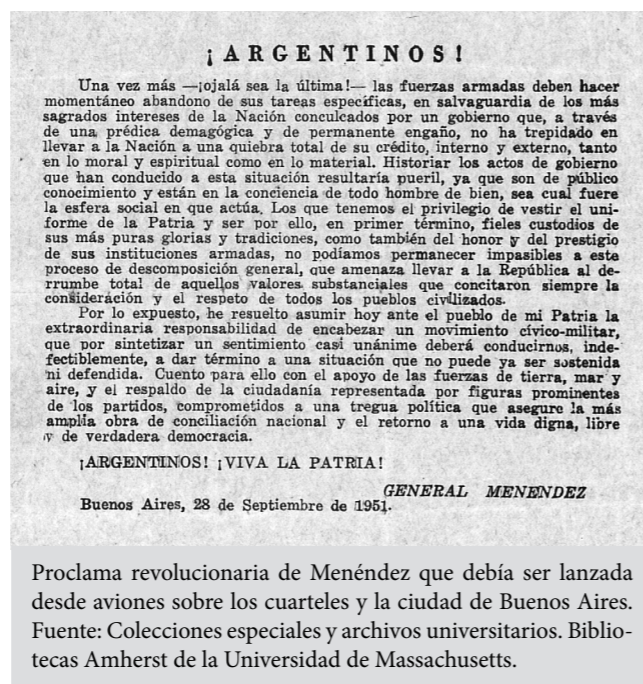
de la propia guarnición, el despliegue del plan elaborado por Menéndez tuvo como eje a Campo de Mayo, donde la caballería aportaría una cantidad significativa de oficiales al movimiento. Las unidades de ejército involucradas en la conspiración fueron la Escuela de Caballería y el RC 8, ambos desde Campo de Mayo, y el Destacamento de Exploración Mecanizado de la 1ª División de Ejército, con asiento en La Tablada. La intención era sublevarse antes de las elecciones que habían sido adelantadas tres meses<sup>41</sup>. El día elegido para dar el golpe fue el 28 de septiembre de 1951, cuando el movimiento podría contar con el apoyo de la Base Aeronaval de Punta Indio, que por la tarde debía entregar armamento y munición asignados para un ejercicio. Además, al día siguiente regresarían a Buenos Aires las poderosas columnas de la Escuela de Tropas Mecanizadas provenientes de Magdalena, unidad que se asumía identificada con el peronismo. A la vez, ese mismo día el propio Perón encabezaría un acto en la escuela “Sargento Cabral” en la guarnición<sup>42</sup>.

El plan previsto consistía en tomar ambas unidades de Campo de Mayo, con apoyo de aviones de la Base Aérea del Palomar, y repartir una proclama revolucionaria invitando a los restantes regimientos de la guarnición a sumarse. Las fuerzas agrupadas debían dirigirse hacia el Colegio Militar para integrar sus filas al movimiento y luego juntar la columna principal con el Destacamento de Exploración en algún lugar cercano a San Justo para marchar por la avenida Alberdi hacia la Casa Rosada, bajo la custodia de los aviones navales<sup>43</sup>. Los movimientos se iniciaron tal como se había pensado. Sin embargo, ciertos detalles como contratiempos en la transmisión

<sup>41</sup> Menéndez, R. F. *Op. cit.*

<sup>42</sup> La investigación del tribunal militar a cargo de juzgar a los protagonistas de la intentona golpista se detuvo especialmente en saber si el día elegido para la sublevación había respondido a un plan para atentar contra Perón en Campo de Mayo. Los acusados insistieron que el plan era marchar sobre Plaza de Mayo antes que capturar a Perón en la guarnición.

<sup>43</sup> Menéndez, B. “Relato de los acontecimientos revolucionarios del 28 de septiembre de 1951 (para mis hijos Rómulo y Benjamín)”, en Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts. *Historia oral de Benjamín Menéndez con Robert A. Potash: transcripción y notas, 1951-1970*. Papeles de Robert A. Potash (FS 020). Colecciones especiales y archivos universitarios, Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts. Disponible en: <https://credo.library.umass.edu/view/full/mufs020-s01-b04-f016-i001>



Proclama revolucionaria de Menéndez que debía ser lanzada desde aviones sobre los cuarteles y la ciudad de Buenos Aires. Fuente: Colecciones especiales y archivos universitarios. Bibliotecas Amherst de la Universidad de Massachusetts.

de las órdenes anunciaban desde temprano fallas en la planificación. El capitán Lanusse recordaría años después que se le había encomendado tomar la Puerta 8 de Campo de Mayo, uno de los principales ingresos desde la Capital, donde debía detener a los oficiales leales que pretendieran llegar a sus unidades. Al arribar en la madrugada del 28, se encontró con que el acceso ya estaba copado por fuerzas de su propio movimiento sublevadas en la Escuela de Equitación<sup>44</sup>. El general Menéndez también ingresó por esa puerta y se presentó en la Escuela de Caballería, que ya estaba formada en su plaza de armas y lista para plegarse al movimiento. Allí pronunció una arenga y ordenó ensillar para salir. En ese momento debían empezar a caer las proclamas desde los aviones sobre los restantes cuarteles, pero tal cosa no ocurrió porque los panfletos no habían llegado a imprimirse a tiempo<sup>45</sup>. Menéndez se desplazó hasta el cuartel del RC 8, contiguo a la escuela del arma, donde le informaron que el regimiento estaba en condiciones de salir. Dio órdenes de que alistaran los tanques para iniciar la marcha y comenzó la carga de combustible y el calentamiento de motores. Menéndez recorría el lugar supervisando los movimientos cuando vio que algunos hombres se

<sup>44</sup> Lanusse, A., 1989. *Op. cit.*

<sup>45</sup> Menéndez, B. *Op. cit.*

dirigían corriendo hacia uno de los extremos del cuartel. Escuchó unos disparos. Algunos de sus colaboradores le informaron que habían respondido cuando abrieron fuego sobre ellos.

La carga de combustible y la preparación de los tanques implicaba una demora que no había sido del todo contemplada por los conspiradores y venía retrasada porque los suboficiales habían mostrado una resistencia inesperada a las órdenes de los jefes sublevados. Sus acciones dieron tiempo a que se originara un movimiento de respuesta destinado a recuperar el control del regimiento. El segundo jefe del RC 8, teniente coronel Julio Cáceres, había advertido el día anterior a su superior que modificara su rutina e ingresara por otro camino ya que circulaban versiones sobre un posible levantamiento<sup>46</sup>. Pero el consejo fue desoído por el comandante, quien se dispuso a entrar por la

<sup>46</sup> *Todo es Historia* N° 67, Noviembre de 1972



El Libro histórico de la Escuela de Caballería registra los acontecimientos del 28 de septiembre de 1951 en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. Fuente: Serie Libros y memorias históricas. Servicio Histórico del Ejército.

Puerta 8 de Campo de Mayo y fue aprehendido por las fuerzas sublevadas. Cáceres, en cambio, ingresó por la Puerta 7, cercana a la estación ferroviaria Don Torcuato, y así evitó que lo capturaran. Al acercarse al regimiento pudo constatar que el personal de la guardia no pertenecía a la unidad. También alcanzó a ver que estaban cargando munición antiaérea en los tanques y el personal llevaba ropa de fajina y no de parada, tal como requería la rendición de honores que se realizaría ese día durante la visita de Perón a la escuela “Sargento Cabral”. En su auto, junto a sus acompañantes, Cáceres logró atravesar la guardia sin que lo reconocieran. El vehículo se dirigió hacia los fondos del cuartel, pero en el trayecto sus ocupantes fueron identificados por los oficiales sublevados. Decidieron entonces tirarse del auto en movimiento, mientras recibían la orden de rendirse por parte de los capitanes Alsogaray y Rómulo Menéndez. Ante su negativa, comenzó un tiroteo. Cáceres recibió apoyo de una compañía leal que disparó sobre los atacantes. Rómulo Menéndez, hijo del líder del levantamiento, resultó herido.

Al observar que había un movimiento de resistencia y que el cuartel estaba en disputa, el general Menéndez retornó a la Escuela de Caballería. Con parte del cuartel recuperado, Cáceres intentó impedir la salida de los tanques, de los cuales algunos ya estaban en marcha. Dos blindados al mando del capitán Iglesias Brickles avanzaban por la cuadra del regimiento<sup>47</sup>. Cáceres y un grupo de oficiales se dispusieron a atacarlos. Una vez más, sus oponentes lo intimaron a rendirse. El jefe leal buscó que los tanques se le acercaran hasta una distancia donde sus armas no pudieran alcanzarlo. Cuando llegaron a esa posición, un suboficial peronista de apellido Farina que estaba a bordo de uno de los blindados aprovechó para salir por la torreta trasera y pasarse al bando leal<sup>48</sup>. El movimiento distrajo a Iglesias Brickles, que en ese momento fue atacado por los defensores del cuartel. Nuevamente se produjo un tiroteo. Farina murió alcanzado por los disparos e Iglesias Brickles resultó herido, detenido y llevado primero a la cuadra y luego, junto al capitán Rómulo

<sup>47</sup> Idem.

<sup>48</sup> Idem.



Menéndez, al Hospital Militar de la guarnición<sup>49</sup>.

Solo tres tanques lograron llegar a la Puerta 8 para plegarse, junto a unos pocos vehículos semiorugas, a los 200 jinetes de las Escuela de Caballería. Desde allí, al mando de los oficiales sublevados, emprendieron la marcha hacia el Colegio Militar en Palomar. Mientras tanto, el Destacamento de Exploración se había dirigido hacia la Base Aérea de Morón y había forzado su rendición. El cálculo del general Menéndez era que con la dotación completa de tanques del RC 8, la "carta de triunfo de la insurrección", podría imponerse ante el general Héctor Ladvoat, director del Colegio Militar, y sumarlo a sus filas<sup>50</sup>. Pero la precaria columna con la que Menéndez llegó a El Palomar no le permitió más que invitar al jefe del

instituto a integrarse voluntariamente a la revolución<sup>51</sup>. Ladvoat no admitió coloquios. Rechazadas, las fuerzas rebeldes marcharon entonces hacia la zona de San Justo para reunirse con el Destacamento de Exploración, sin que esa unidad hubiera recibido noticias sobre el derrotero de la columna principal. En simultáneo, luego de doblegar a los sublevados de la Base Aérea de El Palomar, el comandante en jefe del ejército general Ángel Solari, se encaminó con una columna propia a Morón y allí frenó la marcha del Destacamento de Exploración<sup>52</sup>. Ante un panorama tan distante del plan original, con escasos recursos y pocas posibilidades de torcer el destino del levantamiento, Menéndez por fin se rindió ante el director del Colegio Militar.

Los responsables del intento de golpe fueron detenidos y juzgados inmediatamente. Las con-

denas del general Menéndez y sus ocho colaboradores más cercanos se conocieron en los primeros días de noviembre, antes de las elecciones. El líder de la sublevación recibió quince años de prisión, mientras que a los jefes restantes se les impusieron penas de cuatro a seis años. En los meses siguientes fueron condenadas dos tandas más de oficiales rebeldes de las tres fuerzas, aunque se trataba principalmente de cuadros del ejército. Los sublevados que recibieron las penas más severas fueron enviados al penal de Rawson, recién inaugurado<sup>53</sup>. Mientras tanto, un número considerable de oficiales rebeldes de la armada, pero también algunos del ejército y la fuerza aérea, agrupados en Punta Indio, decidieron evadirse a Uruguay, ante la evidencia de que la suerte de la insurrección estaba echada. Fueron dados de baja de sus respectivas fuerzas.

El castigo oficial contra los golpistas no se redujo a penas de prisión: también fueron realocizadas algunas de las unidades que habían participado en la conspiración. La Escuela de Caballería y el Destacamento de Exploración pasaron a la provincia de Corrientes. No sólo se relevó a los jefes insurrectos sino también a aquellos que no

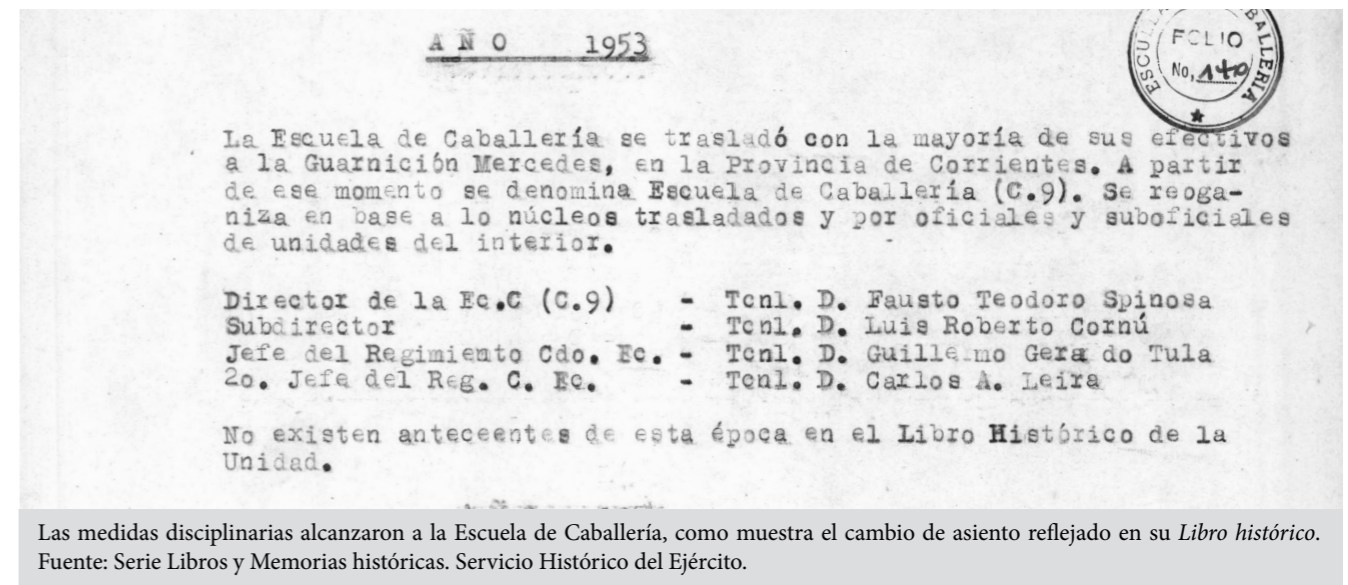
habían actuado con firmeza frente a la rebelión, o que no habían logrado detectarla en su etapa conspirativa. Los ministros de Marina y Aeronáutica fueron reemplazados. A partir de los episodios de septiembre de 1951, el gobierno peronista instauró el estado de guerra interno, un régimen similar al estado de sitio. Sin embargo, el levantamiento de Menéndez había expuesto una fisura en el ejército que no se cerraría con estas medidas. En los años siguientes, nuevas conspiraciones se transformarían en antecedentes de los levantamientos de junio y septiembre de 1955.

El intento de golpe de Menéndez mostró improvisación e importantes errores de análisis en su concepción y ejecución. En primer lugar, la idea de que el ejército era mayoritariamente antiperonista y bastaba con encender la llama revolucionaria para derrocar al gobierno no se constató. Al mismo tiempo, las dificultades para la puesta en marcha del plan original le impidieron al movimiento hacerse de las fuerzas que consideraba necesarias para alcanzar el éxito y aprovechar el impacto del factor sorpresa. A la vez, aun si se hubieran cumplido las condiciones previstas por Menéndez, el plan de contención puesto en marcha en Campo de Mayo y en la Capital Federal por el Ministerio de Guerra, en la misma mañana del 28 de septiembre, habría complicado las posibilidades de éxito del general sublevado. Con frecuencia se ha interpretado que su movimiento se inspiraba en el golpe de Estado de 1930. En parte el argumento suena correcto, ya que los rebeldes

<sup>53</sup>Entre ellos se hallaba el entonces capitán Alejandro Lanusse, último presidente durante la dictadura autodenominada "Revolución Argentina". Bajo su presidencia de facto, en agosto de 1972, diecinueve guerrilleros que lograron evadirse de esa cárcel fueron fusilados tras entregarse al ver frustrado su embarque en un avión en el Aeropuerto de Trelew. De ellos, dieciséis militantes resultaron asesinados y tres lograron sobrevivir, luego de ser ejecutados por personal de la marina en la Base Naval Almirante Zar.



Registrado por el diario *La Nación*, Perón habló frente a una Plaza de Mayo llena tras el éxito en la represión del levantamiento de Menéndez. Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.



Las medidas disciplinarias alcanzaron a la Escuela de Caballería, como muestra el cambio de asiento reflejado en su *Libro histórico*. Fuente: Serie Libros y Memorias históricas. Servicio Histórico del Ejército.



parecían no haber contemplado la herencia de 1943 ni la centralidad de Campo de Mayo actuando a instancias de sus “mandos naturales”. El intento de golpe de Menéndez exhibió, tal como se constataría en episodios futuros, la dificultad de poner en marcha unidades de la guarnición activándolas desde afuera y por separado.

No obstante, es interesante observar que en el centro del plan de Menéndez se hallaba el objetivo de conquistar una de las unidades con mayor poder de fuego de Campo de Mayo y del ejército, el RC 8, capaz de forzar la incorporación de otros regimientos al movimiento. Es decir que, al margen de la valoración del elemento moral, su estrategia contemplaba la importancia de generar una ventaja militar considerable para torcer el curso de los acontecimientos, basada en el control

de los tanques de Campo de Mayo. El fracaso de Menéndez muestra que las medidas que habían tomado Perón y Sosa Molina tras el levantamiento de octubre de 1945 habían resultado eficaces. Incluso con un foco antiperonista significativo en la caballería, que perduraría más allá de 1951, la guarnición no pudo ser nuevamente movilizada en bloque contra el gobierno.

Tras la intentona de Menéndez, Perón dio continuidad a la política de relocalización de unidades y la reducción del poder de fuego de Campo de Mayo. Además de la castigada Escuela de Caballería, en aquellos años abandonaron la guarnición sus pares de Infantería y Artillería, enviadas a la provincia de Córdoba, así como las unidades de defensa antiaérea y el RC 8, con nuevo asiento en Magdalena. Una parte nada despreciable de los

edificios que quedaron vacíos fueron ocupados por cursos de la escuela “Sargento Cabral”, como si la fidelidad de los suboficiales representara el cimiento que Perón había encontrado para construir un nuevo Campo de Mayo. Como se verá en el próximo capítulo, los institutos reubicados en el interior del país tendrían una participación clave en los episodios de septiembre de 1955 que desembocarían en el derrocamiento de Perón. Los fundamentos de la política de desarme de Campo de Mayo encontrarían allí su contracara.

Por último, en las reconstrucciones históricas se ha puesto de relieve la construcción de solidaridades entre integrantes del arma de caballería, aquellos sublevados contra Perón, presos y separados del ejército en 1951 que más tarde serían rehabilitados por el golpe de Estado de septiembre de

1955. Varios de los capitanes del 51, como Alsogaray, Lanusse y Sánchez de Bustamante, entre otros, serían los coroneles que lucharían junto al general Juan Carlos Onganía en el llamado bando “azul” y más tarde se desempeñarían como comandantes del ejército durante la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”. Sin embargo, como se analizará a continuación, las redes formadas en las unidades de caballería, en Campo de Mayo, en las filas del antiperonismo y en las cárceles no forjarían vínculos de una vez y para siempre. El reencuentro de los protagonistas entre 1962 y 1963 sería con el general Menéndez y su hijo Rómulo, ya coronel, al frente de las unidades “coloradas” movilizadas para enfrentar a la División de Caballería Blindada de Campo de Mayo, conducida por sus antiguos compañeros de 1951.

## **Apoyos civiles al levantamiento del general Menéndez**

A lo largo de 1951, una serie de acontecimientos conmovieron a los dirigentes políticos opositores a Perón, impulsándolos a considerar que existían condiciones y un estado de opinión favorable para derrocar al presidente de la Nación. A la huelga ferroviaria y la reacción producida tras el cierre del diario *La Prensa*, se le sumó la conmoción generada por el secuestro del estudiante universitario y militante comunista Ernesto Mario Bravo por parte de la policía. Esto ocurrió en el mes de junio y, tras varios días cautivo y torturado, fue liberado en medio de una intensa campaña realizada por el esclarecimiento de su caso. Sin embargo, el escenario político de aquel año se organizaba a partir de las elecciones previstas ini-

cialmente para los primeros meses de 1952, donde una predecible y contundente victoria del oficialismo provocaba inquietud en las filas opositoras.

En ese marco, distintos líderes políticos comenzaron a acercarse a los jefes militares que ya se hallaban involucrados en actividades conspirativas. En torno al general Eduardo Lonardi se reunieron dirigentes radicales unionistas como Miguel Ángel Zabala Ortiz y Silvano Santander. El general Benjamín Menéndez, en cambio, mantuvo conversaciones con el sector intransigente del radicalismo, encabezado por Arturo Frondizi, y estableció vínculos con dirigentes conservadores como Reynaldo Pastor y Eduardo Paz y el demócrata progresista Horacio Thery. Estos acto-

res, junto al socialista Américo Ghioldi, se entrevistaron con el capitán Julio Alsogaray y el propio Menéndez en una casa en la localidad de Martínez, de la provincia de Buenos Aires, a fines del mes de julio de 1951. Allí los dirigentes brindaron su apoyo al general retirado y éste se comprometió a convocar a elecciones en un plazo breve tras el esperado triunfo de su levantamiento.

Al percibir que las condiciones para imponerse no estaban dadas, Lonardi se retiró del movimiento golpista permitiendo que civiles y militares que colaboraban con él se vincularan con los oficiales de caballería que rodeaban al general Menéndez. Por tal motivo, la mañana del alzamiento Zavala Ortiz, junto a otros correligiona-

rios de su partido, se dirigió en automóvil a Campo de Mayo para seguir de cerca la marcha de los acontecimientos. Una vez consumada la derrota retornaron a Buenos Aires sin ser detectados. Sin embargo, con el correr de los días el gobierno se enteró de la participación y apoyo a la sublevación del líder radical, que fue detenido. Otros dirigentes como Santander y Mauricio Yadarola, cercanos a su figura, se exiliaron en Uruguay. El propio Arturo Frondizi, más involucrado con el general Menéndez que los líderes radicales antes mencionados, logró evadir los cargos y no fue alcanzado por la investigación oficial.

## Un ejército en estado deliberativo

Si el fracasado intento de levantamiento del general Benjamín Menéndez había mostrado que para derrocar a Perón se necesitaba algo más que una conducción golpista decidida, durante la segunda presidencia peronista (1952-1955) la ecuación política argentina cambiaría hasta el punto de posibilitar un movimiento militar exitoso contra el gobierno. Hacia 1955, la estabilidad que Perón había logrado durante los años previos, sobre todo después de su reelección con el 63% de los votos, comenzó a deteriorarse. Una serie de factores coyunturales crearon un escenario de descontento con el gobierno, tanto en círculos de poder como entre las clases medias y altas urbanas, que envalentonó a sectores antiperonistas de las Fuerzas Armadas que desde los días de Menéndez esperaban su oportunidad para saltar a la acción. En un lapso de pocos meses, Perón pasó de ostentar una hegemonía casi total a ver amenazada su continuidad en la presidencia.

El capital político del gobierno comenzó a resentirse desde fines de 1954, cuando Perón y la Iglesia católica, una institución que hasta entonces había mantenido un vínculo relativamente pacífico con la Casa Rosada, entraron en un conflicto que escaló a una velocidad difícil de manejar para el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) (Caimari, 1995; Torre, 2001). Una seguidilla de declaraciones y medidas anticlericales de Perón abrieron una brecha irreversible con el clero que fue mal recibida por la corporación militar, de larga tradición católica en el país. El conflicto comenzó como una disputa por espacios de influencia sobre las juventudes estudiantiles entre el gobierno y la institución religiosa; se agravó por acusaciones y difamaciones cruzadas entre el presidente y sectores clericales; y alcanzó su punto máximo cuando Perón impulsó varias medidas

que desafiaban abiertamente a las autoridades eclesiásticas, como la autorización del divorcio con derecho a nuevas nupcias, los permisos a gobernadores locales para legalizar los prostíbulos y la promulgación de una ley, en mayo de 1955, que preveía elecciones en seis meses para formar una convención que reformara la Constitución en los aspectos sobre la relación entre Estado e Iglesia, “a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley”<sup>54</sup>.

El malestar en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas se agravó aún más desde principios de 1955, cuando Perón anunció un acuerdo con una compañía extranjera, la estadounidense Standard Oil Company, para que participara en la explotación petrolera en Argentina. Un escenario financiero de escasez de capitales había llevado al gobierno peronista a revisar los términos del principio de “independencia económica” que había regido durante el primer gobierno de Perón (Antúnez y Gerchunoff, 2001). Ante el acuerdo con la Standard Oil, los partidos opositores lanzaron una campaña que denunciaba el contrato como una supuesta renuncia a la soberanía nacional. Cuando el gobierno quiso dar marcha atrás ya era tarde: entre los militares ya se había conformado una masa crítica de oficiales dispuestos a derrocar a Perón en cuanto la relación de fuerzas lo permitiera.

Desde el intento de golpe frustrado de Menéndez en 1951, varios oficiales retirados del ejército permanecían en estado de conspiración larvada. El panorama para el gobierno se agravó durante los primeros meses de 1955, cuando oficiales activos y con mando de tropas, sobre todo de sectores católicos y nacionalistas, se sumaron a las deliberaciones para derrocar a Perón, pese a que

<sup>54</sup>Ley N° 14.404, 20 de mayo de 1955.

hasta entonces se habían comportado como profesionales leales. No obstante, el mayor impulso al movimiento golpista no provino del ejército sino de la armada, una fuerza históricamente liberal y antiperonista que, durante el gobierno de Perón, había logrado conservar en puestos clave a oficiales hostiles al presidente. La conspiración naval comenzó a tejerse bajo el liderazgo del contralmirante Samuel Toranzo Calderón, quien obtuvo el apoyo del general Justo León Bengoa, comandante de la 3ª División del Ejército y con mando de tropas en la provincia de Entre Ríos, y de dirigentes de la oposición civil (Potash, 1981). Los preparativos para el golpe se aceleraron en junio

de 1955, cuando el conflicto entre Perón y la Iglesia se agudizó tras una masiva movilización antiperonista durante la ceremonia católica del Corpus Christi, que se realizó pese a la prohibición oficial. El gobierno denunció actos de violencia y vandalismo durante la marcha, que Perón atribuyó a un plan orquestado por sectores del clero, a los que simpatizantes peronistas respondieron con un ataque a la Catedral.

En ese contexto, los golpistas decidieron pasar a la acción el 16 de junio, con un plan de bombardeo aéreo sobre la Casa Rosada para matar a Perón. La conspiración debía contar con las unidades navales aéreas de Punta Indio, la base de la

### Desagravio a la bandera

El sábado 11 de junio de 1955, cinco días antes del bombardeo naval sobre la Plaza de Mayo para intentar derrocar a Juan Domingo Perón, una masiva movilización antiperonista elevó al máximo la tensión que existía desde hacía meses entre el gobierno y la Iglesia. La marcha opositora se realizó en ocasión de la ceremonia católica del Corpus Christi, pese a que el Poder Ejecutivo la había prohibido. El gobierno denunció actos graves de violencia y vandalismo durante la movilización en su contra, que el propio Perón atribuyó a un plan orquestado por ciertos sectores del clero. Uno de los episodios repudiados por el peronismo fue la quema de una bandera argentina en las escalinatas del Congreso y su reemplazo por una bandera del Vaticano. En la prensa incluso se

difundieron imágenes del presidente consternado, contemplando los restos de la insignia patria en el lugar de los hechos. El suceso no pasó desapercibido en los círculos militares. Por orden del secretario de Ejército, la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”, en Campo de Mayo, organizó al lunes siguiente una formación de desagravio en su plaza de armas<sup>1</sup>. Sin embargo, ese mismo día los diarios revelaron que, en realidad, la quema de la bandera había sido una puesta en escena oficial y que sus verdaderos autores habían sido policías bajo las órdenes del Ministerio del Interior<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”. *Libro Histórico 1951 a 1957*. Serie Libros y Memorias Históricas, Servicio Histórico del Ejército.

<sup>2</sup> *La Nación*, 10 de junio de 1955 al 13 de junio de 1955



fuerza aérea en Morón, la Infantería de Marina con asiento en la zona portuaria de Buenos Aires, la base naval de Puerto Belgrano, las tropas del general Bengoa en el Litoral y las escuelas de Artillería y Aviación en Córdoba (Archivo Nacional de la Memoria, 2015).

Sin embargo, el movimiento golpista no solo era políticamente improvisado sino que, además, no había reunido las fuerzas militares necesarias como para triunfar, sobre todo en Buenos Aires. El general Bengoa lo sabía y por eso había sugerido demorar la sublevación. El 16 de junio, este no se encontraba en su cuartel en Paraná, desde donde debía sumarse al movimiento golpista, sino en Buenos Aires, donde concurriría al día siguiente a un asado de camaradería con otros generales del ejército a los que intentaría sumar a la causa. La reunión iba a celebrarse en Campo de Mayo, que permanecía ajeno a las conspiraciones para derribar al gobierno. Pero el encuentro no llegó a concretarse porque, sin haber coordinado con

Bengoa, y sin haberse asegurado tampoco la capacidad operativa de Puerto Belgrano, los hombres de Toranzo Calderón iniciaron las operaciones de ataque.

La premura llevó a que el movimiento golpista se redujera prácticamente a las unidades con las que contaba en el área metropolitana de Buenos Aires, donde su presencia era demasiado limitada. Tras el bombardeo a la Plaza de Mayo, que dejó cientos de muertos civiles, los insurrectos fueron derrotados en pocas horas por las fuerzas leales (Archivo Nacional de la Memoria, 2015). Campo de Mayo jugó un papel destacado en la represión a la intentona golpista. El Comando del Ejército ordenó al jefe de acantonamiento de la guarnición que conformara un destacamento móvil y marchara con blindados hacia la base aérea de Morón para recuperarla. A las siete de la tarde del 16 de junio, los rebeldes que ocupaban el aeródromo se rindieron. Esa misma noche, el ejército desplegó la artillería de la Escuela de

Suboficiales, también con asiento en Campo de Mayo, sobre la zona de la costanera, para repeler posibles ataques navales.

Para el día siguiente, los rebeldes habían sido sofocados sin que ningún miembro del ejército se hubiera plegado a ellos. Aunque no duraría mucho tiempo, la lealtad del arma terrestre había salvado al gobierno de ser derrocado. La vigilancia permanente y la depuración política que Perón había implementado sobre los cuadros superiores de la fuerza se hacía sentir: hacia mediados de 1955, solo tres o cuatro de los más de noventa generales en servicio activo podían considerarse resueltamente comprometidos en la desestabilización de Perón (Potash, 1981).

El hecho de que Campo de Mayo se hubiera mantenido al margen del movimiento golpista sugería que las medidas preventivas adoptadas por el gobierno luego de la sublevación de Menéndez, en 1951, habían surtido efecto. El traslado de unidades hacia plazas en el interior del país le había

restado peso político a la guarnición, tal como se comprobaría pocos meses después, durante un nuevo intento de golpe, esta vez exitoso, en el que Campo de Mayo jugaría un papel limitado.

### El golpe a Perón y la “Revolución Libertadora”

El bombardeo del 16 de junio dejó al gobierno en una situación límite, con un clima de creciente violencia en las calles y un marco político hostil que alcanzó su pico máximo el 31 de agosto, cuando Perón amenazó con renunciar y luego atizó a sus seguidores en un discurso pronunciado desde el balcón de la Casa Rosada. Frente a la multitud, el presidente recordó el bombardeo a la Plaza de Mayo, al que se refirió como una “infamia”, y dijo: “La consigna para todo peronista es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”<sup>55</sup>.

Los bríos golpistas de la armada se reavivaron, esta vez con un liderazgo más orgánico y coordinado que tenía a la cabeza al entonces contralmirante Isaac Rojas. Para no repetir la mala experiencia de junio, los golpistas se convencieron de que sería indispensable obtener el apoyo de sectores del ejército. De mínima, necesitaban la participación de algunas unidades que hicieran dudar a otras a la hora de reprimir a los rebeldes. Los marinos sondearon al general de mayor jerarquía, Pedro Eugenio Aramburu, director de la Escuela Superior de Guerra, pero desistió de ponerse al frente del movimiento porque consideró insuficientes las fuerzas disponibles<sup>56</sup>. La conspiración contaba con unidades del ejército en Córdoba, el Litoral y Cuyo, pero en Buenos Aires no había ningún plan en marcha.

Ante la negativa de Aramburu, la armada acudió al general retirado Eduardo Lonardi, uno de los conspiradores de 1951. Lonardi aceptó liderar el golpe y trasladarse a Córdoba, donde tenía vínculos familiares con sectores católicos y naciona-



Perón junto a otros funcionarios observando los destrozos producidos por el bombardeo de junio de 1955. Fuente: Archivo Nacional de la Memoria.



Aviones y personal naval protagonistas de los bombardeos sobre Plaza de Mayo. Las máquinas contenían el símbolo “Cristo vence”. Fuente: Archivo Nacional de la Memoria.

<sup>55</sup> Perón, J. D. [Discurso], 31 de agosto de 1955. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=p3dOLBRkcXY>

<sup>56</sup> Entrevista al almirante retirado Arturo Rial en Potash (1981: 271).



## Merodeadores armados en Campo de Mayo

En la noche del 17 de septiembre de 1955, apenas un día después del levantamiento contra Juan Domingo Perón, un grupo de civiles “que merodeaban Campo de Mayo” y que portaban armas fueron detenidos en las inmediaciones de la guarnición. Unas pocas horas después, la Delegación Regional de la Policía donde se encontraban arrestados los sospechosos informó al comando de Campo de Mayo que todos ellos pertenecían a un “servicio de informaciones del Estado”<sup>1</sup>. Aunque en el registro de las comunicaciones no precisaba a qué organismo pertenecían ni los motivos por los que estaban allí, es posible que se vincularan con la actividad de inteligencia posterior al golpe de Estado que se había consumado un día antes. Lo que sí informaron las autoridades policiales fue la lista de elementos secuestrados a los detenidos: “Un revolver 38 largo niquelado cachas negras; 23 proyectiles 38 largo; una libreta de enrolamiento 3.233.389; un permiso de la Dirección de Transporte y tránsito de la Provincia;

<sup>1</sup>Dirección General de Liceos Militares. *Diario de Guerra del Comando Agrupación 2 “Conintes”*. Serie Diarios de Guerra. Servicio Histórico del Ejército.

una factura por 15 litros de nafta; una cédula de identidad; un carnet de conductor de la Dirección de Tránsito de la Provincia; un carnet profesional de la Dirección de Tránsito de la Provincia; un carnet de conductor de la Dirección Nacional de Automotores de la Capital Federal; una libreta de enrolamiento 576.004; una libreta de enrolamiento 5.596.929; un certificado de la Dirección de Transporte y Tránsito de la Provincia; una cédula de identidad 2.138.130 de la Capital Federal y una boleta de la UCR; una agenda perteneciente a Alberto José Villamarín; tres boletas borrador; tres cartas, dos comerciales y una particular; una cartera vacía con direcciones; un poncho; un cárdigan con elástico detrás; un piloto; un saco gris oscuro; dos llaveros con varias llaves cada uno; un saco gris claro; tres boletas comerciales; una cortapluma; un calentador a alcohol; una yerbera con mate y bombilla; tres botellas vacías; un vaso; una servilleta y un pan; un pedazo de género azul floreado; una bolsita de nylon marrón”<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>Idem.

listas del ejército, para lanzar desde allí la rebelión que iniciaría el 16 de septiembre de 1955. La batalla entre rebeldes y leales al gobierno constitucional resultó pareja en las plazas del interior del país. Sin embargo, fue en las costas de Buenos Aires donde los golpistas, y en particular la armada, hicieron la diferencia que les dio la victoria que consumaría el golpe de Estado. La flota de guerra marítima arribó desde el sur el 18 de septiembre, declaró un bloqueo a la costa y anunció que bombardearía los depósitos de petróleo de Dock Sud y la refinera de YPF en La Plata, como de hecho lo había hecho contra objetivos petroleros en Mar del Plata. Pero el ataque no llegó a producirse ya que, al día siguiente, el gobierno llamó a un cese de las hostilidades e inició el camino hacia la renuncia y el exilio de Perón.

Al igual que en junio, durante los sucesos de septiembre de 1955 las unidades de Campo de Mayo se mantuvieron leales al gobierno y se encuadraron bajo el ordenamiento general del plan de conmoción interna implementado por el Comando del Ejército. Organizadas como Agrupación Conintes 2, adoptaron medidas de defensa antiaérea ante posibles bombardeos, cumplieron tareas de patrulla y vigilancia en su zona de influencia y se aprestaron para eventuales enfrentamientos militares con las fuerzas rebeldes. Sin embargo, las maniobras más allá de la propia guarnición fueron reducidas. Con el fin de reforzar guardias, la Escuela de Gendarmería Nacional movilizó hombres hacia puntos estratégicos, como el Destacamento de Gendarmería en Ezeiza y las transmisoras ra-

diales Mitre y Belgrano<sup>57</sup>. El mayor movimiento desde Campo de Mayo corrió por cuenta de la 1ª División Blindada, que en la mañana del 17 de septiembre envió a más de cien hombres y dieciséis tanques hacia Bahía Blanca, para sumarse a otras columnas que se dirigían desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires hacia esa ciudad para sofocar a las tropas rebeldes<sup>58</sup>.

Bahía Blanca era precisamente el lugar desde el que había partido la flota de mar que le daría el triunfo al movimiento golpista. En informes internos emitidos por el comando de represión del ejército hay registro de que esa carta jugada por la armada fue subestimada. En la tarde del 16 de septiembre, se informó que existían “noticias contradictorias sobre la lealtad y ubicación” de la flota. En la mañana siguiente, el comando de represión confirmó que había zarpado en actitud rebelde, “no siendo probable que pueda tener ningún éxito”<sup>59</sup>.

Cabe preguntarse si la reacción de las tropas leales del ejército ante la insurrección había sido tan decidida como era posible o no. Una hipótesis ampliamente aceptada sugiere que el movimiento de 1955 no fue un golpe de Estado institucional, ni involucró al aparato militar bajo la conducción de sus “mandos naturales”, sino que se trató más bien de una seguidilla de pronunciamientos de oficiales superiores, no siempre en servicio activo (Rouquié, 1983). Los suboficiales del ejército eran mayoritariamente peronistas y la infantería había mostrado una lealtad sin fisuras al gobierno constitucional. Las unidades sublevadas habían sido pocas. Sin embargo, la mayoría de los generales que no se habían plegado al golpe tampoco habían defendido enérgicamente a Perón. Por el contrario, aquellos autodenominados “legalistas” dentro del ejército, que no se identificaban con los golpistas pero sí eran antiperonistas, habían participado sin demasiada convicción en la represión a los rebeldes, bajo la íntima conciencia de que, a esa altura, el gobierno ya tenía las horas contadas.

<sup>57</sup>Dirección General de Liceos Militares. *Diario de Guerra del Comando Agrupación 2 “Conintes”*. Serie Diarios de Guerra. Servicio Histórico del Ejército.

<sup>58</sup>Idem.

<sup>59</sup>Idem; Comando en Jefe del Ejército. *Boletines de informaciones Nº 1 y 2 del Comando en Jefe de Represión - EMGE “Conintes”*.

Lo cierto es que, una vez más, las unidades del área de Buenos Aires, incluidas las de Campo de Mayo, Magdalena y Azul, se habían mantenido al margen del movimiento golpista y, al mismo tiempo, habían garantizado el orden en la zona metropolitana, donde existía la amenaza de una reacción de los sindicatos y agrupaciones peronistas. Tras la salida de Perón, el ejército conformó una Junta Militar para negociar la transición con los rebeldes, que incluía a todos los generales en servicio activo del Gran Buenos Aires: diecisiete oficiales que llegaban a las negociaciones con el capital suficiente como para pretender arbitrar la situación.

Aunque la junta, de mayoría legalista, apuntaba a un gobierno de facto provisorio que llamara a elecciones, los acontecimientos pronto tomaron otro rumbo. Como cabeza visible del golpe triunfante, el general Lonardi llegó a la presidencia dispuesto a mantenerse en ella, y lo primero que hizo al asumir fue desconocer a la junta. La autodenominada “Revolución Libertadora” se iniciaba con un alto grado de ruptura en el ejército, que se profundizaría aún más en los años siguientes.

## La agudización de las divisiones en el ejército

Tras la asunción de Lonardi al frente de la dictadura, la tradicional división entre nacionalistas y liberales en el ejército se solapó con nuevas grietas dentro de la fuerza que habían surgido al calor de la coyuntura política y que no habían quedado saldadas en los preparativos previos al golpe. A poco de asumir, Lonardi impuso una purga masiva en el ejército para deshacerse de aquellos hombres que no habían prestado su apoyo al movimiento rebelde. La dictadura pasó a retiro a setenta y cinco de los ochenta y seis generales en servicio en el momento del golpe, y la depuración se extendió hacia abajo en el escalafón alcanzando a cientos de oficiales y suboficiales. En simultáneo, fueron reincorporados unos 170 oficiales jefes y superiores que habían sido dados de baja por el peronismo y que habían sufrido la cárcel, el exilio o el retiro prematuro (Potash, 1981). Estos antiperonistas de la primera hora, aquellos que habían protagonizado la rebelión de 1951, fueron

recompensados con promociones y designaciones que despertaron el recelo de sus colegas que habían permanecido sin interrupción en la carrera profesional, y que ahora intentaban disimular su antigua proximidad o tolerancia al peronismo mientras se los acusaba de acomodaticios.

Otro plano de la creciente división en el ejército se vinculaba con la cuestión de qué hacer con el peronismo. Desde el nacionalismo católico, y bajo la promesa de que en el país no habría “vencedores ni vencidos”, Lonardi se inclinaba por reorganizar la estructura de poder sobre la base de un peronismo sin Perón, lo que implicaba tender puentes con el aparato peronista y, sobre todo, con los sindicatos y la CGT. Exponentes del integrismo nacionalista lo acompañaban en esa idea y ocupaban puestos como miembros del gabinete y colaboradores cercanos. Sin embargo, la “Revolución Libertadora” había nacido como un régimen de conducción colegiada, en el que los sectores liberales y antiperonistas también mantenían una porción significativa de poder, tanto a nivel ministerial como en instituciones de peso como la Casa Militar.

En noviembre de 1955, el conflicto dentro de la dictadura se resolvió a favor del ala liberal. El recrudecimiento de la puja por cargos clave terminó de vaciar de poder a Lonardi, quien sufrió

una destitución militar empujada por una alianza entre los liberales del ejército, la armada y sectores de la oposición civil. Lonardi fue reemplazado por un viejo rival suyo, Aramburu, un oficial ni nacionalista ni liberal y sin grandes enemigos en las tres armas, que asumió con la venia de la cúpula naval y con la continuidad del almirante Rojas en la vicepresidencia.

Durante la nueva fase del régimen militar, la armada amplió su cuota de influencia política en el gobierno, que se organizó con la fórmula de un presidente bajo tutelaje de las Fuerzas Armadas. Tras la asunción de Aramburu se conformó una Junta Militar Consultiva, integrada por los tres ministros de cada arma y el vicepresidente, de forma que la armada tenía voto mayoritario. Todas las decisiones importantes del presidente debían pasar primero por la Junta. Con ese esquema, la “Revolución Libertadora” se embarcó en un proyecto de “desperonización” de la política y la sociedad que torció por completo el rumbo de lo que había iniciado Lonardi. Con el objetivo de liquidar para siempre al aparato peronista, se proscribió al justicialismo y a todos sus líderes, se intervinieron la CGT y los gremios bajo su jurisdicción, se liberó la competencia política en los sindicatos y se prohibió el uso de símbolos peronistas e incluso la mención del nombre de Perón.



En su intento por resolver la “cuestión peronista”, como la denominó Catalina Smulovitz (1991), la “Revolución Libertadora” apeló a la fórmula más drástica, que con el tiempo se demostraría ineficaz.

Mientras tanto, al interior del ejército, el problema de la depuración de sus filas se mantenía como la gran piedra de la discordia. Envalentonados por el nuevo contexto, los liberales antiperonistas más furibundos clamaban por el castigo a quienes no habían participado activamente en el derrocamiento de Perón. Del otro lado, oficiales “profesionalistas” asistían indignados a las promociones y ascensos por motivos políticos y no estrictamente militares de activistas y conspiradores. Esa división, que marcaría el tono de la disputa en la fuerza durante las siguientes dos décadas, se profundizaría desde junio de 1956, cuando un episodio de sangre, en el que Campo de Mayo jugaría un papel destacado, dejaría todavía más expuesta la fractura interna en el ejército.

### Campo de Mayo en los fusilamientos de 1956

La dura represión del régimen encabezado por Aramburu y Rojas contra el movimiento peronista, sumada a una política económica que impactó regresivamente en el salario real de los trabajadores (Belini y Korolo, 2012), creó las condiciones para que comenzara a organizarse una resistencia popular con huelgas en todo el país, actos de sabotaje a la producción y atentados con “caños” caseros contra lugares e instituciones sensibles para los militares (James, 1990; Salas, 2014). En un marco de creciente amenaza para la dictadura, un conjunto de oficiales peronistas retirados, respaldados por oficiales “profesionalistas” en servicio activo y, sobre todo, por suboficiales descontentos, además de civiles y sindicalistas, decidió emprender un movimiento revolucionario en distintas unidades del ejército con la meta de desatar una rebelión general que derribara a la dictadura.

En la noche del 9 de junio de 1956, la acción armada comenzó en varios puntos del país, con Juan José Valle, un general de división que se había retirado voluntariamente tras el golpe a Perón, como su cara más visible. En la ciudad de La Pla-

ta, los insurrectos lograron tomar el Regimiento 7 de Infantería, así como varias radioemisoras en el interior de la provincia de Buenos Aires. En Santa Rosa, La Pampa, coparon el cuartel general militar y el departamento de policía. En la Capital, intentaron sin éxito ocupar la Escuela de Mecánica del Ejército y volar su arsenal de los regimientos de Palermo.

En Campo de Mayo, el movimiento rebelde consiguió sublevar a parte del personal de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” y controlar algunas de sus instalaciones por unas horas. Cerca de las nueve de la noche del 9 de junio, un grupo de unos cuarenta rebeldes se reunió en una casa cerca de la guarnición para planificar el asalto. Además de otros oficiales, suboficiales y civiles, en el encuentro participaron los coroneles Rubén Berazay, designado para dirigir la acción, Alcibiades Cortines y Ricardo Ibazeta. Cada uno quedó a cargo de una parte de la operación que se llevaría a cabo en Campo de Mayo: Berazay debía copar la Agrupación Escuela de la escuela “Sargento Cabral”, donde se concentraba la mayor cantidad de hombres y armas del instituto; Cortines, la Agrupación de Infantería; e Ibazeta, la Agrupación de Servicios de otra unidad estratégica de la guarnición, la 1ª División Blindada (Ferla, 1972).

Con la ayuda de suboficiales comprometidos en la rebelión, Cortines e Ibazeta tuvieron éxito en sus misiones y lograron penetrar en las unidades y arrestar al personal que no colaboraba<sup>60</sup>. Cerca de la medianoche, Ibazeta partió de la 1ª División Blindada con una caravana de ocho vehículos y se reunió con los hombres de Cortines en el ingreso de la Agrupación de Infantería de la escuela “Sargento Cabral”, donde permanecieron juntos a la espera de las órdenes de Berazay. Sin embargo, la tercera y principal pata de la operación había fracasado. Tal como los propios insurrectos sabían, los rumores sobre una sublevación habían corrido durante todo el día en Campo de Mayo. Para cuando Berazay llegó a su objetivo, las guardias habían sido reforzadas. El coronel, por su parte, había conseguido sumar a una cantidad de hom-

<sup>60</sup> Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”. *Libro Histórico 1951 a 1957*. Serie Libros y Memorias Históricas, Servicio Histórico del Ejército.



bres muy por debajo de lo esperado. Frente a una derrota cantada, desistió y huyó de la guarnición sin poder dar aviso a sus colegas. Hacia la una de la madrugada, los coroneles Cortines e Ibazeta y sus colaboradores se encontraban desprotegidos y acorralados en Campo de Mayo.

El cuadro general tampoco favorecía su posición. El movimiento rebelde no solo había fallado en Campo de Mayo sino también en las demás unidades del país donde se habían registrado acciones. Las órdenes radiales nocturnas que se esperaban de Valle nunca llegaron. Para la mañana del 10 de junio, todos los focos rebeldes, incluyendo La Plata, Santa Rosa y la Capital Federal, habían sido sofocados por las fuerzas leales a la dictadura. En Campo de Mayo, pasadas las dos de la mañana, Cortines e Ibazeta se rindieron ante

las tropas de los institutos de la guarnición, organizadas bajo el plan de conmoción interna del ejército y al mando del jefe de acantonamiento, el general Juan Carlos Lorio, que ni siquiera necesitaron entrar en acción.

La "Revolución Libertadora" reprimió el levantamiento de junio de 1956 con una violencia inusitada hasta entonces. Aunque el movimiento insurreccional había pecado de previsible y descoordinado, y aunque ni siquiera había cosechado el apoyo de Perón desde el exilio, la cúpula del régimen militar leyó en los eventos de junio una amenaza para su legitimidad frente a sus apoyos civiles y militares, y actuó en consecuencia. Pese a que la pena de muerte había sido suprimida del código de justicia militar, dieciocho militares y nueve civiles acusados de participar en la rebelión

fueron fusilados durante los tres días siguientes. La Junta Militar, integrada por Aramburu, Rojas y los ministros de las tres armas, desoyó el consejo de los tribunales castrenses conformados para juzgar a los rebeldes, que recomendaron someterlos a la justicia militar ordinaria sin penas capitales, y en cambio impulsó que se procediera retroactivamente según los castigos máximos previstos en la ley marcial, incluso cuando había sido impartida varias horas después de los eventos juzgados.

La sucesión de hechos en Campo de Mayo durante el 10 de junio ilustra esa tensión entre la cúpula del régimen y los oficiales en el territorio a cargo de resolver qué hacer con los sublevados. En la mañana de aquel día, el general Lorio conformó un consejo de guerra para juzgar a Cortines,

Ibazeta y otros cuatro colaboradores cercanos que habían permanecido bajo arresto desde la noche anterior. Tal como estipulaba una larga tradición militar de clemencia entre compañeros de armas, el tribunal no hizo lugar a la pena de muerte. Sin embargo, unas horas más tarde del juicio sumario, Lorio fue convocado personalmente al Ministerio de Ejército y recibió una orden irrefutable. La sentencia del tribunal de alzada quedaba obsoleta porque el PEN había emitido un decreto extraordinario para fusilar a los detenidos. El texto de la normativa, que llevaba entre otras las firmas de Aramburu y Rojas, señalaba:

Visto: La participación que han tenido en el levantamiento militar ocurrido en el día de ayer, según resulta de las actuaciones producidas,

**EJERCITO ARGENTINO**  
COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO  
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO  
"C"

**ORDENES IMPARTIDAS**

FECHA		T E X T O	TRANSMITIDA POR:	RECIBIDA POR:
Día	Hora			
10	2330	Habló el Cap. BELLOZI, Coordinación Federal, diciendo tener información desembarque tropas estación Caballito sin poder precisar origen y efectivos. Se averigua estos datos por intermedio del S. I.E., Ministerio de Transporte, Cdo.D.1 y Policía Federal.	Cap. BELLOZI	My. ERNST
10	2350	Informa el Cap. BELLOZI que las noticias anteriores eran infundadas.	Cap. BELLOZI	My. ERNST
10	2315	Comunicación con el Cte.D.2 defensor del Tcnl. COGORNO, apela ante el Cte.J.Ej. por pena capital. Se contestó que no hay lugar a apelación.	Cte.D.2	My. ERNST
10	2400	R.1 informa que sale una patrulla a recorrer cancha de F.C.O.	Subof.Pr. PEREZ	Subof.My. MONTERO
11	0011	Fue ejecutado el Tcnl. COGORNO.	Cte.D.2	My. ERNST
11	0425	Cnl. MENDEZ de la D.G.I.M. comunica que la orden de ejecución del personal inculcado de esa Guarnición se ha cumplido a las 0350 hs. Pide que se haga llegar también la información al M. de Ej.	Cnl. MENDEZ	My. ERNST
11	0435	Cap. GUGLIELMONE comunica la información anterior a la Presidencia.	Cap. GUGLIELMONE	Red. Privada
11	0525	Se comunica al M.E., guardia, la información anterior	Subof.Pr. AGUILERA	Cabo 1º MIJAN

La Dirección de Institutos Militares informó al Estado Mayor del Ejército que en Campo de Mayo se ha dado cumplimiento a la orden de fusilar a los sublevados. Fuente: Serie Diarios de Guerra. Servicio Histórico del Ejército.

### Operación Masacre y los fusilamientos de 1956

En 1956, tras el fracaso del levantamiento liderado por el general peronista Juan José Valle, la autodenominada "Revolución Libertadora" no solo procedió a la ejecución de militares involucrados en la rebelión sino también de civiles. El 9 de junio, cinco personas sospechadas de tener vínculos con el movimiento fueron fusiladas clandestinamente en los basurales de la localidad bonaerense de José León Suárez. Seis meses después de los hechos, el periodista Rodolfo Walsh descubrió que había siete sobrevivientes de la masacre. El dato sirvió como disparador de una extensa investigación que Walsh volcó en *Operación Masacre*, un libro publicado en 1957 que inauguró el género literario de la "no ficción" y que se adelantó casi una década a *A sangre fría*, del estadounidense Truman Capote, usualmente citado en el mundo angloparlante como el pionero en el género. Con los sucesos de 1956 como motivo del libro, *Operación Masacre* perdura hasta hoy como pieza central del periodismo de investigación en Argentina y como una de las mayores obras literarias en habla hispana.



El 28 de diciembre de 1956 aparecía en el diario *Propósitos*, bajo el título "Castigo a los culpables", la primera denuncia de los fusilamientos de José L. Suárez firmada por uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Livraga. Detrás del testimonio se hallaba la reconstrucción de Rodolfo Walsh que impulsó a la víctima a hacerlo públicamente. Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno



El Presidente Provisional de la Nación Argentina en Ejercicio del Poder Legislativo, Decreta con Fuerza de Ley:

Artículo 1° - Impónese la pena de muerte por fusilamiento a los siguientes individuos: Coronel (R.) Alcibiades Eduardo Cortinez, Coronel (R.) Ricardo Salomón Ibazeta, Teniente Coronel (R.) Oscar Lorenzo Cogorno, Capitán Dardo Néstor Cano, Capitán Eloy Luis Caro, Teniente Primero Jorge Leopoldo Noriega, Teniente Primero de Banda Néstor M. Marcelo Videla, Suboficial Principal Miguel Angel Paolini, Suboficial Principal Ernesto Garecca, Sargento Hugo Eladio Quiroga y Cabo Primero Músico Miguel José Rodríguez.

Art. 2° - La ejecución será cumplida de inmediato por la Autoridad Militar en cuyo poder se encuentren los detenidos.

Art. 3° - El presente decreto-ley será refrendado por el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en el Departamentos de Ejército, Marina y Aeronáutica.

Art. 4° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.

Aramburu. — Isaac Rojas. — Arturo Ossorio Arana. — Teodoro Hartung. — Julio C. Krause<sup>61</sup>.

Pese a la resistencia de Lorio, la presión oficial desde la Casa Rosada no cedió, como tampoco lo había hecho la noche anterior, cuando un grupo de civiles implicados en la rebelión también había sido fusilado en los basurales de la localidad bonaerense de José León Suárez (Walsh, 1957). Sin nada que pudiera impedirlo, el fusilamiento de los seis militares detenidos en Campo de Mayo se consumó en la madrugada del 11 de junio, en un terraplén de la guarnición (Ferla, 1972).

La armada había jugado un papel protagónico en la decisión de ejecutar a los sublevados de las distintas unidades. En el caso de Campo de Mayo, desde las primeras horas de la mañana del 10 de junio, el almirante Rojas había hecho un seguimiento personal de la situación de los detenidos, y se había mantenido en comunicación permanente con el Comando del Ejército para exigir informes “en carácter de urgente” sobre el juicio sumario en la guarnición<sup>62</sup>. La insistencia naval

<sup>61</sup> Decreto Ley N° 10.364, 10 de junio de 1956.

<sup>62</sup> Comando en Jefe del Ejército - EMGE “Conintes”. *Órdenes impartidas, 9/6/1956 al 11/6/1956*. Serie Diarios de Guerra, Servicio

para saber si se procedería a fusilar en Campo de Mayo se había sostenido incluso después de que Lorio avisara que el resultado del consejo de guerra se conocería después del mediodía. En los meses posteriores a los sucesos sangrientos de junio, la armada aplicaría esa misma intransigencia para todos los asuntos de gobierno, lo que le garantizaría una cuota de poder considerable frente a un ejército cada vez más dividido.

Aunque fracasó en sus objetivos, el levantamiento de 1956 llevó la fractura en el arma terrestre hasta un punto de no retorno. Los sectores antiperonistas acérrimos y ultraliberales interpretaron que había llegado la hora de liquidar a los elementos nacionalistas que no se habían comprometido activamente con la represión al peronismo. Entre noviembre y diciembre de 1956, para conservar su propia autoridad, Aramburu pasó a retiro a una docena de oficiales superiores nacionalistas y promovió a generales a una docena de liberales (Rouquié, 1983). Otra vez la purga de puestos jerárquicos aparecía como el mecanismo de resolución de conflictos políticos dentro de la fuerza, cuyo estado de deliberación permanente se prolongaría por varios años más.

### La salida electoral y la cuestión militar durante el gobierno radical

Desde fines de 1956, el gobierno de la “Revolución Libertadora” comenzó a dar señales de agotamiento que pusieron sobre la mesa la imposibilidad de postergar indefinidamente un llamado a elecciones. El congelamiento de los salarios, la inflación desatada, el déficit comercial y el ajuste del gasto configuraban un cuadro económico insostenible para el régimen, a su vez perdido en las disputas políticas internas que asolaban a las Fuerzas Armadas (Rouquié, 1983). Mientras el fiasco del gobierno militar relativizaba la imagen negativa que algunos sectores sociales se habían hecho del segundo gobierno de Perón, el intento oficial de “desperonizar” la sociedad había provocado el efecto contrario: una radicalización de la resistencia peronista, sobre la que el ex presidente

Histórico del Ejército.

en el exilio tenía sus cartas para jugar.

Contra los deseos de otros generales antiperonistas que pretendían permanecer en el poder, Aramburu prosiguió con su estrategia “legalista” e intentó reducir al mínimo los daños para el ejército y para su propia figura. Ante la perspectiva de un llamado a elecciones, en las que el peronismo estaría proscrito, la incógnita no solo era el comportamiento del electorado peronista sino, también, de los demás partidos. Al igual que en las Fuerzas Armadas, la cuestión de qué hacer con el legado de Perón provocó un cisma en la principal fuerza antiperonista, la Unión Cívica Radical, que desde noviembre de 1956 se partió entre la UCR Intransigente (UCRI), liderada por el desarrollista Arturo Frondizi, y la UCR del Pueblo (UCRP), liderada por el radical conservador Ricardo Balbín (Smulovitz, 1991). Mientras el balbinismo gozaba de la preferencia de la dictadura, los frondicistas buscaban captar el voto de la base peronista con un programa político que, sin Perón pero apoyado en los principios del desarrollismo, postulaba soberanía económica, presencia social del Estado y una postura progresista en materia de política internacional.

En las primeras semanas de 1958, ya como candidato presidencial, Frondizi logró consumar el hecho que le daría la victoria en las elecciones, previstas para el 23 de febrero: un pacto con Perón, que luego se conocería como el “Pacto de Caracas”. Desde el exilio, el ex presidente llamó a sus seguidores a votar por Frondizi, quien se comprometió a terminar con la persecución al peronismo, levantar su proscripción y restablecer



En la Escuela de Mecánica del Ejército, soldados rodean una posición defendida con una ametralladora durante la crisis militar de septiembre de 1959. Fuente: Colección Archivo General de la Nación. Archivo Nacional de la Memoria.

el esquema sindical previo a la dictadura en caso de ser electo. Con el respaldo táctico de Perón, la fórmula de la UCRI arrasó en las elecciones. Frondizi llegó al poder gracias a una alianza circunstancial que ninguno de los golpistas de 1955 consideraba legítima. Por lo menos una cosa era segura: durante su gobierno, los militares estarían lejos de regresar a los cuarteles. La politización del ejército y la relativa disolución de su cadena de mandos pesaría como una amenaza sobre el nuevo presidente durante todo su mandato.

La gravedad de esa amenaza llegó a manifestarse con claridad en los primeros días de septiembre de 1959, cuando una nueva disputa por cargos en el seno del ejército estuvo a punto de derivar en un enfrentamiento militar de envergadura nacional. La crisis se inició cuando el secretario de Ejército, el general retirado Elbio Anaya, un oficial de prestigio en la caballería y alejado de las recientes disputas al que Frondizi había nombrado con la esperanza de restaurar la unidad en la fuerza, decidió destituir, con el aval presidencial, al flamante comandante en jefe del ejército, el general Carlos Toranzo Montero, a quien el propio Anaya había designado pocas semanas antes, según la costumbre de nombrar al general de división de mayor antigüedad<sup>63</sup>. Oficial de caballería, enemigo del ultranacionalismo, Toranzo Montero ostentaba un largo historial de antiperonista furibundo. Había sido el ideólogo de un intento frustrado de magnicidio contra Perón en el exilio, y era uno de los generales que habían buscado persuadir a Aramburu de que anulara las elecciones ante la evidencia de un pacto entre Perón y Frondizi. Con el respaldo de Frondizi, Anaya había resuelto destituirlo luego de que Toranzo Montero iniciara su comandancia con un reparto

<sup>63</sup> Elbio Anaya contaba con una larga trayectoria en el ejército que incluía la participación en dos hechos salientes de la historia política nacional de la primera mitad del siglo veinte. El primero se remontaba a comienzos de la década de 1920, cuando el entonces teniente primero guió a uno de los escuadrones de caballería que participó de la represión a los trabajadores rurales en Santa Cruz. Dos décadas después, ya ascendido al rango de coronel y convertido en la máxima autoridad de Campo de Mayo, Anaya marchó desde la guarnición hacia la Plaza de Mayo para sumarse al alzamiento militar que terminaría con el gobierno del conservador Ramón Castillo. Para más información, ver el primer número de esta colección, disponible en: [www.argentina.gob.ar/sites/default/files/investigacion\\_campo\\_de\\_mayo\\_-\\_numero\\_1.pdf](http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/investigacion_campo_de_mayo_-_numero_1.pdf).



de puestos clave entre hombres de su confianza, sin consultarlo con el gobierno.

En la noche del 3 de septiembre, luego de recibir el apoyo de varios generales de la zona de Buenos Aires, algunos de ellos con mando de tropas, Toranzo Montero se acuarteló en la Escuela de Mecánica del Ejército y anunció por radio a todas las unidades que reasumía la comandancia. Durante las horas siguientes, guarniciones en todo el país se posicionaron a favor o en contra del pronunciamiento y se prepararon para salir a las calles a dar batalla. Toranzo Montero contaba con fuerzas mayoritarias en el interior, mientras que en Buenos Aires consiguió plegar a dos regimientos de infantería de la 1ª División Motorizada. Sin embargo, otras unidades con poder de fuego, como el grupo de Artillería de Ciudadela o el Regimiento de Granaderos, permanecían leales al gobierno. Campo de Mayo estaba dentro de ese grupo, y durante la madrugada llegaron a movilizarse tanques desde la guarnición para un eventual enfrentamiento con los rebeldes. Mientras tanto, oficiales de la armada y la fuerza aérea, dos fuerzas que se mostraban ambiguas ante la rebelión y reticentes a participar en la represión, se acercaban a Campo de Mayo para intentar persuadir a sus comandos e institutos de que no se opusieran activamente a Toranzo Montero (Potash, 1981).

Una vez que los tanques llegaron a las puertas de la ciudad de Buenos Aires, Frondizi debió decidir si ordenar que atacaran la Escuela de Mecánica, controlada por los rebeldes, o intentar una negociación con Toranzo Montero. En un rápido cálculo de costos políticos, el presidente optó por

lo que consideró el mal menor: removió a Anaya de la Secretaría de Ejército<sup>64</sup> y restituyó a Toranzo Montero como comandante (Luna, 1983). En la tarde del 4 de septiembre, las unidades movilizadas regresaron a sus bases sin haber llegado a combatir.

La crisis inmediata se había evitado, pero las consecuencias políticas del episodio serían perdurables. A partir de entonces, Toranzo Montero permaneció veinte meses atrincherado en su cargo, lo que constituía un recordatorio cotidiano de que Frondizi no había logrado imponer su autoridad al más alto nivel del ejército. Eso no solo resultaba decepcionante para sus propios colaboradores, sino también para los militares “profesionalistas” que se habían mantenido leales y contrarios al alzamiento de Toranzo Montero, a quien ahora tenían como jefe. Toranzo Montero, por su parte, había acumulado un capital suficiente como para imponer su control del ejército a través de cambios de nombres de amplio alcance, con el fin de asegurarse hombres de confianza en comandos clave, especialmente en el área de Buenos Aires. Bajo la comandancia de Toranzo Montero, el ejército se embarcaría en una nueva tarea que definiría su papel en la vida nacional durante las siguientes dos décadas: la de adaptar su doctrina y sus métodos de combate para reprimir al “enemigo interno” del comunismo bajo la hipótesis de una “guerra revolucionaria”.

<sup>64</sup> Anaya fue reemplazado por el general retirado Rodolfo Larcher, amigo de Frondizi y también de Toranzo Montero, a quien Larcher había conocido en los años treinta, cuando ambos eran tenientes del Regimiento N° 8 de Caballería que se había opuesto al derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Ver Luna (1983).

## Campo de Mayo durante la reestructuración del ejército

La crisis de septiembre de 1959 fortaleció la posición del general Toranzo Montero, quien promovió una política de tutelaje del ejército sobre la figura presidencial bajo la hipótesis de una posible insurrección del peronismo, al que consideraba un camino hacia el comunismo. La teoría de la “guerra revolucionaria” se discutía en círculos militares desde 1957, cuando una misión de oficiales franceses la había introducido en la Escuela Superior de Guerra (Mazzei, 2012; Ayala y Chiarini, 2022; Pontoriero, 2022a). Bajo ese paradigma, la vigilancia del generalato sobre el poder civil promovida por Toranzo Montero pronto dio resultados concretos. En marzo de 1960, a instancias del comandante del ejército, Frondizi aceptó implementar el llamado “Plan de Conmoción Interna del Estado” o “Plan CONINTES”, que suponía un estado de emergencia permanente y dejaba la represión política en manos de las Fuerzas Armadas, que a partir de entonces subordinaban a las policías y adquirirían atributos para juzgar en tribunales militares a civiles acusados de “actos subversivos” (Franco y Pontoriero, 2013; Archivo Nacional de la Memoria, 2014). Tres meses después, el presidente también debió ceder a presiones castrenses para intervenir la provincia de Córdoba, cuyo gobierno estaba acusado de mantener vínculos con la resistencia peronista.

Toranzo Montero pasó rápidamente de la política de vigilancia a la presión frontal contra Frondizi. En octubre de 1960, varios oficiales del Estado Mayor del Ejército le presentaron un memorándum al presidente en el que le exigían mano firme contra el “comunismo”, además de una purga de miembros del gobierno que mantenían puentes con el peronismo y una serie de reformas en materia de política económica y relaciones internacionales<sup>65</sup>.

El documento conllevaba la amenaza implícita de un golpe militar. Años después, el propio Toranzo Montero reconocería que a él no le “importaba tanto lo que estaba escrito en el memorándum como que el memorándum fuera el ariete, el arma materializada con la cual llegar a chocar con Frondizi para producir la acción de fuerza en caso que Frondizi no aceptara” (Potash, 1981: 435).

Sin embargo, los planes conspirativos de Toranzo Montero se frustraron cuando constató que su propia figura no producía un cierre de filas al interior del ejército, sino más bien lo contrario: muchos oficiales rechazaban lo que consideraban un abandono del profesionalismo militar. Según estos sectores, el torancismo “había sacrificado la disciplina del ejército en aras de la ambición política” y había introducido un “factor anarquizante” en la fuerza que había “institucionalizado el estado deliberativo”<sup>66</sup>. El activismo golpista de Toranzo Montero y su antiperonismo radicalizado prefiguraban los rasgos de aquello que, un par de años después, se daría a conocer como la facción “colorada” del ejército. Del otro lado, la reacción contra el torancismo provenía de oficiales antiperonistas, entre ellos, varios exponentes de la vieja línea “legalista”, unidos por un reclamo de profesionalización y modernización del ejército. Este sector tenía su peso sobre todo en el Estado Mayor y en la ESG. Luego, cuando se conocería como el bando “azul”, concentraría sus mayores apoyos en el arma de caballería, en especial entre los comandos de unidades al nivel de regimientos, y pronto encontraría en Campo de Mayo una base crucial para apuntalar su dominio sobre la fuerza.

Los ánimos golpistas de octubre de 1960 no pasaron a mayores: sin apoyo unánime en el ejérci-

to, y sin respaldo de la armada ni la fuerza aérea, el torancismo no logró imponer sus condiciones a Frondizi, quien atendió los reclamos del memorándum pero se negó a purgar a los civiles señalados como cercanos al peronismo. Apenas entregó como fusible a su secretario de Ejército, que fue reemplazado por el general de brigada Rosendo Fraga, jefe de Campo de Mayo. Durante los meses siguientes, la posibilidad de un enfrentamiento entre los bandos en pugna, así como de un desenlace violento del choque entre Frondizi y Toranzo Montero, se mantuvo en estado latente. Campo de Mayo no era ajeno a ese clima de conspiración y agitación. En noviembre, ante versiones atizadas por Toranzo Montero acerca de que Frondizi se disponía a destituirlo, algunas unidades dentro de la guarnición adoptaron medidas especiales de seguridad y alistamiento ante la eventualidad de un conflicto armado, que finalmente no llegó a estallar<sup>67</sup>.

En marzo de 1961, una sucesión de acontecimientos políticos precipitaron la resolución de la disputa entre el comandante en jefe y el presidente. El triunfo del antiguo socialista Alfredo Palacios en la elección para senadores de la Capital Federal, sumado a la decisión de Frondizi de terminar con la intervención de la CGT y a los guiños de su gobierno a la Cuba de Fidel Castro, compuso un cuadro que convenció a Toranzo Montero de volver a la acción. Sin embargo, al sondear al secretario Fraga y a otros generales para emprender el golpe contra Frondizi, comprobó que el desprestigio de su figura entre los oficiales que rechazaban la politización del ejército había llegado demasiado lejos. Ante la evidente falta de apoyo a sus planes dentro de su propia fuerza, Toranzo

<sup>67</sup> Carta confidencial del coronel Alejandro Agustín Lanusse, subdirector de la Escuela Superior de Guerra, al Jefe del Estado Mayor del Ejército, noviembre de 1960. Azules y colorados. Servicio Histórico del Ejército.

Montero debió renunciar a sus anhelos golpistas y pasó a retiro de inmediato. Para Frondizi, el fin de la amenaza torancista, que coincidió con una serie de victorias electorales de su partido en algunas provincias, abrió un período de relativa estabilidad durante el que pudo librarse del yugo del ejército en el ejercicio cotidiano de sus funciones. La aparente calma, sin embargo, iba a durar apenas algunos meses.

### La orden que no llegó: Campo de Mayo en el golpe contra Frondizi

La salida de Toranzo Montero no significaba el fin de las divisiones en el ejército. Aunque casi todos los sectores coincidían en el veto a Perón y en la preocupación por la “amenaza comunista”, persistían las diferencias en torno a la conveniencia de mantener o no a Frondizi en el poder (Rouquié, 1983). En busca de garantizar un mínimo equilibrio entre las partes, el secretario Fraga movió piezas en puestos sensibles e hizo algunas concesiones a los oficiales “legalistas” de la caballería. Uno de los mayores beneficiados en el reparto de promociones fue el general de brigada Juan Carlos Onganía, un viejo aliado de Anaya, designado como comandante de la poderosa 1ª División Blindada de Campo de Mayo. Desde allí, el general Onganía construiría un núcleo de poder que, en los meses siguientes, gravitaría de forma decisiva sobre el curso político nacional.

Desde la segunda mitad de 1961, un nuevo factor agudizó las deliberaciones en las Fuerzas Armadas acerca del destino del gobierno frondicista. Aunque se había mostrado flexible ante las presiones militares en torno a cuestiones de política económica, social y cultural, el presidente ensayaba una creciente autonomía en materia de

<sup>65</sup> *La Prensa*, 14 de octubre de 1960.

<sup>66</sup> *Extra*, mayo de 1966.



relaciones exteriores, un terreno históricamente sensible para la corporación militar. Bajo las premisas de la soberanía nacional y la defensa de un papel independiente y relevante para Argentina en el concierto hemisférico, Frondizi promovió una estrategia de acercamiento a Cuba, que no implicaba una ruptura con los Estados Unidos sino la apertura de una posible vía de negociación entre los gobiernos de Fidel Castro y John F. Kennedy (Cisneros y Escudé, 2000).

Frondizi evaluaba que, frente al conflicto cubano-estadounidense, la posición más ventajosa para Argentina era la de mediadora neutral. Bajo esa convicción, en agosto de 1961 el presidente recibió en la residencia de Olivos a Ernesto “Che” Guevara, entonces ministro de Industria de Cuba. Aunque Frondizi intentó mantener el encuentro en secreto y no informó a las Fuerzas Armadas, la presencia de Guevara en el país pronto se filtró públicamente y desató un estado de convulsión general en los cuarteles. Para las Fuerzas Armadas, la cuestión cubana era vista como un problema de seguridad hemisférica que no admitía

medias tintas: el gobierno comunista de Castro debía caer y Argentina debía sumarse a la presión internacional, mediante sanciones que incluyeran la expulsión de Cuba del Sistema Interamericano de Defensa y de la Organización de Estados Americanos (OEA). En lo inmediato, Frondizi logró sortear la crisis por la visita de Guevara sacrificando a su canciller. Pero la tensión con las Fuerzas Armadas se había elevado al máximo. Aun cuando su diagnóstico sobre los asuntos regionales tal vez fuera acertado, el problema de Cuba se había convertido en una espada que ahora pendía sobre su gobierno. En el ejército, los ánimos de la minoría golpista comenzaron a contagiar a oficiales que hasta entonces se habían mostrado dudosos y, sobre todo, “desarmaron en algunos militares la voluntad de defender con las armas la legalidad” (Alonso, 1972).

Esta crisis tomó un nuevo vigor en enero de 1962, durante una reunión de cancilleres de la OEA en Uruguay, cuando la delegación argentina, junto a Brasil, México, Chile, Bolivia y Ecuador, se abstuvo en una votación para expulsar a Cuba del sistema interamericano. Aunque el canciller argentino solo adujo motivos jurídicos para la abstención, y aunque votó a favor de varios otros puntos de condena al gobierno de Castro, las Fuerzas Armadas interpretaron su postura como un desafío abierto. A través de los secretarios militares, los altos mandos dieron un ultimátum a Frondizi para que se comprometiera a un giro radical en su política exterior y rompiera de inmediato las relaciones diplomáticas con Cuba. El presidente prometió estudiar el problema, mientras efectivos de las tres armas se acuartelaban en unidades en todo el país. Frondizi se había quedado sin margen: cuanto más durara la crisis, más probabilidades había de que la minoría de oficiales favorables al golpe arrastrara a la mayoría de “legalistas” desconcertados por el rumbo del gobierno. Finalmente, en febrero de 1962, el presidente firmó un decreto de ruptura de relaciones con Cuba.

Pero la amenaza sobre su continuidad en el poder quedó en suspenso por apenas algunas semanas. Si las fricciones en el ámbito de la política exterior habían hecho tambalear al gobierno, el golpe definitivo le caería como producto de sus

movimientos en el terreno de la política doméstica. Por una serie de cálculos de costos, beneficios y oportunidades que se demostrarían demasiado optimistas, Frondizi habilitó la participación de candidatos peronistas en las elecciones del 18 de marzo de 1962, en las que se jugaban el control de la Cámara de Diputados y las gobernaciones de varias provincias, en particular de Buenos Aires. Una activa presión castrense habría bastado para impedirlo, pero esta vez la corporación militar, y en especial la mayoría “legalista” el ejército, asumió una postura pasiva y cautelosa que parecía dar un mensaje: aunque ningún sector militar quería el retorno del peronismo, las Fuerzas Armadas no iban a servirle como instrumento político a Frondizi. Los “legalistas” admitían su permanencia en la Casa Rosada como antídoto contra Perón, pero no a costas del prestigio “profesionalista” que pretendían para sí mismos.

Frondizi había apostado su último capital político a un triunfo en las urnas, y perdió. Los candidatos peronistas y cercanos al peronismo ganaron diez de las catorce gobernaciones en juego, incluyendo la estratégica provincia de Buenos Aires. Tras el conteo de votos, el gobierno frondicista entró en una agonía que se prolongaría por diez días hasta la destitución del presidente. El hecho de que el golpe no se hubiera consumado de forma inmediata dejaba en evidencia las divisiones que aún persistían en las Fuerzas Armadas en torno al papel que estaban llamadas a cumplir. Durante los días posteriores a la elección, Frondizi ensayó varias fórmulas para intentar evitar el colapso de su presidencia, desde la intervención federal de las provincias en las que había ganado el peronismo hasta una propuesta al general Aramburu para que oficiara como mediador y lo ayudara a conformar un nuevo gabinete satisfactorio para los militares.

Pero la suerte ya estaba echada. La armada tomó la iniciativa y le planteó a Frondizi que renunciara voluntariamente para que lo sucediera un gobierno constitucional. Frondizi se negó mientras pudo; todavía contaba con el respaldo del secretario Fraga y con la lealtad de parte del ejército. En los días previos a su caída, Campo de Mayo se convirtió en uno de sus principales sostenes. A través de una nota del general Onga-

nía, la guarnición se desmarcó de la presión de la armada y se encolumnó detrás del intento del gobierno por recuperar el manejo de la situación (Mazzei, 2012). Sin embargo, las presiones y los movimientos a favor de la salida de Frondizi habían comenzado a ganar apoyos decisivos en el ejército, entre ellos, el del comandante en jefe, el general Raúl Poggi, y el del propio Aramburu, quien finalmente se convenció de soltarle la mano al presidente.

El desenlace de la crisis se precipitó en la madrugada del 28 de marzo de 1962, cuando el Regimiento 3 Motorizado de La Tablada, en las afueras de la Capital Federal, se declaró en rebelión. Aun cuando su situación era crítica, Frondizi seguía en posición de forzar un enfrentamiento armado: en Campo de Mayo, algunos comandantes “legalistas” todavía le respondían al gobierno y estaban preparados para recibir la orden de reprimir a los rebeldes. El coronel Tomás Sánchez de Bustamante, comandante del RC 10, y el general Carlos Augusto Caro, al mando de la Escuela de Caballería, ya habían alistado a sus tropas y tanques y habían comenzado a coordinar eventuales acciones con los Granaderos a Caballo de San Martín, el regimiento de escolta presidencial, para avanzar contra los rebeldes de La Tablada (Potash, 1981). Sin embargo, Frondizi les ordenó que desistieran del plan. El presidente estaba tan decidido a negar su renuncia voluntaria como a ser el responsable político de derramamientos de sangre. Horas más tarde, la acción del Regimiento 3 de La Tablada, que ingresó a la Capital sin encontrar resistencia y amenazó con ocupar la Casa Rosada, resultaría determinante para la salida de Frondizi del poder.

En esas primeras horas del 28 de marzo, el comandante de la Caballería, el general Enrique Rauch, intentó otro movimiento en apoyo al gobierno y se trasladó a Campo de Mayo, donde obtuvo el respaldo de oficiales de la 1ª División Blindada para lanzar la represión contra los sublevados. Desde la guarnición, Rauch se comunicó con el comandante en jefe, el general Poggi, para informarle que a partir de entonces desconocía su autoridad. Sin embargo, cuando intentó contactarse con el secretario Fraga, con quien había articulado más temprano su jugada, se enteró de que había renunciado. Sin apoyo político



Un documento del Ejército Argentino recopilaba actividades realizadas en el marco de la Doctrina de Seguridad Hemisférica impulsada por Estados Unidos. Fuente: Colección Doctrina Militar – Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Archivo Nacional de la Memoria.

suficiente, Rauch desistió de sus planes y se dio por relevado de su puesto. Poco después, tanto él como Fraga serían arrestados por los impulsores del golpe de Estado.

Por la tarde, Frondizi recibió en la Casa Rosada a los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, quienes le exigieron la renuncia e insistieron en que lo reemplazara un gobierno civil. Aunque circularon versiones de que el presidente había analizado trasladarse a Campo de Mayo para intentar resistir desde allí, lo cierto es que abandonó la Casa de Gobierno con rumbo a la residencia de Olivos, donde no podía más que esperar el acto final de su caída. Durante las últimas horas del día, se comunicó con algunos referentes del sector “legalista” del ejército para saber si aún contaba con su apoyo, entre ellos, el general Onganía, comandante de la 1ª División Blindada de Campo de Mayo, y el coronel Alejandro Lanusse, subdirector de la Escuela Superior de Guerra. Pero las parcas respuestas que recibió de ambos indicaban que, a esa altura de los hechos y en forma análoga a lo que había ocurrido durante el golpe a Perón en 1955, los “legalistas” daban por terminado el tiempo de Frondizi en el poder y se concentraban más bien en imponer su receta para la sucesión. De hecho, tras el arresto del destituido presidente en la mañana siguiente, el comando del ejército recibió una advertencia desde Campo de Mayo: si el general Poggi osaba asumir la presidencia, los tanques marcharían desde la guarnición hacia la Casa Rosada (Mazzei, 2012). El propio Onganía advirtió que el sucesor de Frondizi debía ser un civil. Finalmente, el 29 de marzo de 1962, el presidente provisional del Senado, José María Guido, miembro de la UCRI, asumió la presidencia.

### Campo de Mayo, base del poder “azul”

Guido asumió condicionado por la interna en el ejército, que una vez más se reflejó en el reparto de cargos y promociones. La salida de Fraga representó un triunfo para los viejos torancistas, y su sucesor en la Secretaría de Ejército, el general retirado Marino Carreras, benefició con sus primeras designaciones al sector que había alentado

el golpe. Tras la asunción de Carreras, oficiales del bando “legalista” comenzaron a reunirse en la Escuela Superior de Guerra para discutir el curso de acción, con la presencia de mandos de la caballería como los generales Enrique Rauch, Carlos Caro, Osiris Villegas, Juan Carlos Onganía y el coronel Lanusse<sup>68</sup>. En el corto plazo, el objetivo era forzar al gobierno a recalculer el reparto de cargos que había dado ventaja a los golpistas.

Para el nuevo presidente, la otra cuestión acuñante seguía siendo qué hacer con el peronismo. El día de su asunción, Guido se había visto obligado a firmar un acta secreta ante los comandantes de las Fuerzas Armadas en la que se comprometía a anular las recientes elecciones, en las que habían triunfado los candidatos peronistas y neoperonistas. A mediados de abril, en medio de fuertes presiones de los sectores más antiperonistas del ejército y de la armada, se conoció la aceptación presidencial de intervenir todas las provincias en cumplimiento del acta, lo que desató una crisis en el gabinete nacional y provocó la renuncia del ministro del Interior, Rodolfo Martínez, hasta entonces principal promotor civil de una salida constitucional.

Campo de Mayo sirvió como base de operaciones de los sectores “legalistas” del ejército que resistieron la decisión. Al igual que lo había hecho ante la amenaza de golpe a Frondizi, el general Rauch, comandante de la Caballería, conformó un comando en la guarnición para planificar las eventuales acciones militares. Su presión logró forzar la renuncia del secretario Carreras, pero Rauch no consiguió imponerse como su sucesor. El 21 de abril, el general ordenó a las tropas de Campo de Mayo que se movilizaran hacia la Capital Federal, defendida por la 1ª División de Infantería. Los tanques partieron desde Campo de Mayo y desde el Regimiento 8 de Tanques de

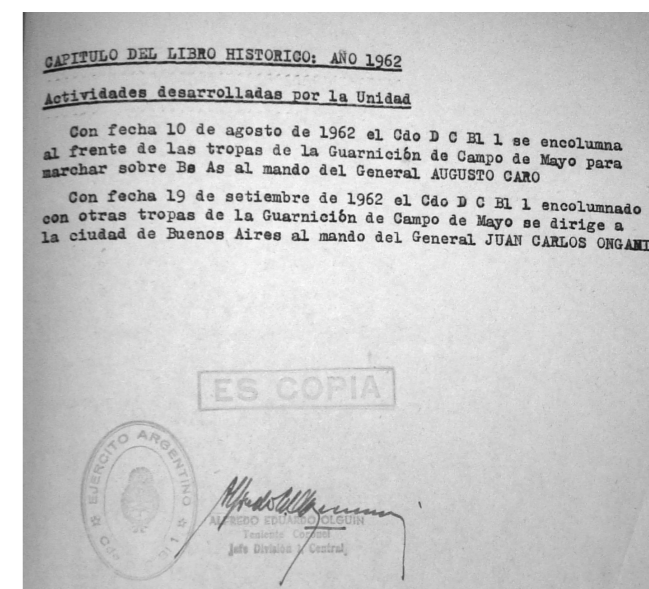
<sup>68</sup> Los verdaderos móviles que probaron la intervención de cierto grupo de la Guarnición de ‘Campo de Mayo’ y la ‘Escuela Superior de Guerra’ en la última crisis del Ejército [Informe], abril de 1962. Azules y colorados. Servicio Histórico del Ejército. En este documento, de tono golpista, se identifica como parte del grupo rival a “la Escuela Superior de Guerra, un grupo minoritario del Servicio de Inteligencia del Ejército y parte de la guarnición de Campo de Mayo”, además de algunas guarniciones del interior del país cuyos comandantes comulgaban con ese sector.

Magdalena con destino al Ministerio de Guerra<sup>69</sup>. Sin embargo, acabaron refugiándose en el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo luego de una intervención decisiva de la armada, que amenazó con tomar represalias si Rauch asumía el liderazgo del ejército. Sin que hubiera llegado a producirse un enfrentamiento armado, el general debió ceder y aceptar su relevo como comandante de la Caballería. Rauch pasó a disponibilidad y, por sugerencia suya, lo reemplazó el general Onganía<sup>70</sup>.

Unos días después, el sector golpista también debió entregar su propio sacrificio: el general Poggi abandonó la comandancia en jefe y pasó a retiro. El gobierno de Guido necesitaba organizar con urgencia una distribución de cargos que asegurara un cierto equilibrio entre las dos facciones en pugna. Bajo ese criterio, el general retirado Juan Bautista Loza, un viejo nacionalista que no se identificaba directamente con los “legalistas” pero tampoco tenía antecedentes de antiperonismo radicalizado, asumió la Secretaría de Ejército

<sup>69</sup> Idem.

<sup>70</sup> Comando de la 1ª División Blindada. *Libro Histórico 1962*. Serie Libros y Memorias Históricas, Servicio Histórico del Ejército. Para pasar al Comando de la Caballería, Onganía recibió la baja del comando de la 1ª División Blindada el 23 de abril de 1962. Lo reemplazó en ese puesto otro connotado “legalista” de Campo de Mayo, el general Carlos Augusto Caro, ex director de la Escuela de Caballería.



El *Libro histórico* de la 1ª División Blindada refleja la participación de sus unidades en los enfrentamientos militares del año 1962. Fuente: Libros y memorias históricas. Servicio Histórico del Ejército.



y la comandancia de la fuerza. Aunque la jugada conformó temporalmente al sector “legalista”, en las semanas siguientes el gobierno se comportó tal como pretendían los oficiales antiperonistas más activos del ejército y la armada. Guido finalmente concretó la intervención de las provincias y la anulación de los últimos resultados electorales. El nivel de influencia que la interna militar había alcanzado sobre el rumbo político nacional auguraba que el choque armado entre las facciones pronto sería inevitable.

En agosto de 1962, una nueva crisis se desató en torno a la disputa por la Secretaría de Ejército. Una serie de actos de rebeldía de oficiales con puestos de comando que habían participado de las maniobras golpistas provocó la renuncia de Loza, pese a la oposición del grupo de Campo de Mayo y de varias divisiones del interior. La pugna por los puestos de liderazgo en el ejército había alcanzado un grado de autonomía inédito respecto del poder civil, a tal punto que el Poder Ejecutivo organizó una especie de encuesta entre los generales del cuerpo de comando de todo el país para decidir quién sucedería a Loza. El sector “legalista” mayoritario, con base en Campo de Mayo y con los generales Onganía y Caro como principales referentes, impuso a su candidato. Sin embargo, los golpistas resistieron la designación con el apoyo de la armada, que a esa altura había ganado para sí la capacidad de incidir de forma determinante en la interna del ejército.

Al igual que en abril, las tropas y tanques de la 1ª División Blindada se movilizaron el 10 de agosto hacia la Capital Federal desde Campo de Mayo, bajo el mando del general Caro<sup>71</sup>. Una vez más, el enfrentamiento llegó a evitarse mediante un llamado a tregua y negociación por parte de Guido, quien se reunió con ambas facciones y alcanzó un nuevo punto de acuerdo: la Secretaría de Ejército sería ocupada por el general retirado José Octavio Saravia, otro de los lonardistas purgados en 1956. A su vez, el nuevo comandante en jefe sería el general retirado Juan Carlos Lorio, quien también se encontraba fuera de actividad desde 1956 y quien *a priori* se presentaba como un liderazgo neutral.

<sup>71</sup> Idem.

Pero las sucesivas crisis de abril y agosto, en las que la disolución de las cadenas de mandos, el estado deliberativo y la indisciplina en el ejército habían alcanzado su punto máximo desde los tiempos de la “Revolución Libertadora”, marcaron un punto de quiebre irreversible para los “legalistas”, decepcionados además por una política de designaciones de Lorio que no castigaba a los conspiracionistas sino que, de hecho, los beneficiaba. En aquel contexto, el general Onganía, flamante comandante de la Caballería y referente del grupo de Campo de Mayo, se afianzó como la cara visible de un incipiente movimiento de rebelión por parte de su sector. A fines de agosto, Onganía fue pasado a disponibilidad luego de que se filtrara a la prensa un memorándum firmado por él y presentado ante Guido, en el que se exhortaba al presidente a terminar con la anarquía en el ejército y a romper definitivamente con los sectores golpistas<sup>72</sup>.

<sup>72</sup> Clarín, 26 de agosto de 1962.



La revista *Polémica: los hechos, los hombres* retrata la vida cotidiana de la ciudad de Buenos Aires, atravesada por tanques y compañías militares que recorrían sus calles durante el enfrentamiento entre “azules” y “colorados”. Fuente: Archivo Nacional de la Memoria.

Casi en simultáneo, ante una nueva ofensiva del golpismo que obligó a Guido a disolver al Parlamento, los “legalistas” por fin decidieron pasar a la acción. Un grupo de oficiales, en su mayoría coroneles de la caballería, conformó un verdadero estado mayor paralelo que comenzó a reunirse en la Escuela de Blindados de Campo de Mayo para discutir un plan de acción dirigido a recuperar la conducción del ejército y derrotar definitivamente a sus rivales<sup>73</sup>. El grupo apeló al general Onganía para que se convirtiera en su conductor y para que le diera forma a un nuevo memorándum que, bajo el título “Guido no tiene libertad de acción”, se publicó en la prensa a mediados de septiembre<sup>74</sup>. Se trataba de una proclama que explicitaba la pérdida de confianza de los “legalistas” en el poder presidencial para arbitrar en la interna del ejército, y que amenazaba con “pasar inmediatamente a la acción” ante cualquier nueva jugada del sector golpista. El camino hacia el enfrentamiento armado estaba despejado. Unos días después, Onganía se trasladó a Campo de Mayo e instaló su comando de operaciones en la entonces llamada Escuela de Logística “General Lemos”, al que pronto se sumaron otros altos

<sup>73</sup> Este grupo, que daría origen a la facción “azul”, estaba encabezado inicialmente por el general Julio Alsogaray e integrado por los coroneles Julio Eladio Aguirre, Manuel Laprida, Mariano de Nevares, José Jaime Toscano, Roberto Levingston, Manuel Ceretti, Julio Hang y Jorge Von Stecher, entre otros. Para más información, ver *Extra*, octubre de 1969.

<sup>74</sup> Comando de la 1ª División Blindada, *Op. cit.*

## Juegos de guerra: “azules” y “colorados”

En la noche del 18 de septiembre de 1962, el general Juan Carlos Onganía firmó en Campo de Mayo los primeros comunicados en los que se listaban los objetivos de su grupo, que pretendía derrotar a los “golpistas” que amenazaban al gobierno de José María Guido y restaurar la disciplina jerárquica en el ejército. El grupo “legalista” tomó la planta transmisora de Radio Belgrano para dar a conocer públicamente sus reivindicaciones. A partir de entonces, Onganía y los suyos se iden-

mandos dispuestos a la rebelión. En la noche del 18 de septiembre, los sublevados de Campo de Mayo emitieron sus primeros comunicados desde la guarnición anunciando sus reivindicaciones y objetivos. A partir de entonces comenzaron a identificar a sus propias tropas como “azules”, y designaron con el nombre de “colorados” a sus enemigos.

La movilización de tropas de ambos bandos del ejército, así como de la armada en favor de los “colorados”, comenzó en la madrugada del 19 de septiembre, sobre todo en el área del Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Al mando de Onganía, los tanques de la 1ª División Blindada marcharon desde Campo de Mayo hacia la Capital. Mientras las tropas se preparaban para dar inicio a la batalla, la residencia presidencial de Olivos era escenario de febriles negociaciones entre Guido y los sectores en pugna. El Poder Ejecutivo instaba a los “legalistas” a deponer las armas y les ofrecía la misma solución que en abril y agosto: sacrificar liderazgos de ambos grupos y designar a oficiales “neutrales” en los puestos de mando. Esta vez, sin embargo, los “azules” no se conformarían con otra cosa que un triunfo definitivo. El 21 de septiembre, el RC 10, al mando del coronel Tomás Sánchez de Bustamante, marchó desde Campo de Mayo hacia la Base Aérea de Morón y luego hacia la Capital. A esa altura del conflicto, los “legalistas” habían ganado el importante apoyo de la fuerza aérea, que anunció su alineamiento con el

tificaron a sí mismos como “azules” y designaron como “colorados” a sus rivales. Esa terminología cromática, que perduraría durante décadas en la memoria institucional del ejército, provenía de la ciencia militar: en los juegos de guerra, utilizados para recrear escenarios hipotéticos de conflictos armados, suele nombrarse como “azules” a las tropas propias o aliadas y como “coloradas” a las tropas enemigas.



comando “azul” de Campo de Mayo. Para la noche de ese día, la balanza se había inclinado de manera irreversible en favor de Onganía y los suyos.

El presidente Guido anunció el cese del fuego y relevó a los mandos cuestionados por los “azules”. En las horas posteriores, las últimas tropas “coloradas” se rindieron en distintos puntos de la Capital casi sin presentar resistencia. El poder de fuego y la movilidad de los tanques blindados de la caballería, sumado al apoyo de la fuerza aérea, se habían impuesto en el plano militar. En el terreno político, el plan de escalada paulatina del conflicto que había planificado el estado mayor paralelo de los “azules” se había mostrado efectivo y había cumplido con todos sus objetivos. En la noche del 22 de septiembre de 1962, el general Alsogaray fue nombrado secretario de Ejército y Onganía, comandante en jefe. El bando “azul” se había impuesto por primera vez en la interna de la fuerza, cuyo control le pertenecería a partir de entonces durante más de una década.

A poco de su victoria, los “azules” hicieron público su programa político a través del llamado *Comunicado 150*, emitido desde Campo de Mayo:

El gran drama vivido en los últimos días ha sido la culminación de los esfuerzos y ansiedades de aquellos hombres que creyeron que, antes que nada, el país debía reencauzarse por el camino de

la Constitución. Nuestro objetivo en lo nacional es mantener al actual Poder Ejecutivo y asegurarle la suficiente libertad de acción en la medida en que su cometido sea conducente al cumplimiento de los compromisos contraídos con el pueblo de la Nación, a fin de concretar en el más breve plazo la vigencia de la Constitución.

En lo militar, se persigue el restablecimiento de la justicia y de la disciplina, el respeto a las leyes y reglamentos, sin discriminaciones en su aplicación. [...]

Sostenemos que el principio rector de la vida constitucional es la soberanía del pueblo, solo la voluntad popular puede dar autoridad legítima y majestad a la investidura presidencial. [...]

Creemos que las Fuerzas Armadas no deben gobernar. Deben, por el contrario, estar sometidas al poder civil. Ello no quiere decir que no deban gravitar en la vida institucional. Su papel es, a la vez, silencioso y fundamental. Ellas garantizan el pacto constitucional que nos legaron nuestros antecesores, que tienen el sagrado deber de prevenir y contener cualquier empresa totalitaria que surja en el país, sea desde el gobierno o de la política. [...]<sup>75</sup>.

El *Comunicado 150* planteaba una salida electoral sin mencionar proscripciones. No obstante,

<sup>75</sup> Comando de Campo de Mayo. *Comunicados del Comando de Campo de Mayo. 20/23 - septiembre - 62*, 23 de septiembre de 1962. Colección Azules y colorados. Servicio Histórico del Ejército, pp. 75-77.

se advertía que no habría retorno al “pasado ya superado”, por lo que los términos de la reincorporación del peronismo a la vida política quedaban abiertos a futuras negociaciones. Para el heterogéneo sector “legalista” del ejército, compuesto por algunos oficiales cuyo antiperonismo ideológico por cierto no era menor que el de los “colorados”, el cumplimiento de las normas constitucionales nunca había sido un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar su real objetivo prioritario: el fin de la politización y el estado deliberativo de las Fuerzas Armadas y el regreso a sus funciones profesionales naturales. El *Comunicado 150* era explícito sobre ese punto: “Las Fuerzas Armadas no deben gobernar”. El papel que debía cumplir la corporación militar en la vida nacional, en la coyuntura específica de 1962-1963, constituía el verdadero parteaguas entre las dos facciones en pugna.

En el plano castrense, Onganía implementó una profunda depuración del cuerpo de comando del ejército y pasó a retiro obligatorio a 166 oficiales. La reestructuración produjo un fuerte impacto en el generalato, que no solo atravesó una renovación generacional sino también un cambio en el peso de cada arma, con un retroceso de la infantería, históricamente asociada a los “colorados”, y un avance de la caballería, que predominaría en la cúpula del ejército durante los diez años siguientes. A los cambios de mandos militares se sumó una transformación del gabinete de gobierno que abarcó a los tres secretarios militares. La Secretaría de Ejército pasó a manos del teniente general Benjamín Rattenbach, un oficial “profesionalista” de gran prestigio que, sin embargo, pronto quedaría preso de vicisitudes políticas que excedían a su figura y su cargo.

Mientras los “azules” imponían su hegemonía en el terreno militar, la solución política se les presentaba más esquiva. Los términos del *Comunicado 150* habían sido demasiado laxos y en el bando ganador había posturas enfrentadas acerca de los límites que debían marcarse a la negociación con el peronismo. El gobierno delegó la articulación de un “Plan Político” al funcionario más destacado del gabinete, el ministro del Interior Rodolfo Martínez (hijo), quien promovía la conformación de un amplio frente electoral que

resultara de un acuerdo entre la UCRI, el peronismo y los “azules” del ejército. Según la fórmula de Martínez, apoyada también por Rattenbach, el candidato presidencial de consenso, que jamás podía ser un peronista, debía ser Onganía, la figura victoriosa de los sucesos de septiembre de 1962. Sin embargo, este proyecto chocó con la oposición del propio Onganía –que declinó la posibilidad de competir en elecciones– y, de manera más general, del grupo “azul” con base en Campo de Mayo, entre cuyos partícipes había quienes consideraban peligroso integrar tan rápidamente al peronismo al juego político<sup>76</sup>. Sin apoyo suficiente del sector ahora dominante del ejército, el ministro Martínez debió renunciar y su plan político-electoral quedó obsoleto.

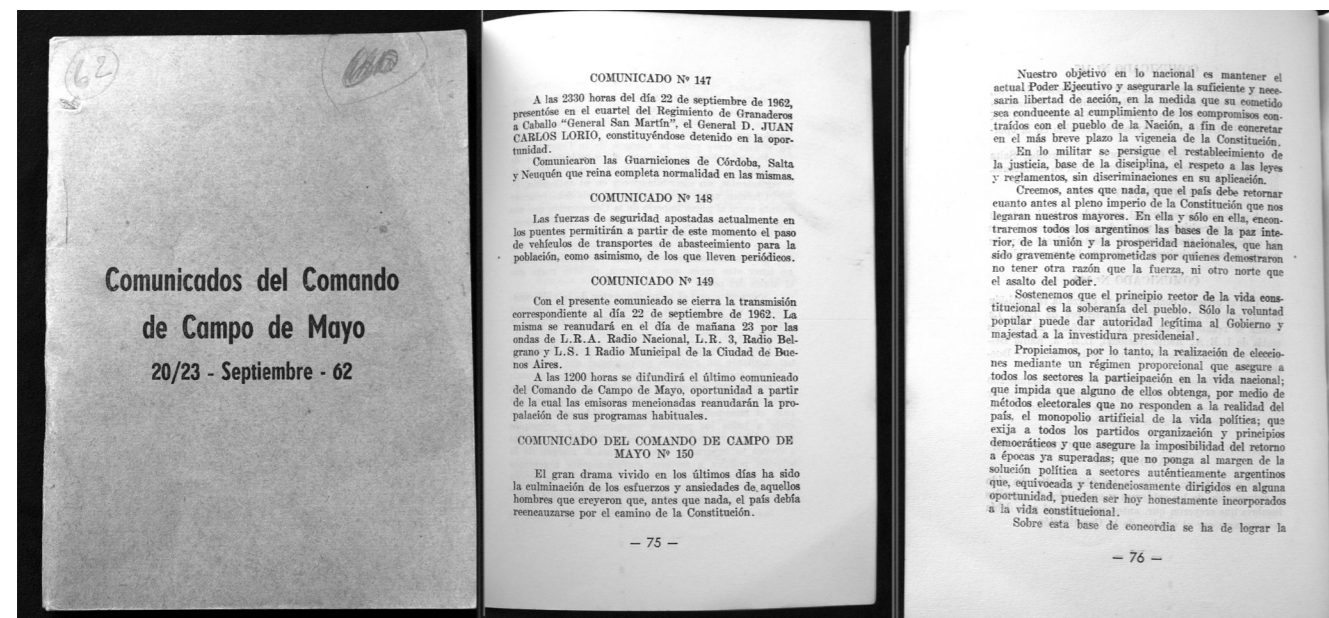
### Blindados en acción: el final de los “colorados”

Desde fines de 1962, una nueva conspiración “colorada” se puso en marcha contra los ensayos gubernamentales de apertura política. Esta vez tuvo mayor protagonismo la armada, que sumó una cantidad considerable de oficiales en servicio activo a un movimiento encabezado por jefes militares retirados de largo historial golpista, como el general Benjamín Menéndez, el almirante Isaac Rojas y los hermanos Toranzo Montero. Los sublevados resolvieron pasar a la acción en las primeras horas del 2 de abril de 1963, cuando un grupo comando atentó contra el general Osiris Villegas, referente “azul” y jefe de operaciones del ejército, en el momento en que salía de su casa en Bella Vista, cerca de Campo de Mayo. Villegas recibió un disparo en la cabeza y salvó su vida por milagro<sup>77</sup>.

Durante aquel día, mientras las tropas de in-

<sup>76</sup> Esa postura quedó reflejada en un parte de inteligencia mensual de la 1ª División Blindada de Campo de Mayo, de febrero de 1963 y firmado por el general Alejandro Lanusse, en el que éste se preguntaba: “¿Cómo se asegura que el actual justicialismo una vez en el poder no se convierta en peronismo?” (Potash, 1994: 124).

<sup>77</sup> El general Villegas, un oficial de caballería que había llegado a ser ministro del Interior del gobierno de Guido, se convertiría en los años siguientes en un intelectual orgánico del ejército y uno de los principales teóricos de su doctrina de “guerra contrainsurgente”.



Recopilación de comunicados del bando azul emitidos desde Campo de Mayo en septiembre de 1962. Fuente: Colección Azules y colorados. Servicio Histórico del Ejército.



fantería de la armada ocupaban posiciones en la Capital Federal, algunas unidades del ejército se plegaron a la rebelión en el interior. Sin embargo, ninguna unidad poderosa se sumó al alzamiento. En el área de Buenos Aires, los principales regimientos se mantuvieron leales. La fuerza aérea tampoco acompañó la intentona golpista, excepto por algunos incidentes aislados. Para los sublevados, la gran apuesta eran los movimientos navales coordinados en distintos puntos del país. Durante las primeras horas de la jornada, la armada logró copar sitios y unidades estratégicas en Mar del Plata, La Plata y City Bell.

Una vez más, las tropas y tanques de Campo de Mayo cumplieron un papel decisivo para re-

cuperar las posiciones copadas por los golpistas. Después del mediodía del 2 de abril, dos columnas partieron desde la guarnición. Una de ellas, comandada por el coronel Fernando Martínez Zuviría, jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Caballería, marchó hacia la Capital para reforzar al Regimiento de Patricios. La otra, liderada por el general Lanusse e integrada por el RC 10, el Regimiento 1 de Artillería de Ciudadela y el Regimiento 3 de Infantería Motorizada, que se plegó en el camino, se dirigió hacia La Plata para enfrentar a los rebeldes<sup>78</sup>. Los ataques de la flota aérea naval en los alrededores de la capital bonaerense no lograron detener a la columna de Lanusse, que al caer la noche recuperó el 2º Batallón de Comunicaciones de City Bell y, poco después, el control de La Plata (Mazzei, 2012).

Ese mismo día, la aviación naval partió desde su base en Punta Indio y bombardeó durante varias horas el Regimiento 8 de Tanques de Magdalena. El jefe de la unidad, el coronel Alcides López Aufranc, retiró sus tanques antes del ataque y solo inició la contraofensiva por la noche, una vez que obtuvo apoyo de aviones de la fuerza aérea y la garantía de que el coronel Tomás Sánchez de Bustamante, quien había partido desde Campo de Mayo, se dirigía hacia Magdalena con tanques y vehículos oruga artillados. El comando “azul” preveía reunir allí a sus dos regimientos blindados, al mando de López Aufranc y Sánchez de Bustamante, para marchar luego hacia Punta Indio. Tras recuperar el regimiento de Magdalena, las tropas con blindados del ejército ocuparon la Base Naval de Punta Indio en la mañana del 3 de abril, luego de una intensa jornada de asedio aéreo por parte de aviones leales de la fuerza aérea. Para ese momento, las últimas esperanzas de los sublevados de la armada se concentraban en Puerto Belgrano, donde habían derrotado al Regimiento 5 de Infantería y recibido a rebeldes desbandados desde la Capital Federal, Río Santiago y Mar del Plata tras la avanzada de los “azules”.

<sup>78</sup> Tras la asunción de Onganía como comandante en jefe, Lanusse había recibido el comando de la 1ª División Blindada y de la guarnición de Campo de Mayo. Antes de eso había estado al frente del Centro de Instrucción de Caballería, también en Campo de Mayo, desde donde había cumplido un importante papel en la formación de los “azules”.



Tanques de Campo de Mayo custodiando la Base Naval de Punta Indio luego de atacarla y forzar su rendición, retratados en la revista *Polémica: los hechos, los hombres*. Fuente: Archivo Nacional de la Memoria

Con todas las tropas “coloradas” del ejército ya derrotadas, y con Puerto Belgrano cercado por los “azules”, los mandos navales rebeldes comenzaron a negociar en Buenos Aires las condiciones de su rendición. Pretendían que el castigo recayera sobre los líderes del alzamiento sin perjudicar a la armada como institución (Ruiz Moreno, 1998). Pero el general Onganía presionó hasta último momento por una rendición incondicional y, sin acatar la postura más moderada del secretario Rattenbach, amenazó con atacar Puerto Belgrano. Finalmente, en la madrugada del 5 de abril, los bandos firmaron un cese del fuego que sentó las bases para que los “azules” recortaran significativamente el poderío naval. En los meses siguientes, casi todo el almirantazgo fue purgado, los concriptos más antiguos de la armada pasaron a licencia, y la infantería y la aviación navales sufrieron duros recortes presupuestarios. Como consecuencia del enfrentamiento de abril de 1963, la armada perdió la cuota de influencia política que había ganado desde la “Revolución Libertadora”.

## La reorganización de la estructura del ejército

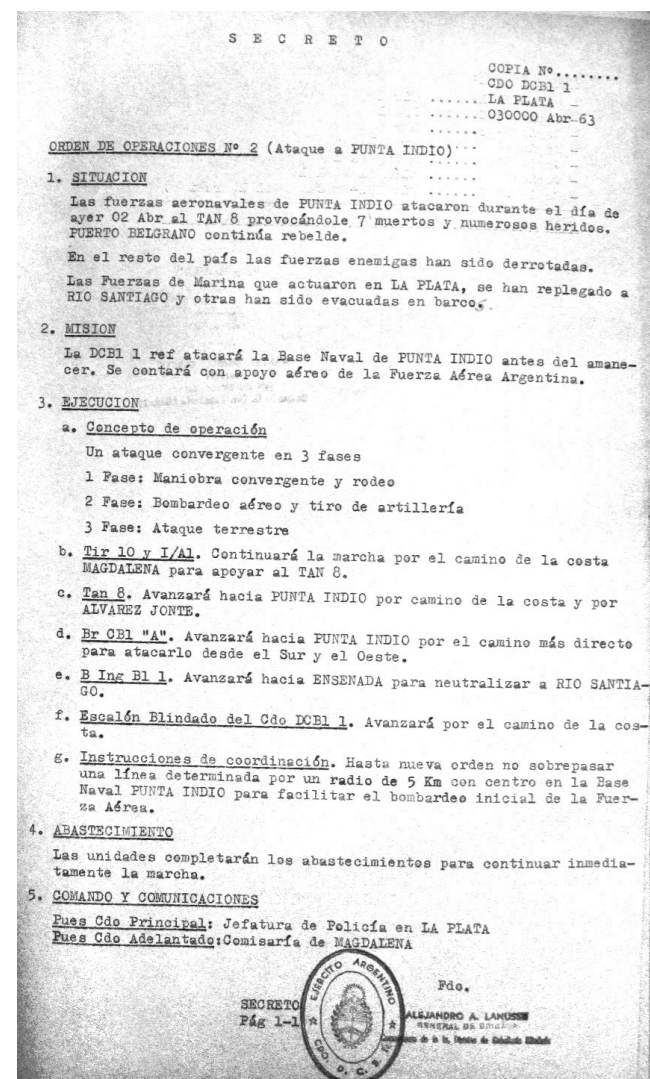
Aunque algunos de sus hombres más próximos se acercaban más al ideal “colorado”, el recién asumido Illia mantuvo el *status quo* militar derivado de los combates de septiembre de 1962,

con predominio “azul”, evitando cambios en los comandos y resistiendo las presiones para designar a miembros del otro bando en las secretarías de las tres armas y para reincorporar a “colorados” que habían pasado a retiro. En el ejército, la política de promociones favoreció una vez más a la caballería, que para fines de 1963 ocupaba casi la mitad del generalato. A instancias de Onganía, la fuerza ingresó en un proceso de profunda reestructuración que le daría su forma orgánica para los años venideros.

En 1960 el ejército ya había pasado por una reorganización parcial con la creación de cinco cuerpos de ejército, de los que dependían nueve divisiones de infantería. A su vez, se había conservado el Cuerpo de Caballería integrado por cuatro divisiones, entre ellas, la estratégica 1ª División Blindada, integrada por los regimientos de tanques de Campo de Mayo y Magdalena. El poder de fuego y la movilidad de dichas unidades, sumados a su cercanía con la Capital Federal, habían convertido a la 1ª División en un instrumento de presión política determinante.

En 1963, Onganía lanzó una nueva reestructuración, implementada a partir del año siguiente, para modernizar a la fuerza y adecuarla a las doctrinas de guerra de la época, promovidas por los Estados Unidos. El ejército quedó conformado por cuatro cuerpos de los que dependían diez brigadas –dos blindadas y ocho de infantería– compuestas por tres regimientos cada una. Al mismo tiempo, se disolvió el Cuerpo de Caballería, herencia de la organización militar previa a la Segunda Guerra Mundial. Su antigua 1ª División Blindada se transformó en la 1ª Brigada Blindada, y su comando se trasladó de Campo de Mayo a Tandil. Algunos regimientos de caballería fueron eliminados y otros, desplazados hacia otras zonas del país. El RC 10 pasó de Campo de Mayo a Azul. En suma, Campo de Mayo, la vieja base de operaciones “azul”, sintió los efectos de una vocación del comando del ejército por descentralizar el despliegue territorial de la fuerza.

El retiro de las últimas unidades de blindados de la guarnición se completaría en 1967. En simultáneo al proceso de salida de los tanques de la disuelta caballería, el Comando de Institutos Militares (IIMM), que tenía asiento en la guarnición



Órdenes de Lanusse para atacar las posiciones coloradas en el *Diario de guerra* de la 1ª División Blindada de abril de 1963. Fuente: Serie Diarios de guerra. Servicio Histórico del Ejército.



desde 1955, se transformó en el comando principal de Campo de Mayo. Durante la reestructuración del ejército en la primera mitad de la década de 1960, IIMM recibió el estatus de gran unidad de combate y sentó las bases del alto grado de influencia que alcanzaría en los años siguientes, durante la llamada “guerra contra la subversión”.

Mientras avanzaba en la reforma del ejército, durante los dos primeros años de la presidencia de Illia, Onganía se apuntaló como el hombre fuerte del arma terrestre. Bajo su comandancia, la fuerza recuperó organicidad y el riesgo permanente de insubordinación jerárquica quedó en el pasado. Sin embargo, el rumbo político del gobierno de la UCRP y, en particular, ciertas decisiones de política exterior no conformaban a sectores de las Fuerzas Armadas. Su intranquilidad comenzó a crecer tras un intento frustrado de Perón de regresar al país en diciembre de 1964 y se agravó tras una victoria del peronismo en las elecciones legislativas de marzo de 1965, en las que por primera vez desde la “Revolución Libertadora” se compitió sin proscripciones y según la “estrategia de integración silenciosa” del peronismo ensayada por Illia (Slumovitz, 1991). Frente a un estado de ánimo destituyente entre militares que consideraban que el gobierno estaba arries-

gando demasiado en el manejo del “problema peronista”, el general Onganía comenzó a recalculer su posición frente al gobierno radical, de cuya continuidad en el poder era el máximo garante. Onganía pronto induciría un conflicto con Illia y se convertiría en la cabeza de un nuevo golpe de Estado, el quinto desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930.

### De Onganía a Lanusse: Campo de Mayo y la camarilla militar

En noviembre de 1965, Onganía aprovechó una puja por la designación del nuevo secretario de Ejército para formalizar su ruptura con el gobierno de la UCRP y solicitar su retiro. Un estrecho colaborador suyo, el general Pascual Pistarini, lo reemplazó en la comandancia del ejército, mientras que otros connotados “azules” de la caballería asumían puestos en la cúpula de la fuerza. Hacia principios de 1966, ya liberado del compromiso “legalista” que habría implicado permanecer en la comandancia, y mientras mantenía un prudente silencio público, Onganía aceleró los diálogos con oficiales del Estado Mayor del Ejército que propiciaban el golpe, también promovido por heterogéneos sectores civiles, dirigentes sindicales y empresariales y medios de comunicación. Las múltiples intentonas golpistas de la última década habían dejado una lección: el éxito del movimiento dependería de alcanzar un carácter institucional, sin fisuras al interior del ejército y con representantes de todas las facciones alineados detrás de la conspiración. El enfrentamiento violento entre “azules” y “colorados” había sido superado y el golpismo reunió a los antiguos bandos bajo una consigna compartida y devenida en signo de la época: la “lucha anticomunista”.

Frente a la ola de rumores sobre un inminente golpe, los referentes “legalistas” del ejército que aún rodeaban al gobierno se propusieron tender puentes entre Illia y las Fuerzas Armadas para mejorar la imagen del presidente. En marzo de 1966, por gestión del “legalismo”, Illia se reunió durante siete horas con las más altas autoridades militares en la residencia del secretario de Ejército en Campo de Mayo, con el fin de intentar un

acercamiento (Mazzei, 2012). Para entonces, la reestructuración orgánica impulsada por Onganía le había restado poder de fuego a Campo de Mayo y había reducido su peso como factor de amenaza sobre la política nacional. No obstante, en los años siguientes la guarnición permanecería como un escenario destacado de deliberaciones entre los mandos de las Fuerzas Armadas y la alta camarilla militar.

Aunque las gestiones de marzo resultaron infructíferas, lo cierto es que hacia mediados de 1966 la relación de fuerzas no era del todo favorable a los golpistas, pese a que para entonces ya contaban con el apoyo decidido del sindicalismo alineado con Augusto Timoteo Vandor e incluso habían establecido contactos con Perón, quien no apoyaría explícitamente el derrocamiento de Illia pero tampoco haría nada para detenerlo. Para ese momento, Onganía ya se había convertido en la figura saliente de la “revolución” en ciernes. Pero el gobierno radical aún contaba con la lealtad del comando del Segundo Cuerpo, la neutralidad del Tercer Cuerpo y la indecisión de la armada, que se sumaría tardíamente a la conspiración. En cuanto a Campo de Mayo, con el “legalista” Cándido López al frente del Comando de IIMM, la guarnición también operaba bajo jefatura leal (Mazzei, 2012).

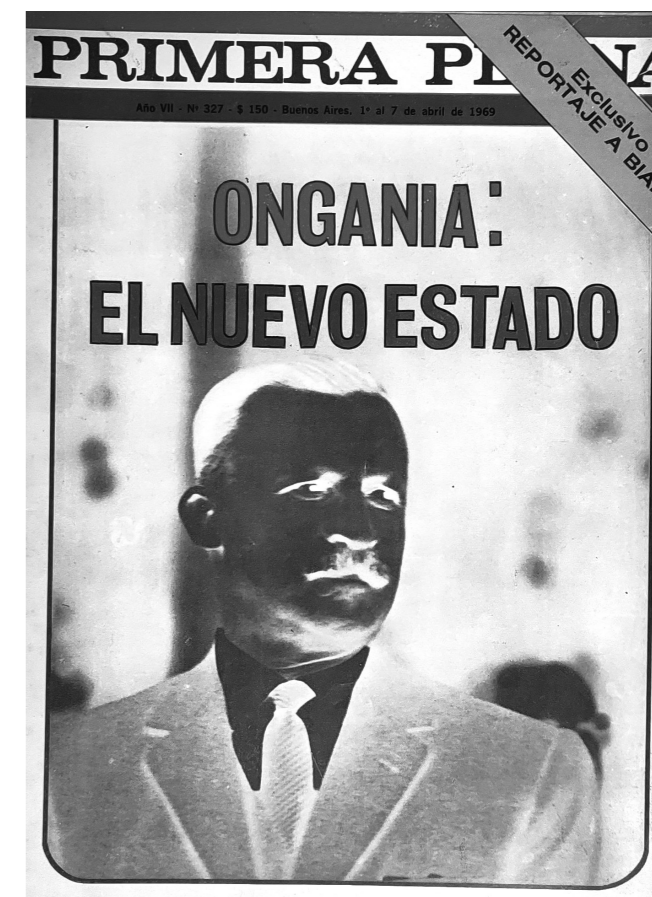
Sin embargo, Illia decidió desde el principio evitar cualquier tipo de choque armado. Su estrategia, fatalista y desprovista de alternativas, fue enfrentar a los golpistas de manera intransigente y sin entregar los pocos atributos de poder que aún conservaba la figura presidencial. La experiencia de sus antecesores, Frondizi y Guido, había demostrado que ceder a las presiones militares no necesariamente le garantizaría un futuro mejor. Hasta último momento, el presidente radical le restó importancia a los rumores de golpe y apostó a llegar hasta marzo de 1967, cuando se celebrarían unas elecciones a gobernadores en las que tenía la esperanza de derrotar al peronismo. Pero su destino estaba decidido desde hacía meses. El golpe de Estado finalmente se consumó el 28 de junio de 1966. En su contra se habían conjugado los intereses de actores políticos, militares, económicos y sociales sumamente diversos, que apenas compartían el rechazo a un gobierno al que acusa-

ban de ineficiente y la intuición de que el general Onganía era el hombre indicado para conducir la autodenominada “Revolución Argentina”.

Al ofrecer la presidencia a Onganía, las cúpulas de las Fuerzas Armadas le otorgaron plenos poderes y prácticamente renunciaron a participar en la toma de decisiones políticas de la nueva dictadura, al menos hasta los eventos del “Cordobazo” en mayo de 1969. Con el fantasma de la “penetración marxista” como argumento, Onganía asumió con los atributos de un autócrata. Una de sus primeras medidas consistió en eliminar las secretarías de las tres armas, aquellas que durante años habían servido como fusibles de las tensiones intra e interfuerzas. La autonomía militar respecto del Poder Ejecutivo, de la que Onganía había gozado durante su propia comandancia, había quedado, si no destruida, seriamente dañada. El general apuntaló su autoridad vertical sobre las Fuerzas



Arturo Illia asumía la Presidencia de la Nación el 12 de octubre de 1963. Muy cerca, el general Onganía. Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.



En abril de 1969, *Primera Plana* analizaba las reformas de Onganía, que buscaban reforzar una representación corporativa de la sociedad frente al Estado mientras posponía indefinidamente las elecciones. Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.



Armadas y les dio un papel cada vez más preeminente en la lucha contra el “enemigo interno”, plasmado en una nueva ley de Defensa Nacional que consideraba al territorio nacional como un eventual “teatro de operaciones”<sup>79</sup> y, en la línea del Plan CONINTES, habilitaba el uso de tropas militares en caso de “conmoción interior”<sup>80</sup>.

El dominio de Onganía sobre las Fuerzas Armadas se mantuvo casi sin sobresaltos durante sus primeros años de gobierno. En agosto de 1968, como una nueva muestra de su autoridad, el dictador decidió reemplazar a los tres comandantes en jefe. Para el ejército optó por un viejo subordinado suyo en el comando “azul” de Campo de Mayo: el general Lanusse, entonces comandante del Ter-

<sup>79</sup> “Teatro de operaciones” es el término con el que los militares identifican el área geográfica donde se producen los enfrentamientos armados.

<sup>80</sup> Ley 16.970, 6 de octubre de 1966.

cer Cuerpo, un caudillo de la caballería con un perfil de oficial “tropero” parecido al de Onganía, aunque con un despliegue político mayor<sup>81</sup>.

Menos de un año después, Lanusse se convirtió en el principal artífice del final del poder autocrático de Onganía. El principio de no intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos políticos, que se había mantenido desde la asunción del dictador, se acabó el 29 mayo de 1969. El “Cordobazo”, un estallido popular en la provincia de Córdoba con protagonismo estudiantil y sindical que llegó a poner en jaque a la dictadura (Brennan y Gordillo, 2008), provocó el retorno de los militares al activismo político. Ese mismo 29, luego de que el ejército se lanzara a las calles para reprimir protestas y huelgas que también se habían produci-

<sup>81</sup> Un oficial “tropero” es aquel que se destaca por el mando de tropas.

## Campo de Mayo, blanco de ataques y sabotajes

A principios de los años setenta, el auge de las organizaciones armadas que resistían el gobierno de las Fuerzas Armadas vino acompañado de frecuentes ataques y actos de sabotaje y pillaje contra unidades militares en todo el país, incluyendo Campo de Mayo. La guarnición fue blanco de acciones guerrilleras al menos desde 1969, cuando un grupo comando del Frente Argentino de Liberación (FAL) llevó a cabo uno de los primeros ataques contra instalaciones castrenses al asaltar el vivac del Regimiento de Patricios en Campo de Mayo, donde la tropa de esa unidad recibía instrucción. Los militantes del FAL habían hecho inteligencia previa recogiendo información entre conscriptos de Campo de Mayo a los que recogían haciendo “dedo” en los caminos internos de la guarnición. El objetivo era robar fusiles del vivac, pero la acción se frustró porque casi todo el armamento había sido retirado provisoriamente la noche anterior, por actividades rutinarias. Los atacantes debieron fugarse y apenas pudieron obtener un puñado de fusiles y pistolas. Más tarde el

FAL sería rebautizado Movimiento 5 de Abril, fecha en que tuvo lugar aquella operación. Durante los dos años siguientes, Campo de Mayo volvió a sufrir acciones de robo de armamentos. En 1970, un comando que habría pertenecido a las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) atacó el puesto de control de la entrada principal de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” y se llevó varios fusiles FAL. En 1971, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) atacaron en plena ruta, en el partido bonaerense de Pilar, a un camión de la Policía Militar de Campo de Mayo que trasladaba armas y municiones desde Córdoba hacia la guarnición. En el asalto murieron un oficial y un conscripto, y los atacantes se llevaron más de cien pistolas, varios fusiles y varias ametralladoras. A partir de 1974, cuando comenzara a arreciar la represión ilegal, las acciones guerrilleras contra Campo de Mayo se tornarían cada vez más agresivas y tomarían la forma de atentados contra su personal militar y sus instalaciones.

do en Rosario y Tucumán, Lanusse pronunció un discurso en presencia de Onganía en el que advirtió que la situación “no permite ya la presencia de espectadores” y “necesita que todos seamos actores”<sup>82</sup>.

Tras reprimir con el fuego de las Fuerzas Armadas y sofocar el “Cordobazo”, la dictadura acusó recibo de la magnitud de la crisis y Onganía renovó todo su gabinete. La puja por la designación de los nuevos ministros dejó expuesta su ruptura irreversible con Lanusse, que a su vez reflejaba el choque entre las alas nacionalista y liberal que coexistían en el régimen. La desconfianza mutua entre presidente y comandante escaló hasta tal punto que Onganía consideró relevar de su cargo a Lanusse, aunque finalmente desistió de esa

<sup>82</sup> *La Nación*. “Discurso del comandante en jefe Lanusse en el Colegio Militar de la Nación, en ocasión del Día del Ejército”. 30 de mayo de 1969.

opción (Roth, 1981). Pese a que la violencia ya no era una vía posible para la resolución de conflictos internos, una nueva brecha entre facciones se había abierto en el ejército tras los sucesos cordobeses. De un lado, oficiales liberales que promovían una gradual apertura política con salida electoral, lo que implicaba deshacerse de Onganía. Del otro, oficiales nacionalistas que llamaban a ir a fondo con la “Revolución Argentina”, lo que significaba eliminar a los críticos como Lanusse.

Durante la segunda mitad de 1969, el panorama de alta conflictividad social, lucha sindical y acciones guerrilleras en ascenso se agudizó. Mientras tanto, Lanusse se dedicaba a construir una estructura de mandos en el ejército, en base a lealtades políticas y personales, que le respondiera sin cuestionamientos a la hora de dar su próximo paso: derribar a Onganía. El comandante se rodeó de aquellos oficiales de caballería que lo



Mujeres al frente de la columna del sindicato de Luz y Fuerza, que tras el Cordobazo, reclaman el cese de la intervención sobre su organización gremial. Fuente: Télam.

habían acompañado durante la lucha contra los “colorados” en septiembre de 1962. Poco a poco, el núcleo lanussista comenzó a cercar al dictador con el reclamo de una mayor flexibilidad política para apaciguar los ánimos nacionales, ante la evidencia de que la receta corporativista del onganiano había fracasado.

La presión en favor de la salida de Onganía ya era considerable cuando un acontecimiento de alto impacto sacudió al país. El 29 de mayo de 1970, primer aniversario del “Cordobazo”, una organización armada peronista hasta entonces desconocida, Montoneros, secuestró al ex dictador Pedro Eugenio Aramburu. Tres días después, Aramburu sería ejecutado por sus captores. El secuestro del general causó un cataclismo en el ejército y aceleró las tratativas del lanussismo para la remoción de Onganía. En esos días de diálogos febriles, Campo de Mayo sirvió como escenario privilegiado para la confabulación. Desde su asunción como comandante en jefe en 1968, Lanusse tenía su residencia dentro de la guarnición, y allí mismo comenzó a recibir a los altos mandos que se involucrarían en el golpe dentro del golpe.

Dos días después del secuestro de Aramburu, Lanusse se reunió en Campo de Mayo con su par de la armada, Pedro Gnavi, y concordaron en que la Junta de Comandantes debía designar a alguien que iniciara la apertura política<sup>83</sup>. El derrocamiento de Onganía era una decisión tomada. En la tarde del 6 de junio de 1970, con el asesinato de Aramburu ya confirmado, Lanusse convocó a una nueva reunión en Campo de Mayo, esta vez

extendida al generalato, en la que se acordó remover a Onganía y se puso en marcha el operativo golpista<sup>84</sup>. Esa misma noche, Lanusse y Gnavi elaboraron el plan de acción que se activaría pocas horas después y que desembocaría en la renuncia forzada de Onganía en la noche del 8 de junio. Su inflexibilidad política ante las transformaciones en el escenario nacional había aislado demasiado al dictador. Su destitución contó con el decidido activismo de Lanusse y fue el producto de un consenso entre los altos mandos de las tres Fuerzas Armadas<sup>85</sup>. El avance de la resistencia contra la dictadura había aglutinado a la corporación militar. El riesgo de un choque armado por conflictos intramilitares, que había pesado sobre la política argentina durante décadas, se había disipado. En ese nuevo contexto, Campo de Mayo no gravitó en el golpe a Onganía por su capacidad de fuego, sino como un espacio de poder y toma de decisiones que la guarnición ostentaba desde la derrota de los “colorados”.

El sucesor de Onganía, de hecho, fue otro de los miembros del comando “azul” de Campo de Mayo que había triunfado en 1962. El general Roberto Levingston, oficial de inteligencia, había actuado en la campaña de acción psicológica or-

<sup>84</sup>Idem.

<sup>85</sup>El padre jesuita Mariano Castex, quien ofició como mediador entre Onganía y la Junta de Comandantes, ha descrito las actitudes de los líderes de cada una de las fuerzas en el momento de reclamar la renuncia del dictador: “[El brigadier Carlos] Rey, gelatinoso, apesadumbrado, materia casi sin forma, huido en su silencio. Al frente Lanusse, enérgico, exhibiendo en sus gestos decisión y firmeza. A su lado, a la derecha, Gnavi, agazapado y alerta, listo para el salto y el devoro de la pieza”. (Castex, 1981: 209, citado en Mazzei, 2012).

<sup>83</sup>Lanusse, A. *Mi testimonio*. Buenos Aires: Laserre Editores, 1977.



## De la apertura democrática al terrorismo de Estado

questada por los “azules” con base en la guarnición, donde había conocido a Lanusse. En el momento de su elección para reemplazar a Onganía, revistaba como agregado en Estados Unidos. La Junta de Comandantes optó por su nombre ante la inconveniencia de que el propio Lanusse se quedara con el cargo que varias veces había dicho no pretender. Se trataba de un oficial sin experiencia en mando de tropas y desconocido para la opinión pública, que en principio asumía para conducir un régimen de transición tutelado por la Junta.

Sin embargo, una vez en el poder, Levingston comenzó a tomar distancia de los comandantes y de quienes pretendían una apertura política inmediata. Mientras Perón y Balbín, viejos rivales, se reunían en la llamada “Hora del Pueblo” para reclamar el inicio de un diálogo en vistas de una salida electoral, el sucesor de Onganía insistía en que aún no había llegado el momento de tender puentes con los partidos. Pero el clima de violencia y agitación social seguía escalando, con la aparición en escena de organizaciones armadas como las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo, además de Montoneros, que multiplicaban sus ataques y actos de sabotaje. El paradigma de la “lucha contra la subversión” aseguraba la unidad orgánica de las Fuerzas Armadas. En ese marco, Lanusse decidió no ir al choque directo contra Levingston y replegarse en el ejército, donde trabajó para mantener una estructura de mandos leal a su figura y poblada de sus camaradas “azules” de 1962.

En simultáneo, el comandante en jefe desplegó una estrategia de defensa cautelosa ante la evidencia de que Levingston pretendía deshacerse de los lanussistas en el gobierno. El 27 de febrero

de 1971, otra vez en su residencia de Campo de Mayo, Lanusse recibió a un grupo de generales con destino en Buenos Aires para sondear sus inquietudes, manifestarles su preocupación por la actitud presidencial y asegurarles que él actuaría en pos de la unidad del ejército<sup>86</sup>. Apenas unos días después de aquella reunión en la guarnición, Lanusse lanzaría la promesa de un “Gran Acuerdo Nacional” (GAN), como se conocería a la plataforma política que finalmente lo llevaría al poder.

El período que se extendió entre el ascenso del general Lanusse el 26 de marzo de 1971 y el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue particularmente vertiginoso. En esos cinco años hubo un ensayo de apertura democrática que significó el fin de la proscripción política que se había impuesto sobre el peronismo en 1955, durante la dictadura del general Aramburu. En mayo de 1973, Héctor Cámpora, candidato electo del Frente Justicialista de Liberación Nacional (FRE-JULI), asumió la presidencia de la Nación con la intención de convocar a nuevas elecciones sin restricciones a la participación de Perón. La idea que compartían la mayoría de los actores políticos de la época, civiles y militares, era que solo el retorno del viejo líder de su exilio podría traer concordia a la agitada vida política nacional, expuesta a una espiral de autoritarismo y represión creciente desde el golpe de Estado de septiembre de 1955. Sin embargo, esto no sucedió. La conflictividad interna al peronismo, el accionar de bandas paraestatales, el mayor despliegue de organizaciones político-militares y el creciente peso de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna generaron un combo explosivo que preparó el escenario para una nueva asonada militar.

<sup>86</sup> Lanusse, A., 1977. *Op. cit.*

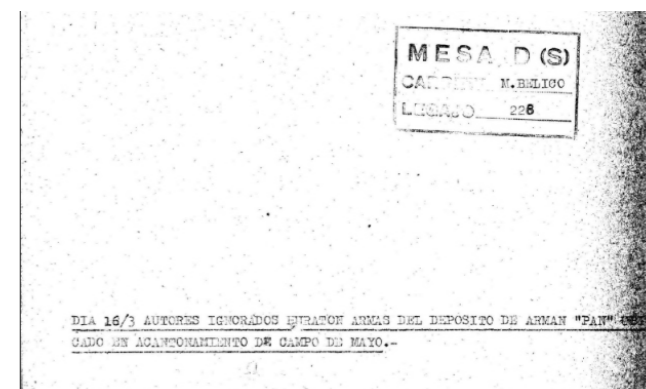
El golpe de Estado de 1976, que puso fin al trienio democrático, sería el más sangriento de la historia argentina, con un saldo de miles de desaparecidos y asesinados, al que se sumarían otros tantos exiliados, detenidos políticos y sobrevivientes del cautiverio en centros clandestinos de detención.

Durante esta etapa de la historia política nacional, Campo de Mayo continuó formalmente bajo la órbita del Comando de IIMM y también mantuvo su estatus de “Gran Unidad de Combate” que asimilaba sus competencias a las de un cuerpo de ejército, tal como venía sucediendo desde fines de la década de 1960. La disminución del poder de fuego de la guarnición que había significado la salida de las unidades de blindados, como se vio en el capítulo anterior, redujo su gravitación militar pero no así su influencia política. Campo de Mayo se convirtió entonces en un espacio de deliberación por el que pasaban distintos protagonistas de la escena nacional. No obstante, cuando la “lucha contra la subversión” se posicionó como un tema central de la agenda de actores civiles y castrenses, con efectos concretos en la normativa y las prácticas, las escuelas y unidades bajo la órbita del Comando de Institutos Militares que tenían asiento en la guarnición se involucraron en las tareas de represión interna. Este despliegue, que inició en el contexto de la presidencia de María Estela Martínez de Perón, alcanzó su pico a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Entonces, Campo de Mayo y sus unidades se convertirían en uno de los puntales de la “lucha contra la subversión” en una extensa área que abarcaba la zona norte del conurbano bonaerense y el cordón industrial vinculado a las localidades de Zárate y Campana.

### La dictadura de Lanusse, entre la represión política y la apertura democrática

Antes de analizar la contribución significativa de Campo de Mayo al despliegue del terrorismo de Estado es necesario reconstruir brevemente el proceso histórico que inició con la destitución de Levingston y su reemplazo por el general Lanusse, último dictador de la autodenominada “Revolución Argentina”. En la salida del primero influyó su reticencia a avanzar hacia una rápida salida electoral, compromiso que había asumido ante la Junta de Comandantes en Jefe y que, además, constituía el eje de las demandas de la incipiente movilización partidaria (Potash, 1994). Por eso, cuando en marzo de 1971 se produjo el estallido de una nueva revuelta popular en la provincia de Córdoba, bautizada con el nombre de “El Viburazo” en alusión a una frase del interventor provincial de ese momento, la suerte de Levingston quedó echada (Gordillo, 2003).

La asunción de Lanusse, comandante en jefe



La Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaba informes de inteligencia sobre los operativos de “propaganda armada” y aprovisionamiento que tuvieron como blanco a Campo de Mayo. Fuente: Fondo DIPPBA. Comisión Provincial por la Memoria.

del ejército y activo partícipe de la vida política nacional desde el conflicto de “azules” y “colorados”, mantenía el predominio de la caballería dentro del arma terrestre (Fraga, 1988). Su llegada al poder, además, se produjo con la intención declarada de iniciar de inmediato la senda de la normalización institucional. De este modo, se creía, las organizaciones armadas se verían aisladas del apoyo social, al desaparecer el marco dictatorial que les había dado origen (Novaro, 2010). No obstante, este objetivo se desarrolló en el medio de una fuerte reticencia a permitir el reingreso de Perón al país y, con ello, a la vida política nacional. En simultáneo, se produjo un endurecimiento del clima represivo a partir de la sanción de toda una legislación que aumentaba las prerrogativas del actor castrense en la “lucha antisubversiva”, como la Ley N° 19.081 que facultaba al PEN a emplear a las Fuerzas Armadas durante la vigencia del estado de sitio y para la investigación de “hechos subversivos” (Pontoriero, 2022b).

Uno de los hitos en esta escalada represiva fue la creación de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación en mayo de 1971 (D’Antonio y Eidelman, 2016). Este tribunal especial, que podía sustanciarse en cualquier punto del país, tenía a cargo la investigación y juzgamiento de delitos relacionados con el “accionar subversivo”. En la práctica, un amplio espectro de la militancia revolucionaria armada y no armada de la época se convirtió en blanco del “Camarón”, como se lo conocía comúnmente (Archivo Nacional de la Memoria, 2022). Su accionar llenó de presas y presos políticos distintos penales del país, con una concentración particular en el de la ciudad patagónica de Rawson. Si bien la represión durante el lanussismo corrió fundamentalmente por carriles legales, aunque ilegítimos por su origen en un gobierno dictatorial, ya entonces comenzaron a emplearse métodos criminales basados en el secuestro, tortura, asesinato y, de forma aislada, la desaparición de opositores políticos (Eidelman, 2010; Mazzei, 2012). Dentro de este segundo conjunto se inscribe la llamada “Masacre de Trelew” del 22 de agosto de 1972, en la que fueron fusilados diecinueve militantes de distintas organizaciones armadas detenidos en la base Almirante Zar de la ciudad de Trelew, de los cuales sólo tres sobrevivieron.

A pesar del creciente clima represivo, las organizaciones político-militares aumentaban la intensidad y cantidad de sus acciones. La “propaganda armada” y los ataques a camiones o unidades militares para obtener armamentos, uniformes y otros pertrechos tuvieron particular incidencia en este escenario. Campo de Mayo, considerado como uno de los principales bastiones del poder castrense, se convirtió en un blanco recurrente de los ataques. En uno de estos hechos, ocurrido el 29 de abril de 1971, un grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias atacó un camión perteneciente al Batallón N° 201 de la Policía Militar, con asiento en Campo de Mayo. Durante el asalto se produjo un enfrentamiento en el que resultaron muertos el teniente Mario Azúa y el soldado conscripto Alberto Vaca. La muerte del primero marcó un antes y un después para los miembros del ejército, que a partir de entonces endurecieron su postura ante el “enemigo interno”.

Por entonces comenzó a circular con fuerza, al interior del ejército, la idea de que se estaba librando una “guerra contra la subversión”. Como señala Esteban Pontoriero (2022b), en un contexto de ascenso del paradigma contrainsurgente se produjo una progresiva fusión entre las esferas de la defensa y la seguridad que llevó a que la represión fuera entendida como una acción bélica. En consonancia con esta situación, las Fuerzas Armadas reclamaron la sanción de una legislación que ampliara el marco de excepción habilitada por la Ley N° 16.970 y les permitiera intervenir en el plano interno sin necesidad de declarar “zonas de emergencia” o decretar el estado de sitio. En este punto, como sostiene el mismo autor, hubo coincidencias entre las autoridades militares y diversos actores políticos civiles, quienes apoyaron los reclamos castrenses en materia de legislación represiva.

En paralelo a este avance de las posiciones contrainsurgentes, Lanusse comenzó a preparar el terreno para la prometida salida electoral. Su demora en este plano y la extremada “politización” le granjearon una oposición creciente entre militares de orientación nacionalista y de perfil “profesionalista”, respectivamente (Fraga, 1988). La propuesta de la dictadura de Lanusse para la reapertura democrática se condensó en el “Gran

**PRIMER MENSAJE DEL NUEVO COMANDANTE**



El nuevo comandante del Ejército, general Leandro Enrique Anaya, asumió ayer dichas funciones en un acto especial (información en la página 5). Poco después dirigió su primer mensaje a la Fuerza, cuyo texto es el siguiente:

“Al asumir el honoroso cargo de comandante general del Ejército, con plena conciencia de las altas responsabilidades que implica la conducción superior de la Fuerza, dirijo a todos los miembros de la institución este mi primer mensaje de salutación.

“La gestión que inicio estará orientada a proseguir en la consecución de los grandes objetivos nacionales, en el estricto marco de la Constitución y la ley y con un particular énfasis en todo lo profesional y específico.

“La Fuerza se ubicó en el ‘rol’ que la Constitución establece al iniciarse la normalización institucional del país y continuará sin variantes en esa línea de conducta, participando activamente en el proceso nacional en íntima y fraterna unión con todos los argentinos.

“Exhorto a todos los integrantes del Ejército a continuar la meritoria labor de brindarse con altruista vocación de servicio y espíritu de sacrificio en el cumplimiento del deber militar”.

El documento se dio a conocer en la víspera en la sede del Comando General de la Fuerza.

**SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO**

El ministro de Defensa, doctor Angel Federico Robledo pondrá mañana a las 9,30 en posesión de su cargo al subsecretario de Planeamiento para la Defensa, brigadier (R) Horacio Apicella.

La ceremonia se cumplirá en la sede de la Subsecretaría mencionada, Bartolomé Mitre 1465, quinto piso, Capital Federal.

A fines de 1973, el general Leandro Anaya asumió la comandancia del ejército y otorgó nuevamente centralidad a la concepción contrainsurgente. Fuente: Fondo DIPPBA. Comisión Provincial por la Memoria.

Acuerdo Nacional”. Esta fórmula estipulaba la participación de militares en cargos del futuro gobierno civil y también pretendía la exclusión de Perón de los comicios. Los intentos por lograr que los partidos políticos suscribieran el acuerdo fracasaron y, finalmente, Lanusse estipuló una fecha límite para que los candidatos a las futuras elecciones se hicieran presentes en el país, después de lo cual no podrían postularse. Ante la negativa de Perón de quedar sujeto a las exigencias de la dictadura, ungió a Héctor Cámpora como su candidato para la fórmula del FREJULI bajo la consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder” (Tcach, 2003; De Riz, 2007). En las elecciones,

celebradas el 11 de marzo de 1973, el candidato peronista se alzaría con el triunfo. La dictadura de la “Revolución Argentina” llegaba así a su fin, y la reincorporación de Perón a la vida electoral nacional se configuraba como el gran objetivo del gobierno entrante.

## De Cámpora a Perón: ensayos de subordinación militar y escalada del conflicto interno

La asunción de Cámpora a la presidencia significó un cambio de orientación en materia represiva respecto de la autodenominada “Revolución Argentina”. A la amnistía que el gobierno otorgó a unos quinientos presos y presas por razones políticas, hecho que se conoció como el “Devotazo”, se añadió la derogación de la legislación de corte represivo que avalaba la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden interno (Franco, 2012). Sin embargo, las tensiones al interior del peronismo y la radicalización de las acciones emprendidas por el PRT-ERP contra blancos policiales y militares contribuyeron a resquebrajar la posición del presidente. Cámpora era, a los ojos de Perón, una persona demasiado vinculada con las y los miembros de la “Tendencia Revolucionaria” que cuestionaban su liderazgo y su lectura de la coyuntura política.

En lo que respecta al ejército, la llegada de Cámpora fue seguida de la designación de Jorge Raúl Carcagno, general de división del arma de infantería, como comandante en jefe –luego comandante general–. Su encumbramiento iba en sintonía con el papel que el gobierno imaginaba para el ejército en la vida política nacional: en su discurso durante el día del arma de 1973, Carcagno expresó sus sentimientos democráticos e hizo hincapié en la subordinación del actor militar a los poderes civiles. En ese mismo acto se refirió a la necesidad de generar un “reencuentro entre el ejército y el pueblo” que permitiera desandar el camino transitado en las décadas previas (Fraga, 1988). Unos meses después, en agosto, ya con Raúl Lastiri como presidente interino, reunió a unos quinientos oficiales de Campo de Mayo en el Salón de Actos del Colegio Militar



para fijar las pautas que guiarían al ejército durante su conducción. Allí expuso su lectura de la situación geopolítica, que se corría del clivaje comunismo-anticomunismo para enfatizar en la dominación de tipo económica a la que estaban sometidos muchos países de América Latina. La propuesta de Carcagno alcanzó su máxima síntesis en la X Conferencia de Ejércitos Americanos, realizada en Caracas entre el 7 y el 13 de septiembre de 1973, donde habló de la necesidad de actuar sobre las causas sociales, económicas y políticas de la “subversión” en lugar de apelar a la receta represiva. Las palabras del comandante general, sin embargo, ya no encontraban eco en la presidencia, ni tampoco en el máximo líder del movimiento peronista.

Con la salida del “Tío”, como se apodaba a Cámpora entre los sectores juveniles, se agudizarían las tensiones al interior del peronismo, al tiempo que aumentarían las acciones de las organizaciones armadas. La “Masacre de Ezeiza” de junio de 1973 y el ataque del PRT-ERP al Comando de Sanidad del ejército, en los primeros días del mes de septiembre, formaron parte de dichas dinámicas. En este escenario, se retomaría la orientación contrainsurgente de la “Revolución Argentina”, aunque con una intensidad mayor. Ni siquiera el triunfo de Perón en las elecciones de septiembre de 1973, con casi el 62% de los votos, podría apaciguar el clima político: apenas dos días después de los comicios, sería asesinado el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, pieza clave en el proyecto de institucionalización que se proponía llevar adelante Perón (Pontoriero, 2022b). Rucci era uno de los máximos representantes del ala derecha del peronismo, vinculada al sindicalismo ortodoxo y al flamante ministro de Bienestar Social, José López Rega, asistente personal de María Estela “Isabel” Martínez de Perón, esposa del mandatario. Por eso, estaba en la mira de los sectores del movimiento alineados con la Juventud Peronista y Montoneros, que automáticamente fueron responsabilizados por el asesinato del líder sindical (Franco, 2012; Larraquy, 2017).

La asunción de Perón en octubre de 1973 marcó el inicio de una ofensiva contra los grupos de izquierda tanto dentro como fuera del peronis-

mo. En este último ámbito, la “depuración” de sectores considerados como “infiltrados” en el movimiento apeló a la acción de bandas paraestatales, que alcanzaron su máxima expresión en la “Alianza Anticomunista Argentina” o “Triple A”, organización ligada al ministro de Bienestar Social (Franco, 2012; Merele, 2017). En ese entonces, se difundió en los círculos más cercanos al gobierno un “documento reservado” que promovía la remoción de los supuestos “infiltrados” que desempeñaban cargos públicos en las provincias afines a las posiciones de la Juventud Peronista y Montoneros. La herramienta principal para llevar a cabo esta “limpieza” fueron las intervenciones federales de los gobiernos provinciales (Servetto, 2010). La ofensiva de Perón también alcanzó las filas castrenses y, en particular, a Carcagno: el comandante general fue removido de su cargo en diciembre de 1973. Su lugar lo ocuparía el teniente general Leandro E. Anaya, primo de Elbio y perteneciente al arma de infantería. Detrás del flamante comandante general se ubicarían en puestos clave del arma terrestre, actuando en la práctica como sus dos principales asesores, los generales de brigada Jorge Rafael Videla y Roberto Viola, como jefe del Estado Mayor del Ejército y secretario general, respectivamente. Con la confirmación de sus designaciones, se consolidaba el poder de la infantería en la conducción del ejército, en detrimento de la caballería (Fraga, 1988).

El año 1974 marcó un primer salto en materia represiva. Distintos eventos favorecieron una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas, y en particular del ejército, en la represión interna en un marco de excepcionalidad jurídica creciente (Franco, 2012; Pontoriero, 2022b). El ataque contra el Regimiento de Caballería Blindada N° 10 de la localidad de Azul, que implicó el primer gran desafío para Anaya desde su flamante puesto de comandante general, marcó un quiebre en la tolerancia gubernamental hacia el accionar de las organizaciones armadas. En un discurso que pasaría a la historia, el presidente Perón, vestido con uniforme militar, condenó la operación en términos muy duros y llamó a tomar medidas de carácter excepcional para terminar con la guerrilla. Inmediatamente después, el máximo manda-

tario impulsó una reforma del Código Penal que endurecería las penas para delitos vinculados a las acciones armadas. Según Marina Franco, “los hechos de Azul parecen haber significado un quiebre con cierta tolerancia de la violencia política, en general, y de la guerrilla, en particular” (2012: 75). La ruptura del viejo líder con los sectores alineados con la Juventud Peronista y Montoneros alcanzaría su dimensión de drama público en el acto del 1° de mayo de 1974, cuando Perón expresó a viva voz su apoyo al sindicalismo y su impugnación a la llamada “Tendencia Revolucionaria”.

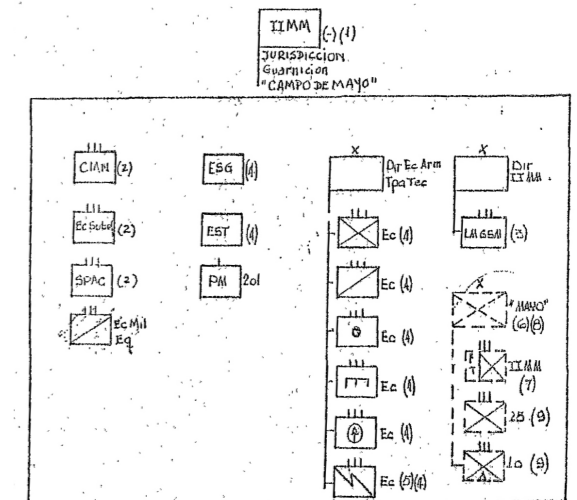
En medio de este clima agitado, Perón inició conversaciones con Anaya para retomar la participación del ejército en la “lucha antisubversiva” y recuperar un tema que había sido excluido de la formación militar durante la gestión Carcagno, aunque sin resultados inmediatos. Mientras estos intercambios ocurrían, casi medio centenar de oficiales de inteligencia con experiencia adquirida en la materia en las décadas precedentes realizaban un curso de perfeccionamiento en Campo de Mayo (Fraga, 1988). El hecho puede leerse como una señal del rumbo que había decidido seguir la nueva conducción del arma terrestre, y también como una suerte de anticipo del rol que le tocaría a la guarnición en la “lucha antisubversiva”.

La muerte de Perón, ocurrida el 1° de julio de ese año, solo empeoró las cosas. Su lugar en la máxima magistratura lo ocupó su viuda y hasta entonces vicepresidenta. Bajo el gobierno de Martínez de Perón se inició una ofensiva contra el “enemigo interno” del momento, que amplió sus límites más allá del peronismo: la “subversión” abarcaba, además de las organizaciones armadas, a toda una serie de expresiones sociales, políticas y culturales opositoras (Pontoriero, 2022b). Mientras el gobierno endurecía su posición, se produjeron nuevos ataques sobre guarniciones militares con la finalidad de obtener armamentos y pertrechos varios. Los dos más importantes los protagonizó el PRT-ERP, que asaltó la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María y el Regimiento N° 17 de Infantería Aeroportada de Catamarca, en agosto de 1974. Entre uno y otro ataque, en el mes de septiembre, el Congreso sancionó la Ley N° 20.840 de “Segu-

SECRETO

Copia Nro  
Cdo Gr1 Ej (EMGE-Jef III Op)  
BUENOS AIRES  
281700 Oct 75  
IRA - 011

APENDICE 5 (Orden de Batalla de la Jurisdicción Guarnición CAMPO DE MAYO) AL ANEXO 2 (Orden de Batalla del Ejército) A LA DIRECTIVA DEL COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO Nro 404/75 (Lucha contra la subversión).



De acuerdo con la Directiva 404/75, las unidades del Comando de Institutos Militares quedaban afectadas a tareas represivas en el territorio de la propia guarnición. Fuente: Archivo Nacional de la Memoria.

ridad Nacional”, que habilitaba detenciones por razones políticas bajo el paraguas de la alteración del “Orden constitucional y la Paz social” y penalizaba toda una serie de prácticas vinculadas a la acción sindical y de prensa. La entrada en vigencia de la norma significaba un drástico recorte en los derechos y garantías constitucionales, bajo la consigna de defender a la nación de la amenaza del enemigo interno (Franco, 2012).

Dos meses después, Campo de Mayo sería escenario de un hecho que dejaba al descubierto el avance de la represión paraestatal durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El 9 de diciembre aparecieron los cadáveres dinamitados de tres personas en un sector de la guarnición conocido como 'La Tosquera'. Periódicos como La Nación y La Gaceta de Tucumán dieron cuenta del hallazgo, aunque no pudieron dar mayores

precisiones sobre las identidades de las personas asesinadas<sup>87</sup>. Tampoco, sobre las circunstancias en que habían sido llevadas hasta la guarnición<sup>88</sup>.

## El Comando de Institutos Militares en los orígenes del terrorismo de Estado

El inicio del año 1975 marcaría un salto cualitativo en la represión estatal y de la injerencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. En el mes de febrero, a través del decreto secreto N° 261, el PEN dio inicio al llamado “Operativo Independencia”. Bajo ese nombre se escondía la convocatoria del ejército para llevar adelante la represión del “foco” rural que el PRT-ERP había creado en la provincia de Tucumán. La “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez” operaba en la zona con una base de cincuenta militantes desde comienzos del año anterior, realizando distintas acciones como tomas de comisarias y estaciones ferroviarias, además del robo de mercadería para repartir entre las y los pobladores rurales (Garaño, 2016; Nemec, 2019). Comandado inicialmente por el general Adel Vilas, luego reemplazado por el también general Antonio Bussi, el “Operativo Independencia” contó con la participación de unos cinco mil hombres de distintas fuerzas de seguridad, además del ejército. Un aporte significativo de Campo de Mayo fue el envío de personal y aeronaves del Batallón de Aviación del Ejército. En Tucumán se utilizaron por primera vez muchas de las prácticas represivas ilegales que caracterizarían a la última dictadura –como los secuestros, las torturas y el empleo de espacios de detención clandestina–, por lo que para muchos investigadores y contemporáneos se trató del acto inaugural del terrorismo de Estado (Águila, 2013; Garaño, 2018; Jemio,

<sup>87</sup> *La Nación*, “Procurase identificar a los tres cadáveres”, 11 de diciembre de 1974. *La Gaceta de Tucumán*, “Hallan restos humanos diseminados en un área cerca de Campo de Mayo”, 11 de diciembre de 1974.

<sup>88</sup> Recién en octubre de 2023, gracias al trabajo de investigación de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas fue posible identificar a dos de las víctimas del hecho, detenidas por efectivos policiales y del ejército en Tucumán el día 4 de diciembre de 1974

2021; Pontoriero, 2022).

La pérdida de poder de fuego que había experimentado Campo de Mayo con la salida de las unidades de blindados no impidió que se sumara tempranamente a la cruzada antisubversiva. Documentos elaborados por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) dan cuenta de la actividad represiva que desarrolló la guarnición en el territorio de la zona norte del conurbano bonaerense en el transcurso de 1975. Un informe de inteligencia refiere una reunión celebrada dentro de la guarnición el día 8 de mayo en la que participaron, además de oficiales de Campo de Mayo –incluida la máxima autoridad del Comando de Institutos Militares–, autoridades de distintas delegaciones policiales: las unidades regionales de Tigre y San Martín, la Delegación de San Justo de la DIPPBA y la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina. El motivo de la “reunión informativa” era, según el agente que redactó el informe:

Haberse creado en ese acantonamiento el Departamento de Icia. [inteligencia] e Informaciones tendiente a cooperar en estrecha colaboración con los organismos de seguridad, en especial la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y dentro de los partidos divididos en tres zonas Norte, Sur y Oeste, en la represión subversiva e infiltración de elementos ideológicos dentro de la masa obrera de las organizaciones extremistas que son de conocimiento público, es decir que todos los meses del 5 al 10 y en forma rotativa en cada Unidad Regional, se efectuará una reunión a los fines de intercambiar ideas para el logro de los fines perseguidos<sup>89</sup>.

En este clima de creciente represión se produjo, el 13 de mayo, el relevo de Anaya como comandante general en medio de disputas palaciegas que involucraban a la presidenta y a miembros de su gabinete, con López Rega a la cabeza (Fraga, 1988). El cambio en la dirección del arma terrestre, sin embargo, no implicó un cambio en los objetivos contrainsurgentes. Al contrario, los meses

<sup>89</sup> DIPPBA. *Legajo N° 2981*, 8 de mayo de 1975. Mesa “DS” Carpeta Varios. Subfondo División Central de Documentación, Registro y Archivo. Fondo Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

siguientes fueron testigos de un salto cualitativo en la participación del ejército en el plano de la seguridad interna. En octubre, como respuesta al intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte de Formosa por parte de Montoneros, el presidente del Senado Ítalo Luder –en reemplazo de Martínez de Perón, quien se encontraba de licencia– firmó el Decreto N° 2772. Esta norma extendió el área de intervención del ejército en materia de seguridad interna a todo el territorio nacional, con la finalidad de “aniquilar a la subversión”. Ese mismo mes, el flamante Consejo de Defensa emitió la *Directiva del Consejo de Defensa 1/75 (Lucha contra la subversión)*, en la que refrendaba el objetivo de aniquilamiento planteado en los decretos PEN de febrero y octubre. Otro hecho significativo ocurrió en septiembre, cuando tuvo lugar una reunión entre los comandantes de las tres armas y Luder (Novaro y Palermo, 2006) en la que, de acuerdo con diversas fuentes, se definió una estrategia que articularía prácticas represivas legales y clandestinas (Pontoriero, 2022b)<sup>90</sup>.

En la definición del diseño represivo a escala nacional tuvo mucho que ver otra normativa también sancionada en octubre de 1975. La *Directiva N° 404/75 (lucha contra la subversión)* llevaba la firma del comandante general del ejército, el general de brigada Jorge Rafael Videla. Allí, se otorgaba al arma terrestre “la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional” y se planteaba, además, la subordinación de las Fuerzas de Seguridad al actor militar. El despliegue represivo se organizó en base a jurisdicciones territoriales que recuperaban las que se habían estipulado en el marco del Plan CONINTES. Las “zonas de defensa” se correspondían con los cuatro cuerpos de ejército que habían sido redefinidos en la reforma de 1963<sup>91</sup>. Cada una de estas grandes jurisdicciones

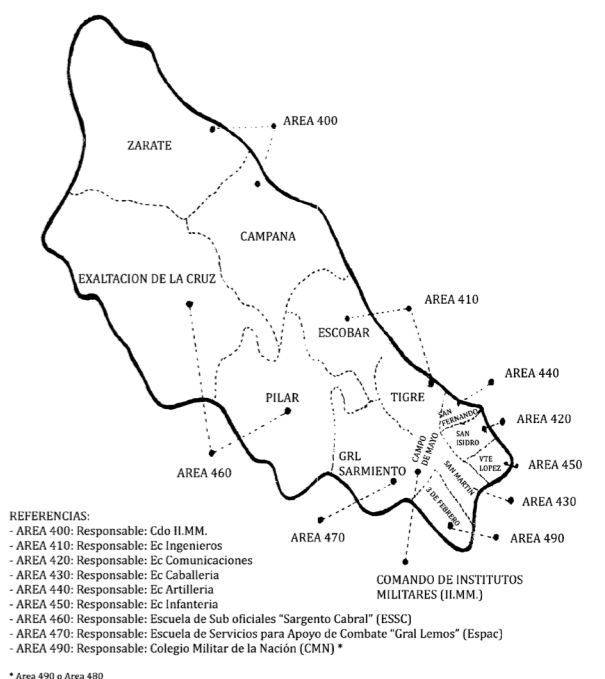
<sup>90</sup> Otro decreto que se sancionó en octubre de 1975 fue el N° 2770, por el cual se creó el Consejo de Seguridad Interna, dirigido por el presidente y del que formaban parte los ministros y los comandantes en jefe de las tres armas. La normativa también estipuló la formación del Consejo de Defensa, a cargo del ministro de la materia y del que participaban los comandantes generales de las tres armas y el Estado Mayor Conjunto de las FFAA (Ministerio de Defensa, 2010).

<sup>91</sup> Zona 1 –correspondiente a la región geográfica del Primer Cuerpo de Ejército– estaba conformada por la Capital Federal, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa; la Zona

estaba subdividida en subzonas y estas, en áreas que garantizaban un control más directo sobre el territorio. De acuerdo con la *Directiva N° 404/75*, al Comando de Institutos Militares –entonces a cargo del general Santiago Omar Riveros– se le asignó el control operacional de la guarnición de Campo de Mayo, mientras que el resto de su área de influencia pasaba a incorporarse a la Zona de Defensa 1<sup>92</sup>. La norma estipulaba cómo sería la articulación entre ambos comandos, que acordarían “las acciones a desarrollar en el área circundante de las respectivas jurisdicciones a efectos de lograr una adecuada seguridad y com-

2 –dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército– estaba integrada por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco; la Zona 3 –controlada por el Tercer Cuerpo de Ejército– se conformaba a partir de las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta y San Luis; la Zona 4 –bajo el control del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo– abarcaba un grupo de partidos del norte, noroeste y oeste de la provincia de Buenos Aires; y la Zona 5 –correspondiente al Quinto Cuerpo de Ejército– estaba compuesta por las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y los partidos del sur bonaerense afectados a esa jurisdicción militar (D’Andrea Mohr, 1999).

<sup>92</sup> Comando General del Ejército. *Directiva 404/75 (lucha contra la subversión)*, octubre de 1975, p. 13.



Plano de la Zona de Defensa 4, a cargo del Comando de Institutos Militares reconstruido por el Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Defensa de la Nación. Fuente: Archivo Nacional de la Memoria



plementación en las operaciones a realizar”<sup>93</sup>. Al Comando de Institutos Militares se le asignaba, además, la responsabilidad de organizar la “Brigada Mayo”, parte de la reserva del Comando General del Ejército, que contaría con una Fuerza de Tareas compuesta por tres equipos de combate<sup>94</sup>.

En diciembre de 1975, la guarnición participó en la represión del intento de copamiento del Batallón de Arsenales N° 601 “Domingo Viejobueno” de la localidad de Monte Chingolo, al sur del Gran Buenos Aires, organizado por el PRT-ERP. Alertado de un posible ataque sobre alguna de las grandes unidades militares del conurbano, el ejército se preparó para la ocasión reforzando la defensa de algunas de ellas y poniendo en alerta a otras que podrían dar apoyo (Plis-Steremberg, 2003). El 23 de diciembre, a pesar de los fuertes indicios que apuntaban a la infiltración en las filas del PRT-ERP, se inició la avanzada contra el batallón de Monte Chingolo con una fuerza compuesta por más de doscientos militantes, más grupos de apoyo distribuidos en las principales vías de acceso a la unidad. Si bien la columna logró romper el portón e ingresar a la unidad, tomando incluso el primer puesto de guardia, la defensa superó rápidamente con creces cualquier posibilidad de respuesta por parte del grupo militante: blindados, ametralladoras pesadas, incluso helicópteros participaron del lado del ejército, que sumó también el apoyo de tropas procedentes de Campo de Mayo y el Regimiento de Infantería N° 3 de La Tablada, gendarmería y policías del ámbito federal y provincial. Entre los muertos en los enfrentamientos dentro de la unidad y los que fueron muertos extrajudicialmente en las horas posteriores, el PRT-ERP contó más de cincuenta bajas.

### Campo de Mayo en el diseño del plan represivo dictatorial

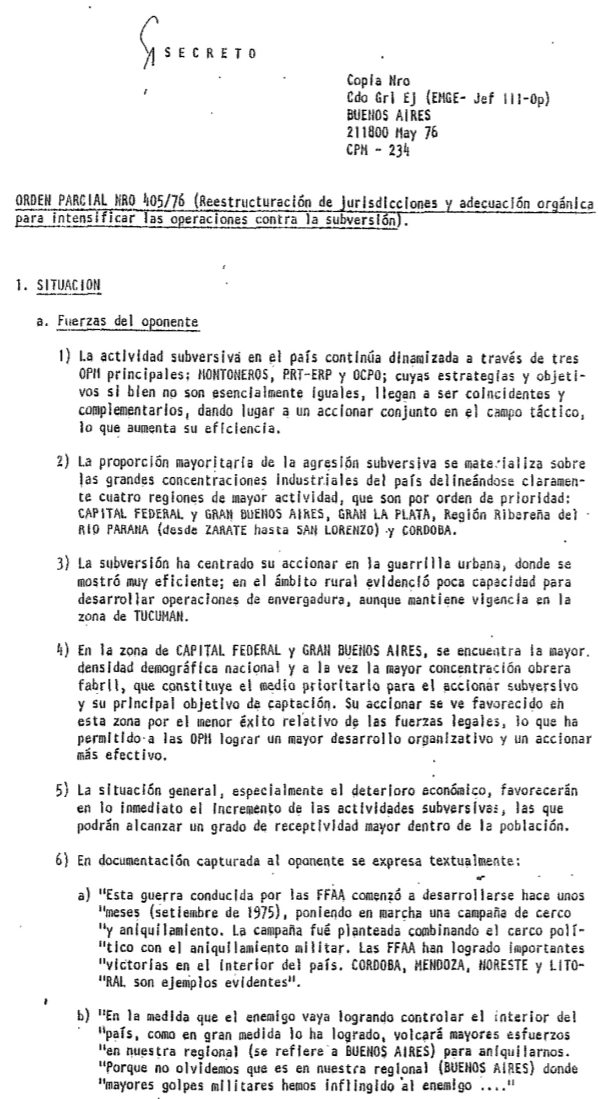
Los preparativos para un nuevo golpe de Estado comenzaron en los primeros meses de 1976. En el mes de febrero, el Estado Mayor

<sup>93</sup> Idem.

<sup>94</sup> Idem.

General del Ejército emitió el *Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)*. El documento explicitaba sus intenciones desde el encabezado, donde rezaba que “La JCG [Junta de Comandantes Generales] ante el grave deterioro que sufre la Nación ha resuelto adoptar las previsiones para el caso de tener que destituir al gobierno nacional y constituir un gobierno militar”<sup>95</sup>. Para ello, el ejército proponía un plan de acción para consumir el golpe de Estado que

<sup>95</sup> Estado Mayor General del Ejército. *Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)*, febrero de 1976, p. 1.



La Orden Parcial 405/76 determinó la creación de la Zona de Defensa 4, que otorgaba a Campo de Mayo la responsabilidad en la represión en la zona norte del conurbano bonaerense y las localidades de Zárate y Campana. Fuente: Archivo Nacional de la Memoria.

contenía distintos objetivos y estipulaba una distribución de funciones entre las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El Comando de Institutos Militares tenía reservado un lugar específico en la ejecución del plan. Su misión específica sería la de movilizar los efectivos de la fuerza de tareas que, de acuerdo con la Directiva N° 404/75, conformaban la tropa de combate de la Brigada “Mayo”, para “bloquear y eventualmente atacar la residencia presidencial de Olivos con la finalidad de lograr la detención del PEN y posibilitar su posterior traslado al lugar que determine el gobierno militar”<sup>96</sup>. Además, debía garantizar el control sobre las residencias de embajadores para evitar que opositores al régimen pudieran encontrar asilo político en ellas al comienzo de las acciones desistituyentes. Institutos Militares aportaría también “personal superior y subalterno de los institutos dependientes, al Cuerpo de Ejército 1”, jurisdicción con la que mantendría los vínculos más aceptados en materia antisubversiva. En el Anexo 4 del plan, que se abocaba a la ocupación y clausura de edificios públicos y sedes sindicales, se estipulaba que los distintos comandos de las zonas de defensa y el de Institutos Militares –que en la práctica asumía funciones muy similares a aquellos– avanzarían sobre las instalaciones asignadas “empleando para ello, si fuere necesario, el máximo de energía y eliminando todo posible intento de resistencia”<sup>97</sup>.

Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Campo de Mayo se incorporó activamente al plan represivo implementado por la dictadura. Varios sectores de la guarnición comenzaron a funcionar como espacios de detención clandestina a los que eran llevados activistas políticos y gremiales secuestrados en la zona de influencia de la guarnición. El más importante de ellos, “El Campito”, funcionó en el sector denominado “Plaza de Tiro”, a unos metros del polígono de tiro.

En mayo de 1976, en un escenario donde el terrorismo de Estado hacía estragos, se producirían algunos cambios en el diseño represivo que

<sup>96</sup> Ibidem, p. 6.

<sup>97</sup> Comando General del Ejército. “Anexo 4 (Ocupación y clausura de edificio públicos y sedes sindicales)” al *Plan de Ejército (Contribuyente a la Seguridad Nacional)*, febrero de 1976, p. 1.

afectarían directamente al Comando de Institutos Militares y a la guarnición a su cargo. A tres meses de haberse iniciado la dictadura, el Estado Mayor General del Ejército emitió un documento que modificaba la zonificación militar estipulada en la Directiva N° 404/75. La Orden Parcial 405/76 (*Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión*) dispuso la creación de la Zona de Defensa 4 y situó a su cabeza al Comando de Institutos Militares, que formalizaría así su accionar sobre un radio más amplio que los alrededores de Campo de Mayo<sup>98</sup>. El documento partía de un diagnóstico de las “fuerzas del oponente” donde se afirmaba que “la proporción mayoritaria de la agresión subversiva se materializa sobre las grandes concentraciones industriales del país”<sup>99</sup>. Además, sostenía que entre las cuatro regiones de mayor concentración obrera del país la máxima prioridad a los ojos del actor castrense correspondía a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. A partir de este diagnóstico se comprende mejor el sentido de la reestructuración de las jurisdicciones y el papel que asumían el Comando de Institutos Militares y Campo de Mayo en la llamada “lucha contra la subversión”.

Bajo la consigna de que los comandos de las zonas de defensa 1 y 4 intensificarán “gradual y aceleradamente la acción contrasubversiva” en un sector que se consideraba prioritario para el triunfo del plan represivo, la Orden Parcial 405/76 estipulaba que algunos partidos incluidos en la primera pasaran a la órbita de la segunda<sup>100</sup>. Además, el Comando de Instituto Militares asumía el control operacional sobre las unidades de la Dirección Nacional de Gendarmería, las Delegaciones de Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires bajo su jurisdicción<sup>101</sup>. A dos meses de comenzada la dictadura, Campo de Mayo se consolidaba como la cabecera principal de la “lu-

<sup>98</sup> Estado Mayor General del Ejército. *Orden Parcial N° 405/76 (Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión)*, mayo de 1976.

<sup>99</sup> Idem.

<sup>100</sup> Esos partidos, correspondientes a las zonas noroeste y norte del Gran Buenos Aires, eran 3 de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro, San Fernando, General Sarmiento, Tigre, Pilar, Escobar, Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana (Ibidem, p. 4).

<sup>101</sup> Estado Mayor General del Ejército. *Op. cit.*, p. 4.

cha contra la subversión” en un amplio corredor de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, los cambios estipulados en la *Orden Parcial 405/76* parecían ser más la confirmación de un estado de situación ya existente, incluso previo al golpe de Estado, que una novedad en el armado represivo. Algunos episodios que involucraron a la guarnición, y que pueden recuperarse a partir de documentación elaborada por la DIPPBA, abonan a esta conjetura. El 24 de febrero de 1976, un informe producido por la delegación Tigre de esa dependencia policial en el marco de la investigación sobre la muerte de dos agentes de la comisaría de Zárate mencionaba que “conforme a las directivas en vigencia fueron elevadas las actuaciones al Dr. Jefe de la Escuela de Caballería con asiento en Campo de Mayo”<sup>102</sup>. Con la sanción de la *Directiva N° 405/76*, esta unidad tendría formalmente a cargo el Área 430.

<sup>102</sup> DIPPBA. “Legajo Mesa 'DS' 7919”. Citado en Comisión Provincial de la Memoria. *Circuito Campo de Mayo*, s/f.

Los meses subsiguientes confirmarían la centralidad de Campo de Mayo y del Comando de Institutos Militares en el plan represivo de la última dictadura. A pesar de su reciente perfil orientado a la formación y el perfeccionamiento del personal del arma terrestre y los servicios de apoyo a las unidades de combate, la guarnición demostró pronto que las distintas escuelas que albergaba podían asumir funciones operativas en el territorio. A las miles de personas secuestradas en “El Campito”, en su gran mayoría asesinadas en los “vuelos de la muerte” que partían del aeródromo de la guarnición, se sumaron las que permanecieron recluidas en el Destacamento 201 de Inteligencia –conocido como “Las Casitas”–, la Prisión Militar de Encausados, el Hospital Militar –donde, además, funcionó una maternidad clandestina–, entre otros espacios de cautiverio que funcionaron en la guarnición. Se iniciaba así una nueva etapa en la historia de Campo de Mayo, alineada con los objetivos del terrorismo de Estado.



## Palabras finales

En este trabajo se reconstruyó y analizó el papel protagónico de Campo de Mayo en los grandes acontecimientos políticos de Argentina desde el surgimiento del peronismo hasta los primeros meses de la última dictadura militar. Si *Campo de Mayo en la historia política argentina (1901-1943)* había mostrado su transformación durante las primeras décadas del siglo XX, desde su función original como campo de maniobras hasta su constitución como uno de los principales centros de poder del ejército, esta segunda publicación enfocada en el período 1943-1976 revela la expansión de Campo de Mayo como un actor con una cuota de influencia decisiva en los alineamientos al interior de las Fuerzas Armadas y su impacto en el devenir de la política nacional.

Desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años sesenta, el comando y los jefes de unidades de la guarnición tuvieron capacidad permanente para condicionar tanto a los gobiernos democráticos –algunos de ellos en funciones gracias a la proscripción del peronismo– como a los regímenes militares que se sucedieron en el poder. La intervención política de Campo de Mayo a través de las décadas nunca expresó un sentido unívoco, sino que estuvo atravesada por contingencias y contradicciones que le dieron un carácter flexible y dinámico. Contra la presunción intuitiva de que, a lo largo de la historia, Campo de Mayo habría funcionado siempre como una especie de “usina de golpes de Estado”, en esta publicación se observó que el repertorio político de la guarnición y sus piezas internas fue más variado y menos previsible.

Como un espejo de lo que ocurría a escala de la gran política, la historia de Campo de Mayo estuvo signada por los dos problemas centrales del período estudiado: la “cuestión peronista” y

el tutelaje militar sobre el sistema político. Ambos asuntos sirven como claves de lectura para estudiar las posiciones tácticas y estratégicas de la guarnición frente a diversas coyunturas. A lo largo de tres décadas, Campo de Mayo gravitó como un factor de peso en los modos que el poder militar –y, en particular, el ejército– encontró para tramitar el fenómeno del peronismo y para mantener el arbitrio de las Fuerzas Armadas sobre los sucesivos gobiernos.

La relación entre Campo de Mayo y la figura ascendente de Perón se inauguró con la intentona de varios jefes de la guarnición para remover al coronel del gobierno en 1943, que acabó con el fracaso y descabezamiento del movimiento rebelde. Como volvería a hacerlo más adelante, Perón identificó tempranamente a Campo de Mayo como una potencial amenaza y por eso propició una alianza con su comandante, el coronel Eduardo Avalos, que fortaleció su propia posición dentro del régimen del 43. En plena Segunda Guerra, durante la crisis por la ruptura de relaciones entre la dictadura de Pedro Ramírez y las fuerzas del Eje, Perón usó la carta de su alianza circunstancial con Campo de Mayo para esmerilar al presidente y favorecer el ascenso del tándem Farrell-Perón.

Durante 1945, los jefes militares de Campo de Mayo se enfrentaron a un doble desafío. Por un lado, la presión creciente de la oposición civil para que las Fuerzas Armadas entregaran el poder, estimulada por el contexto internacional del triunfo de los Aliados. Por otro lado, el desgaste progresivo de la relación entre Avalos y Perón y su ruptura definitiva en octubre de aquel año, lo que generó diversas posiciones entre los jefes de la guarnición. En aquella ocasión primó la postura más combativa: una vez terminada la alianza con Perón, Campo de Mayo logró sacarlo del go-

bierno bajo la amenaza de movilizar tropas hacia la Capital.

Convertido en el nuevo hombre fuerte de la dictadura, Avalos no pudo dominar la situación ni siquiera por unos días. La efervescente oposición civil, sumada a sectores liberales de las fuerzas armadas, lo forzó a arrestar a Perón, lo que a su vez desató el peligro de una reacción obrera que Campo de Mayo no podría frenar sin cometer una masacre inconveniente para la continuidad del gobierno militar. Finalmente, Avalos negoció con Perón a espaldas de los jefes de la guarnición, a quienes les presentó los hechos consumados. El 17 de octubre de 1945, los enviados de Campo de Mayo a la Plaza de Mayo asistieron atónitos a la consagración del nuevo líder en los balcones de la Casa Rosada, frente a una multitud de trabajadores.

Un par de días después, Perón relevó a los jefes de la guarnición y los mandó a reparticiones lejanas y sin mando de tropa. En 1946, los oficiales involucrados en los sucesos de octubre fueron separados del ejército. En 1947, ya como presidente, Perón dispuso la relocalización de varias unidades de Campo de Mayo, bajo una política de disminución de su poder de fuego que se intensificaría en los años siguientes. La movilización popular de 1945 había traído a la escena a un actor que trastocaría por completo las variantes de la acción política de las fuerzas armadas en general y del ejército y Campo de Mayo en particular: el movimiento obrero organizado.

Durante la primera presidencia peronista, la renovación del arma de caballería conllevó una transformación cualitativa de los comandos y las unidades de combate de la guarnición, basada en el reemplazo del caballo por los tanques y transportes blindados. La conversión de la 1ª División

de Caballería en la 1ª División Blindada la posicionó como la primera gran unidad de su tipo, y los dos regimientos de caballería de Campo de Mayo pasaron a ser unidades blindadas que concentraban buena parte del poder de fuego del ejército. Así, paradójicamente, la capacidad de daño de la guarnición crecía mientras el gobierno se esforzaba en despolitizar y profesionalizar a sus unidades para evitar nuevos movimientos golpistas.

Aunque lo consiguió durante algunos años, las conspiraciones militares contra Perón volvieron a tomar vigor en 1951, con el movimiento rebelde liderado por el general retirado Benjamín Menéndez. El plan golpista contemplaba a Campo de Mayo, y en especial a la dotación de tanques del RC 8, como el elemento crucial para generar una ventaja militar que convenciera a otras unidades de plegarse a la insurrección. Sin embargo, tal como volvería a ocurrir más adelante, el fracaso de Menéndez en conseguir el control total del RC 8 demostró lo difícil que resultaba poner en marcha a unidades de la guarnición a partir de un liderazgo externo y contra sus “mandos naturales”. Aun cuando existía un intenso foco antiperonista en la caballería, Campo de Mayo no pudo ser movilizado como bloque por los golpistas y permaneció leal al gobierno.

Tras el intento fallido de Menéndez, Perón aceleró la depuración de los mandos de la guarnición y el traslado de unidades hacia plazas del interior para quitarle peso político y disminuir su poder de fuego. Durante 1955, la política peronista de contención sobre Campo de Mayo se demostró efectiva. Primero, en junio, la guarnición cumplió un papel destacado en la represión al intento de sublevación que se coronó con el bombardeo naval a Plaza de Mayo. Luego, durante el

golpe de septiembre, Campo de Mayo se mantuvo al margen del movimiento rebelde y participó con despliegue de tropas en las acciones de respuesta ordenadas por el gobierno peronista. No obstante, su intervención no fue tan enérgica como para sostener a Perón en el poder, lo que posiblemente ya resultara inviable a esa altura de los acontecimientos.

Durante la autodenominada “Revolución Libertadora”, en la que la armada ganó una cuota de influencia inédita hasta entonces, Campo de Mayo no fue ajeno al clima de división y fractura interna que afectaba al ejército. Los liberales antiperonistas clamaban por castigo a quienes no habían participado en el derrocamiento de Perón, mientras los oficiales “profesionalistas” asistían indignados a los ascensos por motivos políticos de los conspiradores. Esa división, que marcaría el tono de la disputa en la fuerza durante las dos décadas siguientes, quedó aún más expuesta desde junio de 1956, con los fusilamientos de los insurrectos liderados por el general peronista Juan José Valle, de los que Campo de Mayo fue escenario principal.

Aunque los rebeldes del 56 lograron cierto suceso durante algunas horas en la guarnición, gracias al apoyo de los suboficiales de la Escuela “Sargento Cabral”, el movimiento fracasó y se saldó con la ejecución marcial de seis sublevados en Campo de Mayo. La decisión de fusilarlos fue impuesta por la cúpula de la dictadura, a pesar de las resistencias del “mando natural” de la guarnición que bregaba por un juicio militar. La “Revolución Libertadora” interpretó los sucesos de junio como una amenaza para su continuidad en el poder y reaccionó en consecuencia. El levantamiento de 1956 llevó las divisiones en el ejército hasta un punto de no retorno, y lo sumergió en un estado deliberativo que se agudizaría durante los años siguientes.

Mientras las Fuerzas Armadas recalibraban sus propias relaciones internas, la “cuestión peronista” y la proscripción de Perón pesaban como el mayor problema para el sistema político, que involucraba tanto a los militares como a los partidos civiles con vocación de poder. Desde 1958, cuando Arturo Frondizi llegó a la presidencia gracias a un acuerdo táctico con Perón, los sec-

tores castrenses más antiperonistas se convirtieron en una amenaza permanente para el gobierno radical. El acuartelamiento del general Carlos Toranzo Montero, en septiembre de 1959, expuso la fragilidad del poder civil ante ese estado conspirativo en el ejército. Sin embargo, una vez más, Campo de Mayo y sus jefes “profesionalistas” se mantuvieron leales al gobierno, y llegaron a movilizar tanques para un eventual enfrentamiento con los rebeldes.

Aunque en esa ocasión se evitó el derramamiento de sangre, Toranzo Montero emergió como el hombre fuerte del gobierno y, bajo su comandancia, el ejército se embarcó en una nueva misión que definiría su nuevo papel en la vida política nacional: la lucha contra el “enemigo interno” del “comunismo” bajo la doctrina de la “guerra revolucionaria”. Este paradigma justificaba la vigilancia y presión del generalato sobre el poder civil y su dominio sobre la represión política en el territorio nacional, especialmente contra el peronismo.

La reacción interna contra el torancismo provino de oficiales “legalistas”, que también eran antiperonistas pero consideraban que el activismo golpista de Toranzo Montero había desviado al ejército de su camino de profesionalización y modernización. Este sector, más tarde conocido como el bando “azul”, concentraba sus mayores apoyos en el arma de caballería y encontró en Campo de Mayo la principal base de operaciones para apuntalar su control sobre el ejército.

Después de 1961, la salida de Toranzo Montero del gobierno de Frondizi no acabó con las divisiones militares. Aunque la causa de la “amenaza comunista” y el veto a Perón convocaban a casi todos los sectores del ejército, existían diferencias en torno a la continuidad del presidente. En busca de asegurar lealtades, el gobierno repartió promociones que favorecieron a los “legalistas” de la caballería y, en particular, al general Juan Carlos Onganía, designado como comandante de la poderosa 1ª División Blindada de Campo de Mayo. Desde su puesto en la guarnición, Onganía construiría un núcleo de poder que pronto lo llevaría a liderar una nueva dictadura.

En marzo de 1962, cuando la armada y los sectores liberales del ejército se volcaron a las calles

para derrocar a Frondizi, Campo de Mayo le sirvió al presidente como uno de sus principales sostenes. Tal como había ocurrido en 1955, frente a un nuevo intento golpista, otra vez la guarnición se mantuvo leal, y los comandantes “legalistas” de Campo de Mayo permanecieron listos hasta último momento para recibir la orden gubernamental de reprimir a los rebeldes. Pero Frondizi desistió de forzar un enfrentamiento armado, lo que dio una ventaja decisiva a los golpistas. Una vez que su suerte estuvo echada, los jefes de Campo de Mayo redirigieron rápidamente sus esfuerzos a imponer sus recetas y nombres para la sucesión que comenzaba.

Durante el gobierno tutelado de José María Guido, el enfrentamiento entre los sectores antiperonistas radicalizados del ejército y el sector “legalista”, con base principal en Campo de Mayo y con predominancia de la caballería, se tornó más explícito que nunca. Algunas unidades de la guarnición llegaron a movilizar tropas durante las sucesivas crisis militares de abril y agosto de 1962, en las que la disolución de las cadenas de mandos, el estado deliberativo y la indisciplina alcanzaron un nivel inédito en el ejército. Esa situación marcó un punto de quiebre para los “legalistas”, que a partir de entonces se embarcaron en un paulatino movimiento de rebelión liderado por el general Onganía.

Así, durante 1962, Campo de Mayo se convirtió en el centro de operaciones de un verdadero estado mayor paralelo que se dio a conocer como el bando “azul” durante los combates de septiembre de ese año, en los que los “colorados” fueron vencidos gracias al poder de fuego y la movilidad de los tanques blindados de la caballería que había aportado la guarnición. En el terreno político, los planes conspirativos del grupo liderado por Onganía, con su comando en Campo de Mayo, lograron cumplir con todos sus objetivos. Los “azules” promovían una salida electoral como medio para perseguir su principal objetivo: terminar con la politización y el “factor anarquizante” en el ejército. En abril de 1963, cuando los “colorados” intentaron una vez más la vía golpista, las tropas y tanques de Campo de Mayo volvieron a frustrar los planes rebeldes y resultaron claves para recuperar las posiciones que habían

copado los golpistas. Otra vez la guarnición había actuado como garante de la continuidad de un gobierno acechado.

En octubre de 1963, el radical Arturo Illia asumió la presidencia con el general Onganía como su máximo garante. Para entonces, los “azules” de la caballería habían impuesto su hegemonía en el ejército y, bajo liderazgo de Onganía, iniciaron un nuevo proceso de modernización y reestructuración de la fuerza que impactó directamente en Campo de Mayo. Durante la primera mitad de la década de 1960, la guarnición sintió los efectos de la vocación del comando del ejército por descentralizar su despliegue territorial. A la vez que experimentaba la salida de sus unidades de blindados, que se completaría en 1967, Campo de Mayo iniciaba una nueva etapa con el Comando de Institutos Militares como su comando principal, y con la promesa de cumplir un papel destacado en la cada vez más relevante “guerra contra la subversión”.

Para 1966, Onganía provocó una ruptura con Illia y logró alinear a distintos sectores de las Fuerzas Armadas para dar un golpe institucional tras la bandera de la lucha contra el “comunismo”. La reestructuración orgánica del ejército le había restado poder de fuego a Campo de Mayo y había disminuido su peso como factor de amenaza sobre la política. Sin embargo, a partir de entonces, la guarnición mantendría su centralidad como escenario principal de deliberaciones y toma de decisiones entre los altos mandos castrenses y la camarilla militar.

Durante el golpe de Onganía, Campo de Mayo jugó una vez más en favor del bando leal al gobierno de turno, pero la caída de Illia ya era un hecho irreversible. Durante los primeros años de la autodenominada “Revolución Argentina”, Onganía gobernó con los atributos de un autócrata y logró domesticar los conflictos internos en el ejército que habían desestabilizado a sus antecesores. Sin embargo, la dinámica nacional provocó un nuevo vuelco a partir de 1969, con una fuerte escalada de la conflictividad obrera y social y, en especial, con los sucesos del “Cordobazo”. La convulsión nacional expuso las debilidades de la dictadura y sirvió como marco para que un nuevo líder surgiera desde el seno del ejército como



alternativa y desafío a Onganía: su antiguo aliado Alejandro Lanusse, otro de los viejos referentes del bando “azul” que habían crecido políticamente en la actividad conspirativa desde Campo de Mayo.

En 1970, tras la conmoción oficial por el asesinato de Pedro Aramburu y la aparición en escena de la organización Montoneros, el golpe dentro del golpe por fin se consumó. En junio de aquel año, Campo de Mayo fue el espacio en el que el generalato, bajo liderazgo de Lanusse, decidió remover a Onganía y poner en marcha el operativo golpista. El contexto y las relaciones de poder ya no eran las de 1943 ni 1955. Esta vez Campo de Mayo no pesó en el golpe por su poder de fuego ni por su capacidad para movilizar tropas, sino como espacio privilegiado para la toma de decisiones, un papel que la guarnición había ganado para sí tras la derrota de los “colorados”. En su camino hacia el poder, Lanusse propició ese rol para la guarnición y, tras la caída de Onganía, volvió a convertir a su residencia en Campo de Mayo en ámbito para las deliberaciones que acabaron con la remoción del sucesor, Roberto Levingston.

Durante la dictadura que encabezó Lanusse, la última de la autodenominada “Revolución Argentina”, la represión contra distintas manifestaciones políticas creció en intensidad y asumió formas novedosas, como la creación de un tribunal específico para perseguir a la “subversión”. A tono con su nuevo lugar en el esquema de poder castrense, Campo de Mayo no tendría mayor participación en las acciones represivas del período. No obstante, la ligazón de la guarnición con todo un historial de asonadas militares durante las décadas previas la convertirían en blanco de múltiples ataques de las nacientes organizaciones armadas.

El triunfo de Cámpora significó un breve paréntesis en la escalada contrainsurgente, aunque no sucedió lo mismo con los conflictos políticos que atravesaban entonces a la Argentina. Ni siquiera el esperado retorno de Perón, en el que se depositaban las expectativas de paz social de amplios sectores, logró frenar la dinámica del

enfrentamiento político. Durante su presidencia comenzó una ofensiva contra las organizaciones armadas que daría un salto cualitativo luego de su muerte, que se produciría en un clima político signado por la violencia. Los últimos meses de 1974 y los primeros de 1975, ya con María Estela Martínez de Perón en el gobierno, marcaron un salto cualitativo en la persecución contra distintas expresiones políticas que vendría de la mano de un marco de excepcionalidad jurídica creciente. En el mes de febrero, la provincia de Tucumán se constituyó en el laboratorio donde el ejército puso a prueba una variedad de técnicas represivas clandestinas con la defensa de la patria como bandera. Para mediados de ese año, como se demostró a partir de la evidencia documental, Campo de Mayo ya participaba activamente de la “guerra contra la subversión” como una suerte de articulador entre distintas dependencias policiales de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.

El diseño de la ofensiva represiva de las Fuerzas Armadas a escala nacional, con el ejército a la cabeza, reservaría un lugar destacado al Comando de Institutos Militares, como quedó registrado en la *Directiva 404/75*. También tendría un papel relevante en la planificación del golpe de Estado de marzo de 1976, en la que se le asignó nada menos que la misión de avanzar sobre la quinta presidencial de Olivos con la finalidad de “bloquearla” y, eventualmente, atacarla para detener a la titular del PEN. Iniciada la dictadura, con la creación de la Zona de Defensa 4 se formalizaría lo que en la práctica ya parecía ser un hecho consumado: la responsabilidad primaria del Comando de Institutos Militares en la represión del extenso cordón industrial formado por la zona norte del conurbano bonaerense y las localidades de Zárate y Campana. En esta empresa, Campo de Mayo y sus distintas escuelas funcionarían como el principal dispositivo de secuestro, tortura y exterminio de las diferentes expresiones políticas que existían en la jurisdicción, garantizando así el cumplimiento de los objetivos del terrorismo de Estado.

# Bibliografía

- Águila, G. (2013). “La represión en la historia reciente argentina: fases, dispositivos y dinámicas regionales”, en Águila, G. y Alonso, L. (comps.): Procesos represivos y actitudes sociales: entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur. Buenos Aires, Prometeo.
- Alonso, E. (1972). “Hace diez años: la caída de Frondizi”. *Todo es Historia*, N° 59, Buenos Aires.
- Antúnez, D. y Gerchunoff, P. (2001). “De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo” en Torre, J. C. (dir.) *Nueva Historia Argentina vol. VIII: Los años peronistas*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Archivo Nacional de la Memoria (2014). *Plan CONINTES. Represión política y sindical*. Buenos Aires: Secretaría de Derechos Humanos.
- Archivo Nacional de la Memoria (2015). *Bombardeo del 16 de junio de 1955*. Buenos Aires: Secretaría de Derechos Humanos.
- Archivo Nacional de la Memoria (2022). *El tribunal rodante. Militancia y represión en los documentos del Camarón*. Buenos Aires: Secretaría de Derechos Humanos.
- Ayala Tomasini, N. y Chiarini, S. (2022). “La construcción del ‘enemigo interno’ en la Argentina. Hitos históricos y circulación de saberes”, en Archivo Nacional de la Memoria, *Investigar en el Archivo. La doctrina contrainsurgente en Argentina*, Dossier de investigación N°2, agosto 2022, Secretaría de Derechos Humanos.
- Belini, C. y Korol, J. C. (2012). *Historia económica de la Argentina en el siglo XX*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Brennan, J. y Gordillo, M. (2008). *Córdoba rebelde. El Cordobazo, el clasismo y la movilización social*. Buenos Aires: De la Campana.
- Caimari, L. (1995). *Perón y la Iglesia Católica*. Buenos Aires: Ariel.
- Castex, M. (1981). *El escorial de Onganía*. Buenos Aires: Hespérides.
- Cisneros, A. y Escudé, C. (2000). *Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
- Cornut, H. (2021). *Ejército y pensamiento militar en el siglo XX. Del Auftragstaktik a la guerra revolucionaria*. Buenos Aires: Argentinidad.
- D'Andrea Mohr, J. L. (1999). *Memoria debida*. Buenos Aires: Colihue.
- D'Antonio, D. y Eidelman, A. (2016). “El fuero antissubversivo y los consejos de guerra contra civiles en la Argentina de los años 70”. *Tel Aviv University, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*; Vol. 27, N° 2, Año 12.
- De Riz, L. (2007). *Historia argentina 8. La política en suspenso: 1966-1976*. Buenos Aires: Paidós.
- Eidelman, A. (2010). *El desarrollo de los aparatos represivos del Estado argentino durante la “Revolución Argentina”, 1966-1973* [Tesis de Doctorado en Historia]. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Disponible en: <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1412>
- Ferla, S. (1972). *Mártires y verdugos. La insurrección de Valle y los 27 fusilamientos*. Buenos Aires: Revelación (3ª edición).
- Fraga, R. (1988). *Ejército: del escarnio al poder (1973-1976)*. Buenos Aires: Planeta.
- Franco, M. (2012). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión” (1973-1976)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Franco, M. y Pontoriero, E. (2013). “El plan CONINTES”. en AA. VV., *Lucha Armada*, Buenos Aires: Ejercitar la memoria editores.
- Garaño, S. (2016). “Las formas de la represión política en el ‘teatro de operaciones’ del Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977)”. En Águila, G.; Garaño, S. y Scatizza, P. (comps.). *Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a cuarenta años del golpe de Estado*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Garaño, S. (2018) “El Operativo Independencia: un teatro devenido en laboratorio del terrorismo de Estado (Tucumán, 1975-1977)”. *Instituto Superior del Profesorado N° 3, Síntesis de Historia*. Año 6, N° 41.
- González, H. (2007). *Perón, fragmentos de una vida*. Buenos Aires: Colihue.
- Gordillo, M. (2003). “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-1973”. En James, D. (coord.). *Nueva historia argentina: Violencia, proscripción y autoritarismo 1955-1976*. Buenos Aires: Sudamericana.
- James, D. (1990). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Jemio, A. (2021). *Tras las huellas del terror: El Operativo Independencia y el comienzo del genocidio*. Buenos Aires: Prometeo.
- Larraquy, M. (2017). *Argentina. Un siglo de violencia política*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Luna, F. (1983). *Golpes militares y salidas electorales*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Luna, F. (1984 [1971]). *El 45*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Mazzei, D. (2012). *Bajo el poder de la caballería. El ejército argentino (1962-1973)*. Buenos Aires: Eudeba.
- Merele, H. (2017). *La “depuración” ideológica del peronismo en General Sarmiento (1973-1974). Una aproximación al proceso represivo durante los años setenta constitucionales a partir del caso de Antonio Tito Deleroni*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento; Posadas: Universidad Nacional de Misiones; La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Ministerio de Defensa (2010). *Relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas 1976-1983*. Buenos Aires: Ministerio de Defensa de la Nación.



- Nemec, D. (2019). *Pueblos de la "guerra". Pueblos de la "paz". Los pueblos rurales del Operativo Independencia (Tucumán, 1976-1977)*. San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán.
- Novaro, M. y Palermo, V. (2006). *La dictadura militar 1976-1983: del golpe de Estado a la restauración democrática*. Buenos Aires, Paidós.
- Novaro, M. (2010). *Historia de la Argentina: 1955-2020*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Orona, J. (1966). *La logia que derrocó a Castillo*. Buenos Aires: edición del autor.
- Plis-Sterenber, G. (2003). *Monte Chingolo: La mayor batalla de la guerrilla argentina*. Buenos Aires: Planeta.
- Pontoriero, E. (2022a). "La doctrina argentina de guerra interna en la era de la contrainsurgencia global (1955-1983)". *Sudamérica. Revista de Ciencias Sociales*, Año 2022, Mar del Plata.
- Pontoriero, E. (2022b). *La represión militar en la Argentina (1955-1976)*. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento; Posadas: Universidad Nacional de Misiones; La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Potash, R. (1980 [1971]). *El ejército y la política en la Argentina 1928-1945. De Perón a Frondizi*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Potash, R. (1981). *El ejército y la política en la Argentina 1945-1962. De Perón a Frondizi*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Potash, R. (1994). *El ejército y la política en la Argentina 1962-1966. De la caída de Frondizi a la restauración peronista*. Primera parte. Buenos Aires: Sudamericana.
- Rouquié, A. (1983). *Poder militar y sociedad política en la Argentina II. 1943-1973*. Buenos Aires: Emecé.
- Roth, R. (1981): *Los años de Onganía*. Buenos Aires: La Campana.
- Ruiz Moreno, I. (1998). *La marina revolucionaria 1874-1963*. Buenos Aires: Planeta.
- Ruiz Moreno, I. (1997). *La neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial*. Buenos Aires: Emecé.
- Salas, E. (2014). *De resistencia y lucha armada*. Buenos Aires: Punto de Encuentro.
- Servetto, A. (2010). *73/76. El gobierno peronista contra las "provincias montoneras"*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Smulovitz, C. (1991). "En busca de la fórmula perdida: Argentina, 1955-1966". *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales*, Vol. 31, N° 121, Buenos Aires.
- Tcach, C. (2003). "Golpes, proscripción y partidos políticos" en James, D. (comp). *Nueva Historia Argentina. Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Torre, J. C. (1990). *La vieja guardia sindical y Perón*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Torre, J. C. (2001). "Introducción a los años peronistas" en Torre, J. C. (dir.) *Nueva Historia Argentina vol. VIII: Los años peronistas*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Walsh, R. (1957). *Operación Masacre*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Zanatta, L. (2018 [1994]). *Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo 1930-1943*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

En los treinta años que siguieron al golpe de Estado de junio de 1943, las Fuerzas Armadas experimentaron una serie de transformaciones producto de procesos locales y globales. El tramo final de la Segunda Guerra Mundial y la victoria final de los aliados, el inicio de la Guerra Fría y el desarrollo de una doctrina contrainsurgente impactaron de forma directa en los modos en que el actor militar, y en particular el ejército, entendió su rol en la vida política argentina. En un escenario continental dominado por los Estados Unidos, la “lucha contra el comunismo” se convirtió en un objetivo común para las distintas facciones castrenses que se habían disputado el poder en los años previos.

La guarnición de Campo de Mayo no fue ajena a estos procesos que surcaban el horizonte político de la época. Los cambios en materia armamentística que consolidó la Segunda Guerra Mundial se expresaron, por ejemplo, en el reemplazo de las unidades a caballo por los modernos tanques y blindados. Esto no solo significó una modificación del paisaje interno de la guarnición: las nuevas tecnologías militares serían claves en el conflicto al interior de las filas castrenses que enfrentó a “azules” y “colorados” a fines de la década de 1960. Poco después, se produjo una amplia reestructuración del arma terrestre que afectaría a Campo de Mayo, que asumiría un perfil vinculado a la formación del personal del ejército.

No obstante, como pronto quedó en evidencia, la guarnición no perdería su capacidad de

combate y de incidir en la política nacional. En el escenario contrainsurgente que se consolidó en la Argentina entre mediados de la década de 1950 y comienzos de la de 1980, y que con algunas excepciones involucró a gobiernos civiles y dictaduras, Campo de Mayo funcionó como un núcleo de poder e influencia al que acudían los aspirantes de golpistas, como un ámbito de deliberación castrense y como un instrumento para la represión de los “enemigos internos” de turno. Con el inicio de la última dictadura cívico-militar y el despliegue del terrorismo de Estado, la última de esas facetas prevalecería.

Continuación de Campo de Mayo en la historia política argentina (1901-1943), esta publicación recorre una serie de acontecimientos y procesos en los que Campo de Mayo tuvo participación entre 1943 y 1976, insertándolos en una trama política más amplia. El nacimiento y consolidación del peronismo, los intentos de golpe de Estado contra Perón, las dictaduras y gobiernos constitucionales posteriores a su derrocamiento, la “Primavera Camporista”, el retorno del viejo líder y los primeros episodios del terrorismo de Estado son algunos de los momentos que se abordan. A partir de una mirada de largo plazo, la propuesta es comprender los modos en que Campo de Mayo se insertó en la dinámica política nacional hasta convertirse en uno de los núcleos del dispositivo represivo clandestino estatal de la última dictadura.